



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO ESCUELA DE POSGRADO



MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

**La indebida aplicación judicial de los criterios para resolver
los procesos de amparo contra resoluciones judiciales y la
vulneración del principio de seguridad jurídica en el distrito
de Chiclayo en los años 2014 a 2017**

TESIS

**PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CONSTITUCIONAL Y
GOBERNABILIDAD**

AUTORA:

Abg. Primo Vásquez María Celia

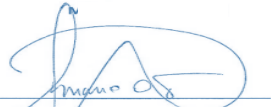
ASESOR:

Dr. Carlos Alfonso Silva Muñoz

LAMBAYEQUE – PERÚ-2019

La indebida aplicación judicial de los criterios para resolver los procesos de amparo contra resoluciones judiciales y la vulneración del principio de seguridad jurídica en el distrito de Chiclayo en los años 2014 a 2017

PRESENTADA POR:


.....

Abg. María Celia Primo Vásquez

AUTORA


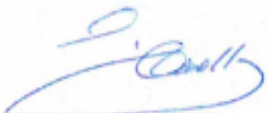

.....

Dr. Carlos Alfonso Silva Muñoz

ASESOR

Presentada a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo para optar el Grado Académico de: MAESTRA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD.

APROBADO POR:


.....
Dr. Freddy Widmar Hernández Rengifo
PRESIDENTE
.....
M. Sc. Luis Armando Hoyos Vásquez
SECRETARIO
.....
M. Sc. Carlos Manuel Antenor Cevallos de Barrenechea
VOCAL

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

150

Siendo las 17.50 horas del día Cajamarca de Mayo del año Dos Mil diecinueve, en la Sala de Sustentaciones de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, se reunieron los miembros del jurado, designados mediante Resolución N° 0550-2019-EPG de fecha 09 de mayo del 2019, conformado por:

Dr. Freddy Widomar Hernández Beagiva PRESIDENTE (A)

M. Sc. Luis Armando Rojas Vasquez SECRETARIO (A)

M. Sc. Carlos Manuel Arana Centeno de Baunmeister VOCAL

Dr. Carlos Alfonso Silva Murillo ASESOR (A)

con la finalidad de evaluar la tesis titulada "La incidencia aplicativa judicial de los criterios para resolver los litigios de amparo contra resoluciones judiciales y la vulneración del derecho de seguridad jurídica en el Distrito de Chiclayo en los años 2014 a 2017"

presentado por el (la) tesisista Maria Celia Primo Vasquez sustentación que es autorizada mediante Resolución N° 0550-2019-EPG de fecha 09 de mayo del 2019

El Presidente del jurado autorizó el inicio del acto académico y después de la sustentación, los señores miembros del jurado formularon las observaciones y preguntas correspondientes, las mismas que fueron absueltas por el (la) sustentante, quien obtuvo 81 puntos que equivale al calificativo de Muy bueno

En consecuencia el (la) sustentante queda apto (a) para obtener el Grado Académico de Maestría en Derecho con mención en Constitucional y gobernanza

Siendo las 19.00 horas del mismo día, se da por concluido el acto académico, firmando la presente acta.

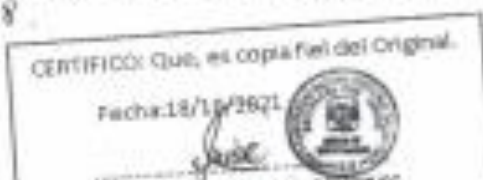
PRESIDENTE

SECRETARIO

VOCAL

ASESOR

Se reusa designación del Jurado mediante Resolución N° 1437-2013-EPG de fecha 10 de Julio del 2018



DEDICATORIA

A mi esposo Junior y a mis hijos Ghya Valentina y Salvador, por ser genuina motivación para salir adelante y buscar una mejora constante en pro de nuestro bienestar.

AGRADECIMIENTO

A mis padres Rogelio y Ana, por el tiempo, sus consejos y los valores inculcados, por creer siempre en mí y ser una fuente de inspiración constante en cada meta cumplida.

ÍNDICE

DEDICATORIA.....	IV
AGRADECIMIENTO	V
ÍNDICE.....	VI
RESUMEN	XIII
ABSTRACT	XIV
INTRODUCCIÓN.....	15
CAPÍTULO I.....	17
ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO	17
1. Realidad problemática.	17
1.1. Planteamiento del problema.....	17
1.2. Formulación del problema	19
2. Justificación e importancia del estudio.....	19
2.1. Justificación	19
2.2. Importancia	21
3. Objetivos.....	21
3.1. Objetivo general.....	21
3.1.1. Objetivos específicos.....	21
4. Hipótesis	22
5. Variables.....	22
5.1. Variable independiente	22
5.2. Variable dependiente	22
6. Métodos y procedimientos para la recolección de datos.	26
6.1. Métodos.....	26
6.1.1. Métodos de la ciencia en general	26
6.1.2. Métodos específicos del derecho.....	27
7. Procedimientos para la recolección de datos.	28
7.1. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos.	28
CAPÍTULO II.....	30
EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO	30
1. Garantías Constitucionales	31

2.	Los Procesos Constitucionales	31
2.1.	Principios del proceso constitucional	32
2.1.1.	Principio de dirección judicial del proceso	33
2.1.2.	Principio de gratuidad en la actuación del demandante	34
2.1.3.	Principio de economía procesal	34
2.1.4.	Principio de inmediación	35
2.1.5.	Principio de socialización del proceso	36
2.1.6.	Principio de impulso procesal de oficio	37
2.2.	Los procesos constitucionales en el código procesal constitucional.	38
2.2.1.	Proceso de Habeas Corpus	38
2.2.2.	Proceso de Amparo	38
2.2.3.	Proceso de Habeas Data	38
2.2.4.	Proceso de Cumplimiento	39
2.2.5.	Proceso de Acción Popular	39
2.2.6.	Proceso de Inconstitucionalidad	39
2.2.7.	Proceso Competencial	39
3.	Antecedentes del Proceso Constitucional de Amparo	40
4.	Concepto de amparo	43
5.	Tipos de amparo	45
5.1.	El Amparo Común U Ordinario	45
5.2.	El Amparo Judicial	45
5.3.	El Amparo Legal	46
5.4.	El Amparo Contra Amparo	49
6.	Presupuestos para su procedencia	50
6.1.	Derecho Conculcado de carácter constitucional	50
	De acuerdo con Eguiguren (2002) indica que:	51
6.2.	Acto Lesivo	52
6.3.	Amenaza cierta e inminente	54
6.4.	Violación de un Derecho Constitucional	55
7.	Requisitos de Procedencia	55
7.1.	Contenido Constitucional del Derecho Invocado	56

7.2.	No existencia de vías Igualmente Satisfactorias.....	57
7.3.	Cuando se haya recurrido a otro proceso judicial.....	57
7.4.	Agotamiento de vías previas.....	58
7.5.	No haya cesado la amenaza o el perjuicio no sea irreparable	58
7.6.	No se trate de una resolución firme de otro proceso constitucional ni haya litispendencia.....	60
7.7.	No se trate de resoluciones definitivas del Consejo Nacional de la Magistratura.....	60
7.8.	No se trate de conflictos entre entidades de derecho público interno.	60
7.9.	No haya vencido el plazo interponer la demanda.....	61
8.	Proceso de amparo en la legislación comparada	61
8.1.	Bolivia	61
8.2.	Ecuador.....	63
8.3.	Chile.....	64
8.4.	Colombia	65
8.5.	Brasil.....	66
8.6.	Paraguay	66
8.7.	Argentina	67
8.8.	España.....	68
CAPÍTULO III		70
EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES.....		70
1.	El amparo contra resoluciones judiciales	71
1.1.	Tesis negativas.....	72
1.2.	Tesis permisiva.....	72
1.2.1.	Tesis permisiva amplísima.....	73
1.2.2.	Tesis permisiva amplia.	73
1.2.3.	Tesis permisiva restringida	74
2.	Amparo contra resoluciones judiciales en el Perú.....	75
2.1.	La Ley N° 23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo	75
2.2.	El Código Procesal Constitucional, Ley N° 28237	76
3.	Resoluciones Judiciales Cuestionadas Vía Amparo	77
3.1.	Decretos	77

3.2.	Autos.....	77
3.2.1.	Autos que ponen fin al proceso.....	78
3.2.2.	Autos interlocutorios.....	78
3.3.	Sentencias	79
4.	Fundamento extrajurídico del proceso de amparo contra resoluciones judiciales.	79
5.	Procedencia del amparo contra resoluciones judiciales	80
6.	Criterios para la procedencia de demandas de amparo contra resoluciones judiciales.	81
6.1.	Criterios Establecidos por el Código Procesal Constitucional	81
6.1.1.	Tutela Procesal Efectiva	82
6.1.2.	Debido Proceso	83
6.1.2.1.	Contenido	85
6.1.2.2.	Clases	86
6.1.2.2.1.	El debido proceso sustantivo	86
6.1.2.2.2.	El debido proceso adjetivo	87
6.1.3.	Diferencias entre tutela judicial efectiva y debido proceso	87
7.	Canon Interpretativo para resolver los procesos de Amparo.....	88
7.1.	Examen de razonabilidad.....	88
7.2.	Examen de coherencia.....	89
7.3.	Examen de suficiencia.....	89
8.	Proceso de amparo contra resoluciones emanadas de procesos constitucionales	90
8.1.	Proceso de Amparo contra amparo.....	92
8.2.	Proceso de amparo contra Hábeas Corpus	93
8.3.	Proceso de amparo contra Hábeas Data	94
CAPÍTULO IV		95
EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA		95
1.	Concepto.....	96
2.	Niveles de la Seguridad Jurídica	97
2.1.	Primer Nivel – El “Quien”.....	97
2.2.	Segundo Nivel – El “Cómo”	98
2.3.	Tercer Nivel – “El qué”	99
3.	Manifestaciones o indicadores del principio de Seguridad Jurídica.....	100

3.1. Ignorancia del Derecho.....	100
3.2. Cosa Juzgada	101
3.3. Irretroactividad y derechos adquiridos	103
4. Seguridad Jurídica en los estamentos Estatales	105
4.1. Seguridad Jurídica en el poder legislativo	105
4.2. Seguridad Jurídica en el poder ejecutivo	107
4.3. Seguridad Jurídica en el poder judicial.....	109
5. Cosa Juzgada como expresión de Seguridad Jurídica	111
5.1. Cosa Juzgada Formal.....	114
5.2. Cosa Juzgada Material.....	115
6. Efectividad de las Resoluciones Judiciales y Seguridad Jurídica.....	115
CAPÍTULO V.....	120
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS	120
1. Trabajo de Campo Realizado	120
2. Población	121
3. Muestra	121
4. Presentación de Resultados	121
4.1. Primera Variable:	121
4.2. Variable dependiente	138
5. Discusión de resultados	145
CONCLUSIONES.....	155
RECOMENDACIONES	157
BIBLIOGRAFÍA	158

Índice de tablas

Tabla 1	122
Tabla 2	123
Tabla 3	124
Tabla 4	126
Tabla 5	127
Tabla 6	130
Tabla 7	133
Tabla 8	135
Tabla 9	136
Tabla 10	138
Tabla 11	139
Tabla 12	141
Tabla 13	142
Tabla 14	144

Índice de gráficos

Gráfico 1	122
Gráfico 2	123
Gráfico 3	125
Gráfico 4	126
Gráfico 5	129
Gráfico 6	132
Gráfico 7	134
Gráfico 8	135
Gráfico 9	137
Gráfico 10	138
Gráfico 11	140
Gráfico 12	141
Gráfico 13	143
Gráfico 14	144

RESUMEN

A través del presente trabajo de investigación, se pretenderá demostrar cómo el amparo contra resolución judicial, que resulta ser una figura excepcional, puede afectar la efectividad del sistema judicial si es que, para su admisión o resolución, el juez no aplica los criterios establecidos por la justicia constitucional, o lo hace indebidamente.

Lo usual es que al obtener una decisión que ha agotado todas las vías ordinarias y lograr una resolución definitiva, pueda buscarse la efectividad del derecho reconocido o constituido en la misma, sin embargo, no siempre ello corresponde a la realidad. No es objetivo del investigador desmerecer la utilización del amparo contra resolución judicial, pero sí mostrar un serio desacuerdo con la indebida aplicación de los criterios antes aludidos o la inaplicación de éstos, por parte del juez al resolver la admisión o estimación de la demanda.

En esa línea, se ha podido evidenciar a través de información estadística aplicada al caso, cómo en su mayoría se admitieron demandas de amparo contra resoluciones judiciales y luego en resolución definitiva fueron declaradas improcedentes, incluso en dicho supuesto el tránsito entre uno y otro acto procesal ha demandado un lapso de uno a tres años y en otros casos superando dicho límite. Asimismo, en los pronunciamientos que estimaron la demanda, no se efectuó una debida aplicación de los lineamientos determinados por el Tribunal Constitucional, como es la razonabilidad, coherencia y suficiencia, limitándose a reevaluar los fundamentos que fueran discutidos en la vía ordinaria.

En ambos casos, se verifica una clara afectación al Principio de Seguridad Jurídica manifestada por medio del principio de Cosa Juzgada material en tanto esta última imposibilita que una discusión jurídica se alargue indefinidamente, que retorne a entablarse y avance un proceso acerca de un contenido ya específico; y que se originen resoluciones y sentencias discordantes.

Palabras claves: Demandas de amparo, resoluciones judiciales, seguridad jurídica, justicia constitucional y cosa juzgada.

ABSTRACT

Through this research work, it is intended to demonstrate how the amparo against judicial resolution, which turns out to be an exceptional figure, can affect the effectiveness of the judicial system if, for its admission or resolution, the judge does not apply the criteria established by constitutional justice, or does so improperly.

The usual thing is that when obtaining a decision that has exhausted all ordinary means and achieving a final resolution, the effectiveness of the right recognized or constituted in it can be sought, however, this does not always correspond to reality. It is not the objective of the investigator to detract from the use of the amparo against a judicial decision, but to show a serious disagreement with the improper application of the aforementioned criteria or the non-application of these, by the judge when resolving the admission or estimation of the demand.

In this line, it has been possible to demonstrate through statistical information applied to the case, how most of the amparo claims were admitted against judicial decisions and then in a final resolution they were declared inadmissible, even in said case the transit between one and another procedural act. has demanded a period of one to three years and in other cases exceeding said limit. Likewise, in the pronouncements that upheld the claim, a proper application of the guidelines determined by the Constitutional Court was not made, such as reasonableness, coherence and sufficiency, limiting itself to reassessing the grounds that were occasionally discussed in the ordinary way.

In both cases, there is a clear affectation to the Principle of Legal Security manifested through the principle of material res judicata, as this last impossibility for a legal discussion to last indefinitely, to start again and advance a process about an already specific content; and that discordant resolutions and sentences originate.

Keywords: Amparo claims, judicial resolutions, legal certainty, constitutional justice and res judicata.

INTRODUCCIÓN

El actual trabajo de investigación tiene como antecedentes los ensayos realizados por los profesores Luis Castillo Córdova denominado “Amparo Contra Resoluciones Judiciales: Recordatorio De Un Viejo Criterio Jurisprudencial” así como de Carlos Blancas Bustamante “El amparo contra resoluciones judiciales” en los referidos se analizaron los criterios para admitir las demandas de amparo contra resoluciones judiciales, de igual manera los precedentes establecidos por el máximo intérprete de la norma suprema, lo cual determinó una indagación sobre si dichos criterios están siendo aplicados en el distrito de Chiclayo y, sobre todo, los efectos negativos que dicha omisión acarrearía en el sistema jurídico nacional.

En ese sentido el propósito buscado por el investigador es determinar si en Chiclayo durante los años 2014 a 2017, se ha realizado una debida aplicación de los criterios para resolver los procesos de amparo contra resoluciones judiciales y el impacto que muestra la deficiente labor judicial en este aspecto tendría en el principio de seguridad legal en su inclinación de cosa juzgada material.

Para tales efectos se ha estructurado la investigación en cinco capítulos, el primero contiene los criterios metodológicos imprescindibles para brindar de rigor científico toda investigación.

El segundo capítulo comprende el estudio del proceso constitucional de amparo en general, sus antecedentes y desarrollo, sobre todo, en nuestro país, a fin de establecer su naturaleza excepcional y de tutela urgente sobre derechos constitucionales, lo cual implica no sólo una tramitación distinta de los procesos ordinarios, sino también la discusión de un contenido distinto.

En el tercer capítulo se evaluará la procedencia en específico del proceso de amparo hacia resoluciones judiciales, los criterios de su origen y fundabilidad, conocimiento previo que es necesario en la medida que, el trabajo práctico abarca la evaluación de su concurrencia o ausencia en las resoluciones materia de muestra.

En el marco teórico se tratará el principio de seguridad jurídica, así como sus diferentes manifestaciones, sobre todo su vertiente en la Cosa Juzgada Material, que tiene incidencia directa en el cuestionamiento de resoluciones judiciales, a fin de establecer si una tramitación irregular de un proceso constitucional que busque dejar sin resultado un pronunciamiento legal que adquirió dicho carácter, perturba dicho principio.

Finalmente, luego del desarrollo del marco teórico se procederá al análisis de los resultados conseguidos en el trabajo de campo, lo cual pondrá en evidencia la contrastación o negación de la hipótesis propuesta.

CAPÍTULO I

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1. Realidad problemática.

1.1. Planteamiento del problema

En un país como el nuestro en donde la efectividad del sistema judicial es sumamente cuestionada, es de suma importancia exigir el acatamiento de las resoluciones judiciales, a efectos de garantizar un estado de seguridad jurídica, que comprende entre otros la predictibilidad de los fallos y sobre todo la efectividad de la cosa juzgada en razón que una decisión no deba ser eternamente revisada o, sea materia de cuestionamiento aún agotadas las instancias ordinarias.

En efecto, el principio de Cosa Juzgada, previsto en nuestro cuerpo normativo como, la inmutabilidad de un fallo respecto del cual se han agotado los recursos o, se ha consentido la decisión definitiva, y por ende el derecho que se haya reconocido, constituido o declarado es plenamente exigible.

Sin embargo, este principio encuentra ciertas excepciones, por ejemplo, en la causa civil, la acción de cosa juzgada fraudulenta, o en la causa penal en el caso del recurso de revisión siempre a favor del sentenciado y, por supuesto el caso que nos ocupa el proceso de amparo contra resoluciones judiciales.

Esta modalidad del proceso de amparo afecta directamente el principio de cosa juzgada, en la medida que solo puede ser constitucionalmente promovida la acción dirigida a cuestionar resoluciones respecto de las cuales se han acabado los medios consignados en la vía ordinaria, acorde lo prevé el artículo 4° del Código Procesal Constitucional.

Está claro que la transgresión al principio de cosa juzgada se encuentra justificada en la medida que, con la resolución judicial firme se haya vulnerado derechos constitucionalmente protegidos, por lo que sería ilógico permitir una decisión judicial de esa naturaleza.

Tan loable finalidad, con tan alto sacrificio como es lógico debe suponer una delimitación concreta, a efectos de no extender el cuestionamiento de las resoluciones judiciales de manera ilimitada y con ello, hacer de la vía constitucional una instancia más de la justicia ordinaria.

En ese escenario se presenta el problema materia de investigación, pues, el Tribunal Constitucional mediante de diversos pronunciamientos y, en especial el reseñado en el Exp. 3179-2004/TC-AA, ha sentado criterios de estricto cumplimiento en la admisión de las demandas de amparo contra resoluciones judiciales, a efectos de evitar convertir la vía constitucional en un nivel más de la vía común.

Sin embargo, hemos visto en el distrito judicial de Chiclayo, como una serie de pronunciamientos judiciales han tergiversado e inaplicado tales criterios ocasionando con ello que se cree un clima de inseguridad jurídica puesto que, los justiciables ven cuestionados en vía constitucional, pronunciamientos que alcanzaron aptitud de cosa juzgada.

1.2. Formulación del problema

¿La indebida aplicación judicial de los criterios para resolver los procesos de Amparo contra resoluciones judiciales ha vulnerado el principio de Seguridad Jurídica en el distrito de Chiclayo en los años 2014 a 2017?

2. Justificación e importancia del estudio

2.1. Justificación

El presente trabajo evidencia en la medida que existen dos posturas en cuanto a la naturaleza de amparo contra resoluciones judiciales, por un lado, se tiene aquella que propugna la procedencia del amparo solo cuando tales resoluciones afectan a la defensa procesal efectiva, que vislumbra el acceso a la justicia y el debido proceso y no otros derechos.

Mientras que la segunda (que recoge el Tribunal Constitucional) propugna la procedencia del amparo cuando las resoluciones judiciales vulnera cualquiera de los derechos salvaguardados por el Proceso Constitucional de Amparo, ello realizando una aplicación sistemática de dicha norma pues bajo esta óptica, un proceso deviene también en irregular cuando se afecta cualquier derecho de relevancia constitucional (exceptuando los protegidos por las demás acciones constitucionales)

Asimismo en un plano jurisprudencial, se evidencia que el supremo interprete de la Carta Magna haciendo un cambio de precedente, emite la Sentencia N° 3179-2004/TC-AA, en la cual aumenta la esfera de afectación de los derechos consignados en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, a todos los establecidos en el artículo 37° del mismo Código, fijando criterios para resolver los procesos de amparo dirigidos contra resoluciones judiciales a efectos de no convertir la vía constitucional en una instancia más de los procesos ordinarios.

Del mismo modo, de una posición técnica, se advierte que en el distrito de Chiclayo se han emitido una serie de pronunciamientos en los procesos de amparo, que han trastocado estos criterios jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Constitucional.

2.2. Importancia

El proyecto de investigación atañe de gran importancia en la medida que busca establecer el efecto ocasionado con la inaplicación de los criterios para resolver procesos de amparo contra resoluciones judiciales y de esta forma contribuir a corregir una mala práctica judicial que ocasiona la desestabilización del principio de seguridad jurídica, afectando a su vez al principio de cosa juzgada, ocasionado por ende incertidumbre en la población acerca de lo resuelto de la inmutabilidad de lo determinado en un proceso ordinario y la posibilidad de ejecutar dicho fallo.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Determinar si en Chiclayo durante los años 2014 a 2017 la indebida aplicación de los criterios para resolver los procesos de Amparo contra Resoluciones Judiciales ha vulnerado el principio de seguridad Jurídica

3.1.1. Objetivos específicos

- A. Analizar el desarrollo del proceso de Amparo en el Perú.
- B. Establecer cuáles son los criterios legales y jurisprudenciales para la admisión de demandas de Amparo contra Resoluciones Judiciales en el Perú.

- C. Conocer las causas y los efectos que generan la inseguridad jurídica en el Perú.

4. Hipótesis

La indebida aplicación judicial de los criterios para resolver los procesos de Amparo contra resoluciones judiciales ha vulnerado el principio de seguridad jurídica en el distrito de Chiclayo en los años 2014 a 2017.

5. Variables.

5.1. Variable independiente

La indebida aplicación judicial de los criterios para resolver los procesos de Amparo contra resoluciones judiciales.

5.2. Variable dependiente

Vulneración del principio de seguridad jurídica en el distrito de Chiclayo en los años 2014 a 2017

VARIABLES	INDICADORES	SUB INDICADORES	INDICES	TÉCNICAS
<p>Variable Independiente: Indebida aplicación judicial de los criterios para resolver los procesos de Amparo contra resoluciones judiciales.</p> <p>Variable Dependiente Vulneración del principio de seguridad jurídica en el distrito de Chiclayo en los años 2014 a 2017.</p>	<p>Criterios para resolver los procesos de amparo contra resoluciones judiciales en general.</p> <p>Criterios para resolver procesos de Amparo contra resoluciones judiciales que resuelven otro proceso de Amparo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Examen de Razonabilidad Examen de Coherencia Examen de Suficiencia Vulneración evidente o manifiesta. Tratándose de materia laboral dicha procedencia supone el cumplimiento previo o efectivo de la sentencia emitida en el primer proceso amparo Su habilitación sólo opera por una sola y única oportunidad Resulta pertinente tanto contra resoluciones judiciales desestimatorias como contra las estimatorias. Su habilitación se condiciona a la vulneración de uno o más derechos constitucionales, Procede en defensa de la doctrina jurisprudencial vinculante establecida por el Tribunal Constitucional. <p>Se habilita "en defensa de los terceros que no han participado en el proceso constitucional cuestionado y cuyos derechos han sido vulnerados, así como</p>	<ul style="list-style-type: none"> Autos que admiten la demanda <ul style="list-style-type: none"> Se invocaron criterios expuestos por el Tribunal Constitucional <ul style="list-style-type: none"> ✓ Correcta Motivación ✓ Inexistencia de Motivación ✓ Motivación Aparente ✓ Falta de Motivación Interna. ✓ Deficiencias en la motivación externa. ✓ Motivación insuficiente. ✓ Motivación sustancialmente incongruente. ✓ Motivación Cualificada. Se invocaron otros criterios <ul style="list-style-type: none"> Código Procesal Civil Código Procesal Constitucional Otros Sentencias que declaran fundada la demanda <ul style="list-style-type: none"> Se invocaron criterios expuestos por el Tribunal Constitucional <ul style="list-style-type: none"> ✓ Correcta Motivación ✓ Inexistencia de Motivación ✓ Motivación Aparente ✓ Falta de Motivación Interna. ✓ Deficiencias en la motivación externa. ✓ Motivación insuficiente. ✓ Motivación sustancialmente incongruente. ✓ Motivación Cualificada. Se invocaron otros criterios <ul style="list-style-type: none"> Código Procesal Civil Código Procesal Constitucional Otros Sentencias que declaran infundada la demanda <ul style="list-style-type: none"> Se invocaron criterios expuestos por el Tribunal Constitucional 	<p>Fichaje de resumen, de autor, de obra y de recojo de datos.</p>

	Causas de Inseguridad Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> • respecto del recurrente que, por razones extraordinarias, debidamente acreditadas, no pudo acceder al agravio constitucional. • Resulta pertinente como mecanismo de defensa de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional • No procede en contra de las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional. • Procede incluso cuando el proceso se torna inconstitucional en cualquiera de sus otras fases o etapas, como la <u>postulatoria</u>. Impugnación de sentencia y ejecución de la misma". 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Correcta Motivación ✓ Inexistencia de Motivación ✓ Motivación Aparente ✓ Falta de Motivación Interna. ✓ Deficiencias en la motivación externa. ✓ Motivación insuficiente. ✓ Motivación sustancialmente incongruente. ✓ Motivación Cualificada. - Se invocaron otros criterios <ul style="list-style-type: none"> ▪ Código Procesal Civil ▪ Código Procesal Constitucional ▪ Otros • Sentencias que declaran improcedente la demanda <ul style="list-style-type: none"> - Se invocaron criterios expuestos por el Tribunal Constitucional <ul style="list-style-type: none"> ✓ Correcta Motivación ✓ Inexistencia de Motivación ✓ Motivación Aparente ✓ Falta de Motivación Interna. ✓ Deficiencias en la motivación externa. ✓ Motivación insuficiente. ✓ Motivación sustancialmente incongruente. ✓ Motivación Cualificada. - Se invocaron otros criterios <ul style="list-style-type: none"> ▪ Código Procesal Civil ▪ Código Procesal Constitucional ▪ Otros • Resoluciones Judiciales que fueron dejadas sin efectos vía Amparo. <ul style="list-style-type: none"> - Autos 	
--	--------------------------------	--	---	--

		Afectación al principio de cosa juzgada.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Que pone fin al proceso. ✓ Interlocutorios. - Sentencias <ul style="list-style-type: none"> • Materia sobre las que versaban las resoluciones judiciales que fueron dejadas sin efecto vía amparo. <ul style="list-style-type: none"> - Penal - Civil - Laboral - Constitucional • Procesos que llegaron al Tribunal Constitucional <ul style="list-style-type: none"> - Ampararon la Demanda. - Desestimaron la demanda. <p>Se rechazó de plano el recurso.</p>	
--	--	--	--	--

6. Métodos y procedimientos para la recolección de datos.

6.1. Métodos

6.1.1. Métodos de la ciencia en general

- **Método Inductivo:** Parte desde apreciaciones específicas para llegar a conclusiones generales (Cabezas, 2018, p.16). En la investigación en delimitación se hace uso de este método con la finalidad de examinar cada uno de los casos que pertenecen a la muestra para asemejar si es viable consentir como premisa general que se aplica incorrectamente los criterios determinados por el Tribunal Constitucional para resolver los procesos amparo contra resoluciones judiciales.
- **Método Analítico:** Se enfoca en la disgregación del todo en cada una de sus partes con la finalidad de una mejor investigación (Cabezas, 2018, p.18). En la indagación que se ha utilizado este método en la medida que la institución del Amparo contra Resoluciones Judiciales será estudiada desde el propósito que el proceso de Amparo en general tiene en nuestro sistema, hasta las restricciones establecidas para tal proceso en el caso de dirigirse contra resoluciones judiciales.
- **Método Deductivo:** Se caracteriza por iniciar de premisas generales a criterios particulares, (Cabezas, 2018, p.17) En la

actual investigación se tiene este método en razón que a partir de la verificación de que se han venido aplicando incorrectamente en el distrito de Chiclayo los fundamentos para resolver los procesos de Amparo contra resoluciones judiciales, establecer si ello ocasiona la transgresión del principio de seguridad jurídica.

6.1.2. Métodos específicos del derecho.

- **Método Histórico:** El cual admite el estudio de las leyes impuestas en tiempo con la finalidad de divisar su progreso y a qué cumple el cambio, en el caso en particular se usa para establecer en merito a qué criterios y de qué manera se ha desarrollado en el Perú el proceso de Amparo y en específico el dirigido a cuestionar resoluciones judiciales.
- **Método Sistemático:** El cual admite el estudio de las normas de la sistematización legal como un todo vinculado, es decir, con el fin de instituir la exégesis más conforme con la legislación nacional del artículo 4° del Código Procesal Constitucional.
- **Método Teleológico:** Procedimiento que envuelve el examen de la ratio legis es decir el propósito de la norma, para fundar cuál es la exegesis que se debe de otorgar de las distintas fuentes normativas analizadas.

- **Método Comparativo:** Mediante el cual se instituye la indagación de normas internacionales con la finalidad de disentir con la nacional, y poder hallar en los sistemas legales análogos los efectos y restricciones del Amparo contra resoluciones judiciales.

7. Procedimientos para la recolección de datos.

Este implica desarrollar el plan detallado de los pasos a seguir para reunir los datos con un propósito específico, debiendo determinarse las fuentes y su localización, cómo se emplearán los medios para recolectar datos, y los instrumentos de tal efecto.

En el presente caso la fuente de donde se adquirirá la información será de naturaleza primaria, en la medida que se recogerá la información de manera directa, siendo su localización el archivo informático del Poder Judicial, específicamente la Corte Superior de Chiclayo

Ubicada la fuente, se recogerán los datos requeridos y serán plasmadas en las fichas confeccionadas para tal efecto, las cuales serán sistematizadas según criterios cualitativos en los instrumentos de ofimática.

7.1. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos.

En cuanto a los materiales, por tratarse de una investigación aplicada al campo de una ciencia social como el Derecho, se utilizarán los necesarios para el acopio y sistematización de información, como por ejemplo libro de apuntes, fichas técnicas, etc.

En cuanto a las técnicas amerita de una investigación con enfoque cualitativo, se realizará principalmente el fichaje en sus formas, de resumen, de citas y personales.

Al ser los instrumentos aquellos medios complementarios para acopiar y anotar los datos conseguidos mediante de las técnicas, se utilizará principalmente los programas de ofimática como WORD y EXCEL a través de una computadora.

CAPÍTULO II

EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO

1. Garantías Constitucionales

Las garantías constitucionales, son módulos o instrumentales encargados de respetar los derechos fundamentales advertidos en la norma suprema de la nación. En los últimos tiempos, las garantías constitucionales suelen denominarse procesos constitucionales. (Gallegos, 2005, p.33)

Para Ferrero (1984), expresa que, los derechos inherentes al ser humano, las afirmaciones que establecen y las garantías establecidas en la norma de orden constitucional, son tres conceptos relacionados. Por garantías se tiene que entender la seguridad o los procedimientos intuitivos de libertad, establecidos por la norma suprema para el mantenimiento de los derechos consagrados en una norma suprema. El vocablo garantía puede entenderse en dos sentidos, extenso y estricto. En rigor, son garantías constitucionales de los mecanismos de defensa de los derechos humanos, permanentes con la contingencia de que el legítimo de un derecho deba demandar al tribunal para proteger ese derecho, si se materializa la amenaza de vulnerabilidad. En un sentido amplio, el término garantías constitucionales es utilizado por la norma suprema para establecer derechos humanos (p.419-420).

2. Los Procesos Constitucionales

Se reconoce como garantías constitucionales a que se encuentran previstos en el artículo 200° incisos 1° al 6° de la Norma Suprema del Perú. (Gallegos, 2005, p.34).

Mencionamos procesos constitucionales a aquellos mecanismos que el sistema legal administra para hacer cumplir el principio de supremacía legal de la Norma Constitucional y la eficacia cierta de los derechos regulados en la norma suprema. Obedeciendo que la competencia para solucionar este tipo de conflictos puede reincidir en el poder del Estado delegado de administrar justicia, en el Tribunal Constitucional o en ambos. (Abad Yupanqui, 2008, p. 47).

En la misma línea expresa López Flores (2013) que, los procesos constitucionales que buscan salvaguardar la libertad (amparo, hábeas corpus, hábeas data y cumplimiento) se transforman en instrumentos que poseen como intención salvaguardar los derechos primordiales de los individuos, restableciendo las cosas al estado anterior a la infracción o peligro de transgresión del derecho fundamental. (p.45)

Por su parte Fernández Rodríguez (2007) clasifica dichos procesos en típicos o atípicos, los primero están unidos reducidamente con el entorno de la imparcialidad constitucional, tal y como se ha ido perfeccionando históricamente siendo por ende aquellos que examinan la adecuación de la constitución a las medidas infra constitucionales, mientras que los segundos, serían aquellos que se acrecientan a los procesos básicos aludidos pero que se conservan en los límites del proceso constitucional. (p. 72-84)

Principios del proceso constitucional

Como señalan Eto y Palomino (2005) que, el Título Preliminar compone un fragmento normativo que exhibe un lugar predilecto inserto en todo el ámbito normativo de un Código y es que se nos avizora como un claustro exegético que establece y normaliza a toda la legislación, presentándose de manera fuerte una cadena de leyes que no son escuetas afirmaciones o invenciones estéticas; sino, antes bien, se nos muestra como un contiguo de principios ordinarios que tienen una función para una exegesis intrasistemática (dentro del Código) y la función extrasistemática (fuera del Código) (p.291). Siendo así, siguiendo la sistemática de nuestro Código podemos señalar los siguientes principios:

2.1.1. Principio de dirección judicial del proceso

Bajo este principio se tiene como referencia el artículo II del T.P. del Código Procesal Civil que prevé: “la orientación del proceso está a compromiso del Juez, y antes que una potestad, concierta una obligación, no de representación funcional sino de naturaleza procesal”.

Devis Echandía (citado por Eto y Palomino,2005) establece que, dentro de este principio, el magistrado ocupa un papel trascendente dentro del proceso de orden constitucional y no se restringe a examinar la diligencia judicial de las partes, sino que la dirige al resultado del proceso, e incluso promueve mediante el respectivo mandato judicial, las actuaciones procesales necesarias para adelantar la proceso, delimitar los hechos, convencerse y

resolverlos, dando así resultado al problema de intereses del que tenga conocimiento. (p. 294)

2.1.2. Principio de gratuidad en la actuación del demandante

En posición de lo que establece el Art VIII del Título Preliminar del Código Procesal Civil que prevé el principio de gratuidad en el uso a la justicia, la norma procesal establece sólo el principio de gratuidad al demandante, subyaciendo en este principio, una representación tuitiva del accionante que es el que probablemente sobrelleva un agravio de orden constitucional. (Eto y Palomino, 2005, p. 296)

2.1.3. Principio de economía procesal

Se concreta al señalar la conservación de tiempo, de gastos y de atrevimientos en el proceso, como afirma Carrión Lugo (citado por Eto y Palomino, 2005), en el que se menciona que, se ahorra tiempo cuando el proceso se desarrolla con normalidad, respetando sus plazos y su estricta formalidad, sin exagerar; existe ahorros de costos cuando se evita que los sujetos procesales en problema conciban costar sus derechos en el proceso. Se ahorrará esfuerzo cuando el proceso sea sencillo, en el sentido de que las actuaciones procesales se realicen sin esfuerzo innecesario. Como resultado, podemos decir que la economía procesal de los procesos es objeto de estudios encaminados a un proceso fluido, célere y eficiente, en

el menor tiempo posible. (p. 296-297)

2.1.4. Principio de inmediación

Dentro de este extremo nos da a conocer que no puede intervenir nadie entre el juez y la apreciación directa de la prueba. Para que la averiguación sea verosímil se debe adjudicarse este principio. (AMAG, 2007, p. 32)

La inmediación da cabida a una correlación interpersonal recta. Por lo tanto, la mediación es un medio que tiene que existir, ya que es un instrumento de carácter material indispensables para conseguir pleno conocimiento del caso para dictar un resultado (Cubas Villanueva, 2017, p. 273)

Dentro de los mismos lineamientos Moras (2004), precisa que, la inmediación el magistrado la desarrolla y vive el hecho y conoce a las partes, sin terceros en forma directa y con excelentes medios de certeza. (p. 117)

De igual manera Oré Guardia mencionando a Montero Aroca (2011), refiere que, la mediación requiere que esta comunicación se produzca directamente, del mismo modo que la verdadera mediación sólo es posible en un procedimiento de carácter oral, ya que las partes se comunican con mayor frecuencia entre sí y con el juez, a diferencia de un proceso eminentemente escrito, el magistrado

resuelve el caso, no necesita haber actuado la evidencia porque su fallo debe fundamentarse en lo que está escrito. (p. 199-200)

En función al fin de este principio de acuerdo con refiere Moras Mom (2004) que, la correlación más pronta entre la fuente del conocimiento y el sujeto que lo obtiene proporciona su integridad y su viabilidad de verdad real; evitar la mediación y deformación de la misma y el trayecto estacional y material generarían problemas de índole procesal. (p. 116)

Ahora bien, como anotan Eto y Palomino (2005), la inmediación inserta en el proceso constitucional cuenta con características distintivas, en la medida previsto en el art. 9 de la propia norma se encuentra la regla de que no existe etapa de prueba, estos procesos involucran varios criterios en los cuales se aprecia el principio de inmediatez, como es materia del Habeas Corpus, que la pretensión puede ser interponerse oralmente, de igual manera el procedimiento del referido amparo, el art. 53 dispone que, si el magistrado lo cree ineludible, tomará las medidas que estime necesarias, sin previo aviso a los sujetos procesales interesados, consiguiendo implícitamente emplazar a las partes y sus abogados a una sola audiencia para brindar las aclaraciones que estime necesarias. (p. 299-300)

Principio de socialización del proceso

Este principio intenta en una actitud valorativa, que se generalice el proceso, con la finalidad de que las partes cuenten con las iguales armas que no se les tiene que limitar a otro y, si bien como señalan Eto y Palomino (2005), en estos casos de los derechos subjetivos privados, el accionante se encuentra siempre en desventaja, ya que, además de expresar la transgresión o puesta en peligro de un derecho fundamental, es él mismo el agraviado; bajo el principio de democratización del proceso intenta que el justiciable no demuestre reducción, en relación con su oponente, del sujeto que, sin ser autoridad o funcionario o persona natural que evidentemente infrinja o lesiona los derechos de orden constitucional reclamados por el accionante. (p. 302)

2.1.5. Principio de impulso procesal de oficio

El impulso procesal se identifica por dar realce a la naturaleza o la representación definitivamente pública de estos procesos, cuyos objetivos concierne a la comunidad en su contiguo; de allí que colocar la esencia del proceso sólo y únicamente a las partes en problema tiende a ser más que difícil, porque entonces los desenlaces ya no habría más que un amparo o defensa ius privatista. (Eto y Palomino, 2005, p. 304)

2.2. Los procesos constitucionales en el código procesal constitucional.

El código Procesal Constitucional regula hasta siete procesos constitucionales, de los cuales seis se identifican con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 200° de la Carta Magna del Perú, (a excepción del proceso competencial) así tenemos:

2.2.1. Proceso de Habeas Corpus

El cual descende ante el hecho u omisión, realizada por cualquier autoridad, funcionario o persona, que transgrede o pone en peligro la libertad individual o los derechos constitucionales conexos consagrados en el artículo 25° del Código Procesal Constitucional.

2.2.2. Proceso de Amparo

Bajo su naturaleza interviene ante el hecho u omisión, ejecutada por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o pone en peligro los demás derechos consagrados por la Norma Suprema, con excepción de los señalados en el Habeas Corpus y el Habeas Data, en razón de lo previsto en el artículo 37° del Código Procesal Constitucional.

2.2.3. Proceso de Habeas Data

Interviene contra el hecho u omisión, realizada por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que lesiona o pone en

peligro los derechos previstos en el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Norma Suprema.

2.2.4. Proceso de Cumplimiento

Interviene contra cualquier autoridad o funcionario reacia a obedecer una norma legal o un acto administrativo, sin menoscabo de las responsabilidades de lo que establece la norma.

2.2.5. Proceso de Acción Popular

Que viene, por contravención de la norma Suprema y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen.

2.2.6. Proceso de Inconstitucionalidad

Interviene contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que transgredan la Norma Suprema en la forma o en el fondo.

2.2.7. Proceso Competencial

Procede ante los problemas que se produzcan dirigidas a las competencias o facultades determinadas rectamente por la Norma

Suprema o las leyes orgánicas que demarquen los perímetros inherentes de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales, y que enfrenten al Poder Ejecutivo; o a los poderes del Estado entre sí o con cualquiera de los demás órganos constitucionales, o a éstos entre sí, acorde lo advertido en el artículo 109° en la norma procesal de orden constitucional.

3. Antecedentes del Proceso Constitucional de Amparo

Señala Abad Yupanqui (1996) que, el amparo es una entidad procesal que tiene sus principios en la legislación mexicana que se inserta en el ordenamiento legal del Perú en la constitución de 1979 (artículo 295) y se conserva en la Norma Suprema actual (artículo 200, inciso 2).

Fue creado como una garantía de carácter constitucional predeterminada para salvaguardar derechos constitucionales diferentes a la libertad individual, lesionados o puestos en peligro por cualquier autoridad, funcionario o persona, hubo algunos precedentes nacionales, como el llamado habeas civil corpus evidenciado por el decreto ley 17083, que fue una extensión de la clásica figura inglesa de salvaguardia de los diversos derechos de la libertad individual y buscada por los magistrados civiles, la protección sólo puede ser referida como una figura autónoma e integrada, desde texto constitucional de 1979. (p. 15)

En esa misma línea Eto (2013) precisa que en nuestro país el

antecedente más remoto es el amparo colonial, que fue resultado de la vieja legislación novoandina que descendió del derecho de indias y que en México desde los años setenta; además, se han evidenciado estos viejos antecedentes novoandinos derivados de la influencia ibérica. (p.148). Asimismo precisa que pueden trazarse cuatro periodos del amparo: el primero donde funciona como hábeas corpus (1916-1979); el segundo que denomina constitucionalización del amparo, desde la promulgación de la Carta Magna de 1979, la cual sistematiza con perfiles adecuados el régimen del amparo, el tercero percibe un interinazgo como resultado del régimen de facto y se identificó porque se estableció un extenso stock de leyes que influyeron el amparo tanto como el hábeas corpus; y últimamente el cuarto periodo que percibe, desde la transición política a la democracia y, sobre todo, con la publicación y vigencia del Código Procesal Constitucional dado por Ley N° 28237.

Siguiendo a García Belaunde (1980) podemos distinguir tres etapas legislativas en la regulación del Amparo; así tenemos:

- *“Del año 1897 al año 1933, en este grado, el hábeas corpus se ciñó a ser un instrumento de protección de la libertad personal. No obstante, se promulgó la Ley 2223, que consintió la defensa de derechos constitucionales diferentes a la libertad personal, pero que en la experiencia no alcanzo a contar con mayor perfeccionamiento”.*
- *“Del año 1933 al año 1979, con la norma suprema de 1933, el hábeas corpus extendió su espacio de amparo a todos los derechos particulares y*

sociales. Este proceso fue reglamentado por el Código de Procedimientos Penales de 1940 y por el Decreto Ley 17083 de octubre de 1968. De esta manera, se instituyeron dos vías diferentes para su procedimiento: la vía penal meramente para tutelar bienes jurídicos como la libertad y la vía civil para otros derechos fundamentales.

- *Desde de la Norma Suprema de 1979, se estiman 02 procesos constitucionales diferentes: el hábeas corpus, para la tutela de la libertad individual; y, el amparo, para la defensa de los demás derechos fundamentales. La Norma Suprema de 1993 conserva esta distinción, aunque inserta al hábeas data y a la acción de cumplimiento”. (p. 228 a 229)*

En síntesis, como explica Abad (2015), que

El proceso de amparo aparece con tal nombre en la Carta Magna de 1979. Sin embargo, es notable hallar referencias nacionales: (i) en la Ley 2223, pues consentía la protección de derechos diferentes a la libertad individual; (ii) en el hábeas corpus de la norma constitucional de 1933, análogo por su extensión al juicio de amparo mexicano; y, (iii) en el Decreto Ley 17083, que determinó un procedimiento específico en la vía civil para el hábeas corpus, que también resguardaba los demás derechos individuales y sociales.

4. Concepto de amparo

Según Bernaldes (1996) indica que, esta garantía salvaguarda derechos de origen constitucional que no están preservados por Habeas Corpus o Habeas Data. A falta del accionar de estos instrumentos y evidenciándose un derecho constitucional puesto en peligro o lesionado, ya que procede la tutela mediante el amparo. (p.706).

Para Ortecho (2002) menciona que, es un ejercicio con base garantista constitucional breve, propuesta al Magistrado Civil o a la Sala Civil de la Corte Superior respectiva, que tiene por objeto reestablecer cualquier derecho constitucionalmente reconocido, con excepción de la libertad personal transgredido o puesto en peligro por cualquier autoridad, funcionario o persona. (p.149)

De igual forma Linares (1956) especifica que tiene por objetivo afianzar que los ciudadanos de una determinada nación puedan ejercer sus derechos, salvaguardándolos de toda limitación o puesta en peligro por parte de terceros, con la clara excepción de la libertad física ya asegurada por el Hábeas Corpus. (p.373)

El especialista en materia constitucional argentino Sagües (1988) considera que, al amparo como un mecanismo formal con carácter autónomo, que debe salvaguardar todos los derechos humanos regulados en la norma suprema, siempre que sean claras, aplicables, específicas y causen daño o

generen peligro a la persona o al Estado; agrega que la tutela se considera una medida excepcional, a falta de las medidas habituales propuestas por cualquier persona, de manera rápida, que incluso puede oponerse a actos del Poder Judicial. (p.33).

Por su parte, Abad (1996) discute sobre la corrección del término acción empleado por el constitucionalista nacional desde la carta de 1979, exponiendo que, si se evalúa la protección a la luz de estas cualidades, podemos decir que, al calificarla como acción, juicio o recurso, nos encontraríamos haciendo uso una terminología inadecuada. El hecho es que si, por un lado, no hay composición de acciones, por otro lado, no es coherente llamarlo una valoración que solo podemos hacer forjando en la actividad del Magistrado que pone la culminación al proceso, si no nos comprometemos a poner el término referido como sinónimo de proceso y posteriormente no hay necesidad de recurso porque se limita a la fase de impugnación del proceso y el amparo peruano tiene una trascendencia mucho más amplia. (p. 20). Concluyendo que apropiadamente debe denominársele proceso de naturaleza constitucional como finalmente está concebido en el presente Código de orden constitucional.

Siguiendo a Eto Cruz (2013), podemos decir que es un proceso de carácter constitucional independiente de defensa inmediata de los derechos de envergadura fundamental, distinto de la libertad individual, y destinado a restablecer en el uso de este derecho fundamental a la persona que se encuentre en peligro o se haya lesionado como consecuencia de actos lesivos practicados

por cualquier autoridad, funcionario o persona. Del mismo modo, la protección se desarrolla en nuestro país con un doble carácter basado en la defensa subjetiva de los derechos fundamentales; pero de esta manera incluye la protección objetiva de norma suprema. La primera presupone la restitución del derecho dañado o puesto en peligro, la segunda la protección objetiva de la norma suprema, es decir, el amparo en línea constitucional como suma de ventajas institucionales. (p. 147.)

5. Tipos de amparo

Siguiendo la investigación de Gallegos (2005) podemos afirmar que, en la doctrina, la protección se encasilla en amparo con fuente común u ordinaria, legal, judicial, amparo contra leyes y amparo contra amparo. (P. 51)

5.1. El Amparo Común U Ordinario

Se denomina amparo común aquel destinado solamente para salvaguardar los derechos esenciales de los ciudadanos no consagrados por el habeas corpus, el habeas data, el amparo judicial y el amparo legal. (Gallegos, 2005, p.52)

5.2. El Amparo Judicial

Frecuentemente distinguido como amparo contra resoluciones judiciales, se halla reglamentado en la Norma Suprema de 1993 (Art. 200° Inc. 2°, última parte) al prever: “La acción de amparo (...) no procede (...) hacia resoluciones judiciales procedentes de procedimiento regular.” Por

lo que, en interpretación contraria procede su interposición frente a uno irregular. (Gallegos, 2005, p.52)

Conforme al Código Procesal Constitucional que dicho mecanismo se halla explícitamente regulado de tal forma que el artículo 4° de la citada norma imprime literalmente que, el amparo se interpondrá en relación de resoluciones judiciales firmes impuestas con expreso agravio a la defensa procesal efectiva, que conforma el valor de alcanzar la justicia del debido proceso”. (Gallegos, 2005, p.53)

5.3. El Amparo Legal

Siguiendo a Gallegos (2005), expresa que, la Norma Suprema de 1993, en su artículo 200° inciso 2°, última parte, prevé al amparo legal al manifestar que: la acción de amparo (...) no procede contra normas legales, a su vez como señala Eto (2013):

“La norma procesal hace inferencia al comprendido de la norma actual en la legislación nacional desde 1982 sobre el surgimiento de la protección contra las acciones fundadas en normas jurídicas, pero no instituyó normativa alguna sobre la protección directa contra las normas de auto ejecución, aunque existe una línea jurisprudencial fijada, dentro del criterio personal esta omisión representó la pérdida de una significativa oportunidad para que el legislador con referencia a la amplia jurisprudencia del órgano supremo de interpretación, establezca a horizonte normativo los lineamientos que debe observar

y aplicar el Poder Judicial en el caso concreto de amparo directo contra reglas autoaplicativas. Así, continuó la medida de esta materia en merito con lo advertido en el artículo 200, inciso 2° de la Norma Suprema. (p. 152)

Al respecto apunta Eguiguren (2002), citado por Gallegos (2005), menciona que no es admisible:

“El amparo interpuesto rectamente contra una ley o norma general para discutir su constitucionalidad; pero si es válida la protección contra un acto u omisión fundado en la ejecución de una ley o norma inconstitucional, debe establecerse en la sentencia que no puede aplicarse una norma inconstitucional en el caso concreto”. (p. 225)

Para Díaz (2004) refiere que en el ordenamiento legal peruano no permite el amparo contra las leyes, porque regula el proceso de inconstitucionalidad de las leyes, que evidentemente sólo puede activarse por definitivos y explícitos sujetos procesales, cuya sanción será la suspensión de la norma impugnada; empero, el amparo puede solicitarse contra actos resultantes de la aplicación de normas jurídicas violatorias de la norma suprema, teniendo en cuenta que en este caso el funcionario puede ejercer un control difuso y no aplicar la norma con la que se realizó el acto violatorio de la constitución y restaurar las cosas antes de la lesión o puesta en peligro. (p. 256 a 257)

El mismo autor precisa que, los jueces que no apliquen una norma disconforme con la Constitución, por el control difuso que practican, deberán valorar preliminarmente la compatibilidad o discrepancia de la norma con la Norma Suprema y darles una interpretación acorde a la Constitución. (p.256-257)

Señala Eto (2013) que, cuando se trata del amparo contra las normas jurídicas, se pueden nivelar tres tesis. La primera tesis permisible templada admite el amparo contra las acciones basadas en normas, pero no registra la protección directa contra las normas autoimpuestas. La segunda tesis permisiva extensa acepta el apoyo en ambos casos. Una tercera tesis, ninguna de las cuales tiene la contingencia de un examen de constitucionalidad de las normas por el apoyo de la tesis negativa. La constitución de 1993 resultó del golpe de estado de 1992, por lo que, no es de desterrar que algunas de las reformas interpuestas en la constitución de 1979 residieran encaminadas a restringir el alcance de la tutela. En este sentido, el artículo 200, inciso 2 de la norma suprema de 1993 instituye explícitamente la infundabilidad de la pretensión de tutela contra las normas jurídicas, dispositivo determinado primariamente para frenar el amparo contra las normas autoaplicativas. (Pág.152)

A criterio del citado autor indica que no es necesario incluir en la constitución un artículo referido a que no se puede permitir la protección contra las normas jurídicas, ya que en el texto de la constitución es preferible especificar sólo el objeto de la protección, que es el amparo de

los derechos fundamentales, y dejar la discusión por las razones por las que no se puede aceptar la legislación ordinaria. Sin embargo, no se debe olvidar que la proliferación de amparos directos contra la normativa.

5.4. El Amparo Contra Amparo

El investigador Díaz (2004) indica que, el amparo contra amparo, reside en que la parte perjudicada en un proceso constitucional de amparo pretenda un nuevo amparo para debatir la eficacia del primer proceso constitucional. (p.257).

El intérprete supremo de la norma suprema, bajo el Expediente N° 612-98-AA/TC ha fijado algunos límites para la viabilidad del amparo contra amparo, al señalar que:

- a) “Sea permitido sólo de forma muy rara, en vigilancia a los contextos de desamparo que formaría su no aceptación.
- b) Sea el caso de sentencias emanadas en procesos de amparo que no hayan alcanzado ante el supremo interprete de la norma suprema, puesto que es, la última y más alta instancia en materia de procesos constitucionales, cuyas resoluciones tienen el valor de cosa juzgada.
- c) El perímetro del escrutinio se halla reducido exclusivamente a actos contraproducentes del derecho al debido proceso o alguno de sus pertenecientes, calificándose en cada caso si ello lesiona o no su adjunto principal. Por ende, en el proceso no analizaría el fondo del contenido principalmente resuelto en el amparo.

- d) De contrastar la representación anormal del proceso de amparo, se puede resolver exclusivamente que éste sea retroceder al estado anterior al que se causó la irregularidad”.

6. Presupuestos para su procedencia

Para la admisibilidad del amparo, de igual forma que los procesos de habeas corpus y habeas data, se requiere como presupuestos i) La presencia de un derecho de carácter constitucional. ii) Acto Lesivo puesto en peligro real o lesión del derecho constitucional.

6.1. Derecho Conculcado de carácter constitucional

El derecho pedido debe contar con un contenido primordialmente constitucional, pues se atribuye que en la jurisprudencia se interpreta y delimita el objeto primordialmente constitucional de los derechos explícitos previstos en la norma fundamental, especialmente cuando reciben referencias precisas y generales en la ley. Es deplorable que en general esto no se haya logrado, sobre todo porque muchas sentencias de la corte constitucional se centran en el análisis de aspectos fácticos más que en definir su alcance y contenido de los derechos correspondientes. Esto, sin duda, incentiva el uso irresponsable y correcto de la defensa cuando se discuten aspectos del derecho reclamado que en realidad no son constitucionales. (Eguiguren, 2002, p. 200)

Respecto de este mismo aspecto, siguiendo a Eto (2013), debemos precisar que desde una representación confrontada, nuestra legislación ha afiliado una manera de defensa extensa de derechos fundamentales, en tanto salvaguarda todos los derechos agregados en la norma suprema, frente a la criterio restrictivo que brinda amparo solo a determinados derechos fundamentales o la tesis extensiva de la defensa de derechos colocados incluso fuera del espacio constitucional. (p. 149)

De acuerdo con Eguiguren (2002) indica que:

Siguiendo a la doctrina más influyente, debe ser un derecho que tenga un carácter claro y líquido, es decir, que se reconozca clara y completamente el carácter constitucional del derecho reclamado, la disposición de sus titulares y el impacto que este derecho sufre. Por lo tanto, la persona que reclama la protección debe contar con legitimidad constitucional, lo que significa que el derecho reclamado debe contar una garantía directa en la norma de la constitución y en términos del derecho de origen o base legal. Además, deberá acreditarse plenamente la titularidad de este derecho, determinándose que no se requiere más prueba ni que es objeto de controversia o disputa. (p.218)

Este mismo autor afirma que, el carácter claro y fluido del derecho constitucional cuya defensa se tutela hace que su exigibilidad y vulnerabilidad percibida sean también claras, actuales y evidentes, sin que

sea necesario generarlas como prueba de fondo previo de contextos legales complicados o controvertidas. El amparo no puede ser utilizado para resolver o instituir la preexistencia de un derecho o su incierta continuidad en el dominio; tiene por objeto salvaguardar y tutelar un derecho constitucional claro, formado e incontestable, sujeto a violación arbitraria y flagrante. Tampoco es válido en nuestro ordenamiento jurídico utilizar la tutela para defender un derecho cuyo origen es legal y no constitucional. (p.218 y 219)

6.2. Acto Lesivo

El acto lesivo constituye una presunción procesal para el proceso de amparo y tiende a ser definida como una conducta (acción u omisión) emanada de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o ponga en peligro derechos fundamentales. El acto de daño tiene un objeto material y jurídico, el primero se compone por el sujeto activo, el sujeto pasivo y la acción u omisión concreta, mientras que el segundo implica una valoración del efecto que produce, pues este debe ser relacionados con el ejercicio de un derecho fundamental. (Eto, 2013, p. 149,150)

El Acto Lesivo, o reclamado siguiendo la tradición mexicana, es clasificado, según Abad (1996):

a. Según el tiempo de su realización:

- i). Actos pasados

- ii). Actos presentes
- iii). Actos futuros
- iv). Actos de tracto sucesivo

b. En función del modo de afectación

- i). Actos positivos
- ii). Omisiones

c. De acuerdo con su reparabilidad

- i). Actos reparables
- ii). Actos irreparables

d. De acuerdo con la subsistencia de la lesión

- i). Actos subsistentes.
- ii). Actos no subsistentes.

e. Según la evidencia de la lesión

- i). Actos de arbitrariedad manifiesta.
- ii). Actos no manifiestos.

f. De acuerdo con su consentimiento

- i). Actos consentidos
- ii). Actos no consentidos.

Además de esta clasificación los actos dañosos además pueden ser desarrollados a partir de la representación de su procedencia , así tenemos:

- i) Actos lesivos del Poder ejecutivo, ii) Actos Lesivos del Poder Legislativo, iii) Actos Lesivos del Poder Judicial (Amparo contra

resoluciones judiciales) que precisamente son materia del presente trabajo, iv) Actos lesivos cometidos por particulares; igualmente a nivel de doctrina se habla de Actos no justiciables o actos políticos, tratándose así de algunas disposiciones que no son verificadas por los órganos jurisdiccionales del Estado, por ende aquellas potestades calificadas a otros órganos constitucionales, como sucede con las restricciones al cuestionamiento del JNE y el ahora desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, sin embargo como sabemos el TC habilitó que la procedencia del amparo en estos casos sobre todo en caso de rebuscamiento a la fundamentación de resoluciones judiciales. (Eto, 2013, p. 150,151)

6.3. Amenaza cierta e inminente

Conforme al actual Código Procesal Constitucional, aquellos procesos constitucionales en su totalidad_emanan desde que exista una amenaza o vulnere los derechos fundamentales sea por acción u omisión de aquellos actos de carácter necesario, siendo que respecto de la amenaza manifiesta Abad (1994) que para existir un peligro y esta pueda facultar la ocupación del amparo, se debe tener dos elementos esenciales: certeza e inminencia. La inadmisibilidad de la demanda, si es que la poner en peligro no es inmediata, viable y operable por el investigado. Es por ello, que, para el constituyente chileno de 1976, esta pone en peligro está compuesta por un ‘peligro apremiante’ (p. 137) y si bien el citado autor

comenta la norma que fuera derogada por el actual Código, este último contiene similar disposición.

6.4. Violación de un Derecho Constitucional

Tal cual nos dice el profesor Brewer (2016) una vulneración constitucional debe ser de “carácter personal e inmediato, en el sentido de que debe afectar únicamente al querellante; así como deberían ser efectivos y reales; es decir, el hecho no puede ser pasado ni probable”, en la naturaleza, deben estar vivas y presentes en toda su intensidad, en la forma de que deben relacionarse con el momento presente, no con el pasado o con hechos que ya sucedieron, que por el contrario deben referirse a situaciones actuales incluso puede extender el tiempo. (p.144)

Igualmente señala el citado autor que, dado el carácter reparador del amparo, la principal condición especial que debe cumplirse para conceder un recurso de amparo es que tenga carácter reparador, porque la acción de amparo no puede crear nuevas situaciones jurídicas para las personas afectadas y no es posible cambiar los ya existentes. (p. 159)

7. Requisitos de Procedencia

Interpretando la norma, *contrario sensu*, podemos afirmar que aquellos requisitos de la procedencia del Amparo, de similar manera que los otros procesos constitucionales están establecidos en el Art. 5° del Código Procesal Constitucional, así tenemos:

7.1. Contenido Constitucional del Derecho Invocado

Señala Eguiguren (2007) que, el amparo es un proceso de representación constitucional, agrupado a la protección de apremio de un derecho constitucional, es decir con este se intenta impedir que se lleven a esta vía extraordinaria algunos asuntos fuera de lugar del contenido notable y esencial el cual está protegido del derecho solicitado. Dada ya una idea clave de la generalidad con que la Constitución acoge a estos derechos, es aquí donde la jurisprudencia hace su trabajo, primordialmente el Tribunal Constitucional, quien es aquel que determina y delimita el valor constitucionalmente regulado, así también como a los órganos jurisdiccionales que comprueban su apariencia en la demanda y materia, lo que será fundamental para la procedencia o improcedencia del amparo impulsado. (p.376, 377)

La corte constitucional e intérprete de la carta magna en la Sentencia N° 1417-2005-AA/TC se ha encargado de poder delimitar cuando nos encontramos frente al valor esencial de los derechos constitucionales, así ha precisado:

“Que toda área constitucionalmente amparada de un derecho constitucional se retorna en mayor o menor grado del valor principal, ya que Toda limitación del derecho fundamental sólo es válida en la medida en que se preserve el contenido sustantivo. El máximo intérprete de la norma constitucional sujeta que el contenido fundamental de los derechos fundamentales no puede determinarse de

antemano, es decir, independientemente de los principios, valores y demás derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. En consecuencia, si bien el valor central de un derecho fundamental es la acumulación de importantes expresiones de los principios y valores que lo sustentan, su valor exige un estudio consecuente del bien constitucional en el que el principio es central el derecho a la dignidad humana, al que se dirigen en última instancia todos los derechos humanos básicos”.

7.2. No existencia de vías Igualmente Satisfactorias

Si el derecho fundamental está protegido por un proceso legal distinto del amparo, debe recurrirse a él de manera obligatoria. Si bien en el Perú inicialmente decidió considerar el uso del amparo como un proceso alternativo que estuvo en vigencia entre el año 1982 hasta el año 2004, la Ley de Procedimiento Constitucional se optó por el amparo secundario o residual. (Eto, 2013, p. 163)

7.3. Cuando se haya recurrido a otro proceso judicial

Hablamos de una cláusula confusa que nos puede causar conflicto en otros estados como en el continente europeo donde el requerimiento a una vía judicial es una exigencia de procedibilidad de la demanda, pero como nos dice Eto (2013):

En Perú, el amparo se somete directamente a la jurisdicción de la Constitución sin necesidad de utilizar el proceso legal ordinario

anterior. Lo diferente es que la pareja tiene dos juicios preliminares antes de ingresar a la Corte Constitucional, los cuales se tramitan en el sistema judicial. En este caso, los magistrados de los tribunales no actúan como jueces habituales, sino como jueces constitucionales; lo que consiente fortalecer la unidad del proceso matrimonial. (p. 164)

7.4. Agotamiento de vías previas

Eto Cruz (2013) nos dice que, el mismo Código se estipula que en el segundo párrafo del artículo 1, existe la posibilidad de hacer una declaración sobre el contenido del caso, si una de estas circunstancias se presenta después de la presentación de la acción. Corresponde a la autoridad judicial valorar caso por caso si procede valorar la demanda en estos casos, teniendo en cuenta los instrumentos que esta disposición consiga contar en el futuro, como protección procesal preventiva contra acciones similares u homogéneas e incluso el amparo como medio de prevención general de situaciones fácticas inconstitucionales por la dimensión objetiva del instrumento, citando por ejemplo la Sentencia TC 203 -2009-PA/TC donde el tribunal dictó declaración del derecho a la salud. a pesar de la muerte del amperio. (p. 165,166)

7.5. No haya cesado la amenaza o el perjuicio no sea irreparable

Este requisito es entendible, en la medida que se condice con el objetivo concreto de los procesos de orden constitucional señaladas en el artículo II del Código Procesal Constitucional, sin embargo, como señala

Eto Cruz (2013) el mismo Código nos dice en su segundo párrafo del artículo 1, que existe la viabilidad de pronunciarse sobre el asunto en fondo del de las situaciones que han transcurrido luego de exhibida la demanda. Esta corresponde a la autoridad jurisdiccional, siendo así que en acuerdo a cada caso que se presente, resultando necesario valorar para estas cuestiones la demanda, en función a aquellas causas que este fallo pueda tener opción en un futuro, como una defensa procesal de valor preventivo la cual se da en los actos análogos u homogéneos e, incluso, en merito a la dimensión objetiva de un amparo como forma de prevenir, siendo así que estas situaciones de hecho inconstitucionales, podemos verlas plasmadas como ejemplo en la STC 2034-2009-PA/TC, en el cual el Tribunal expresó un pronunciamiento en función al derecho a la salud, a pesar de haberse originado el fallecimiento del recurrente (p. 165,166).

7.6. No se trate de una resolución firme de otro proceso constitucional ni haya litispendencia.

A pesar de dicho precepto legal, siendo así que el supremo interprete ha señalado en varias sentencias con el carácter de precedente, en el cual deja sentada la posibilidad de recurrir hacia un proceso de Amparo contra una resolución la cual está en un proceso análogo o de hábeas corpus, claro está con marcadas restricciones, véase las Sentencia 4853-2004-PA/TC y la STC 1761-2008-PA/TC.

7.7. No se trate de resoluciones definitivas del Consejo Nacional de la Magistratura

Esta causal, inoperante en la actualidad no sólo por el criterio jurisprudencial dado por el Tribunal Constitucional, sino por la desaparición de esta institución, se fundamentaba en la medida que pretendía mantener la autonomía e independencia de dicha institución, claro está siempre que en su momento hayan motivado correctamente sus resoluciones (Véase STC 3361-2004-AA/TC.)

7.8. No se trate de conflictos entre entidades de derecho público interno.

Dentro de la misma línea Eto (2013) nos dice que, que trata de toda la causa que se encuentra en algunos de los problemas que se han presentado en el Perú en torno a los procesos constitucionales, en especial el uso del amparo por parte de ciertas unidades del Estado contra otras unidades del Estado. En este sentido, independientemente del contexto que genere problemas entre las entidades gubernamentales, si implica la urgencia de establecer o precisar la competencia de ambas, se trata de un proceso jurisdiccional y no de amparo. una forma que corresponda a la resolución de la disputa en cuestión. (p. 167)

7.9. No haya vencido el plazo interponer la demanda

Aparentemente este es el punto más sencillo dado que sólo implica el conteo del tiempo transcurrido, sin embargo, salta la pregunta acerca de si se trata de un plazo prescriptorio o de caducidad, sobre el plazo es de prescripción. (Eto, 2013)

8. Proceso de amparo en la legislación comparada

8.1. Bolivia

Gallegos (2005) nos señala que la Constitución Política de Bolivia, esta valida desde 1995, la cual no estipula de manera escrita el amparo en contra de resoluciones judiciales, sin embargo, el amparo si regula lo común u ordinario, con la calificación de Recurso de Amparo Constitucional”, de la siguiente forma:

Artículo 19°.- Recurso de Amparo Constitucional el cual está fuera la proclamación del hábeas corpus a que se describe el apartado anterior se dicta en caso de acciones u omisiones ilegales de funcionarios o personas que limiten, supriman o pongan en peligro con limitar los derechos y garantías de las personas garantizados en esta Constitución y las leyes.

El recurso de amparo puede ser presentado por quien crea que ha sido injusto, o por otra persona con facultades suficientes salvo por las causales reguladas en el artículo 129 de esta Constitución ante las Cortes Supremas de Justicia con sede en las capitales de departamento de los Jueces de Distrito de las Provincias que lo tramiten sin demora.

El fiscal también puede presentar una denuncia contra la oficina si la persona interesada no lo hace o no puede hacerlo. Se invita a la citación en la forma presentada en el artículo anterior, a la autoridad oficial o la persona citada, para que informe y, en su caso, presente el procedimiento sobre el hecho notificado en un plazo máximo de 48 horas.

La decisión final se anunciará en audiencia pública inminentemente después de la acusación del imputado y, si esto no fuere posible, se hará con base en las pruebas presentadas por el solicitante. La autoridad judicial comprueba la competencia o las actuaciones de la persona, y si la denuncia es reconocida como correcta y eficaz, concede la protección solicitada, siempre que la persona que carezca de derechos y garantías no tenga otra opción o recurso legal de las garantías están

limitadas, bloqueadas o comprometidas. de oficio presenta su decisión a la Corte Constitucional para su revisión dentro de las 2 horas. Las decisiones anteriores de la autoridad judicial y la decisión final sobre el amparo se ejecutan sin demora y sin observaciones, y en caso de oposición se aplica lo prevenido en el artículo anterior.

8.2. Ecuador

La Constitución Política del Ecuador, regula el proceso de amparo contra resoluciones judiciales de la siguiente forma:

Artículo 95.- En esta Cualquier persona con derechos o un representante legal de la comunidad puede ofrecer un discurso a una autoridad judicial designada por la ley. Esta acción prioritaria y concentrada debe tomar medidas urgentes para detener, prevenir o remediar de inmediato el acto u omisión ilegal de la agencia que ofende o es probable que ofenda. un derecho previsto en la norma suprema o en un tratado o convención extranjera vigente que ponga en peligro con causar un perjuicio grave de manera inmediata. También puede interponerse demanda si la acción u omisión fuere cometida por personas que presten un servicio público o que operen bajo la tutela de una autoridad o con licencia de actividad. Las decisiones judiciales dictadas durante el proceso no están sujetas a acciones de amparo. También puede ejercitarse la acción de amparo contra un particular, si su conducta afecta grave y directamente a la comunidad o un interés común o un derecho fragmentado. El amparo no impide a un juez que lo ha de conocer y todos los días son negocios. El juez emplazará

inmediatamente a las partes a audiencia pública dentro de las 2 horas siguientes y, por la misma decisión, ordenará, si hubiere causa, la suspensión de todas las acciones que puedan conducir a la violación del derecho. El juez dictará sentencia dentro de las siguientes 8 horas, la cual será inmediatamente ejecutada, sin perjuicio de que esta sentencia pueda ser apelada ante la Corte Constitucional para su confirmación o nulidad. La ley prevé la aplicación de sanciones a las autoridades o personas que no cumplan con las decisiones del juez; y los magistrados que infrinjan el procedimiento de amparo soberanamente de cualquier acción legal. Para asegurar la ejecución de la orden, el juez puede tomar todas las medidas que estime necesarias e incluso puede recurrir a la ayuda de las autoridades públicas. No se aplican las reglas procesales del amparo, ni las disposiciones que retardan su pronta expulsión.

8.3. Chile

La Constitución Política de Chile, está bajo la denominación de Recurso de Protección, (Gallegos, 2005, p.96). Esta comprende que la vigilancia constitucional de resoluciones judiciales de la siguiente forma:

“Artículo 20.- El que, por actuación arbitraria o ilegal o por negligencia, sufra privaciones, hostigamientos o amenazas durante el ejercicio legal de los derechos y garantías previstos en el último párrafo del apartado 1, 2, 3 o 5, párrafos 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16 del artículo 19, disposiciones sobre libertad de trabajo, y disposiciones de los párrafos , 19, 21, 22, 23, 2 y 25,

podrán sí o cualquiera en él a recurrir ante el tribunal de apelación correspondiente, que adoptará los mecanismos que aprecie necesarias para reponer de inmediato el estado de derecho y garantizar la adecuada defensa de la persona interesada. , sin perjuicio de otros derechos en que pueda invocarse la autoridad o tribunal competente.

8.4. Colombia

La Constitución Política de Colombia, está vigente desde 1991, bajo la denominación de Acción de Tutela, comprende las resoluciones judiciales del control constitucional de la siguiente forma:

“Artículo 86º: Toda ser humanos tiene derecho a exigir ante un juez en cualquier tiempo y en cualquier lugar un procedimiento privilegiado y sencillo para la defensa pronta de sus derechos constitucionales fundamentales por sí o por quien actúe en su nombre, si se violan esos resultados. o está amenazado por la acción o inacción de cualquier agencia. La defensa consiste en una orden según la cual la persona para quien se solicita la tutela actúa o no actúa. La decisión, que se ejecuta inmediatamente, puede ser apelada ante el órgano jurisdiccional competente, quien en todo caso la remite a la Corte Constitucional.

La tutela consistirá en una orden para que el tutelado actúe o se abstenga. La decisión, que será admitida de inmediato, podrá ser recurrida ante el magistrado competente, quien en todo caso la remitirá al supremo intérprete de la norma para su eventual revisión.

Esta acción sólo continuará cuando el perjudicado no tenga otra defensa legal, solo en casos que se use como mecanismo temporal para evitar un daño irreparable.

8.5. Brasil

En la Constitución de la República Federativa del Brasil, se regula el llamado Mandamiento de Seguridad, de la forma siguiente:

“Artículo 5º.- Todos son iguales ante la ley sin discriminación alguna, que garantiza el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad y la inviolabilidad de la propiedad a los brasileños y extranjeros residentes en el país en las siguientes condiciones:

(...) LXIX.- Se dicta una orden de protección para la protección de un derecho específico y específico no protegido por habeas corpus o habeas data, si una institución o representante de una persona jurídica fue responsable de ilegalidad o abuso de poder durante el ejercicio de sus poderes, Público. LXX.- Puede establecerse (activarse) un régimen de seguridad colectiva: a) un partido político representado en el Congreso Nacional, b) un sindicato, asamblea de clase o asociación legalmente constituida, que tenga al menos un año menos de actividad, ampara los intereses de sus miembros o colegas.

8.6. Paraguay

Siguiendo a Gallegos (2005), la Constitución Política del Paraguay, prohíbe el proceso de amparo en contra resoluciones judiciales, sin

embargo, se está regulando el Amparo ordinario en los siguientes términos:

“Artículo 134 - Amparo: la persona que, por la acción o la inacción del gobierno o de un particular, haya resultado lesionada gravemente, o directamente lesionada conforme a los derechos o garantías previstos en esta Constitución o en la ley, y que, por la urgencia del asunto, no puede ser subsanada por la vía ordinaria, puede interponer recurso de apelación ante juez competente. El procedimiento es corto, ajustado, gratuito y popular en los casos que marca la ley.

El juez tiene derecho a asegurar un derecho o garantía o restituir prestamente la situación jurídica violada. Si se tratare de elecciones u organizaciones políticas, es competente el tribunal electoral. El amparo no puede ser anunciado en los juicios de causa, contra la acción de los órganos judiciales, ni en el proceso de hacer, sancionar y promulgar las leyes. La ley normalizará el modo correspondiente.

8.7. Argentina

En La Constitución Argentina, no legaliza el amparo contra resoluciones judiciales, sin embargo, veremos cómo se regula el Amparo ordinario en los siguientes términos (Gallegos, 2005, p.102):

“Artículo 43.- Cualquiera puede presentar una acción de amparo inmediata y rápida sin otro medio más adecuado contra las acciones u omisiones de

las autoridades públicas o de los particulares que ahora o pronto dañen, limiten, alteren o amenacen de forma arbitraria o evidente los derechos y garantías registrados en esta norma, tratado o ley. En juicio, el juez puede declarar inconstitucional la norma en que se basa la acción u omisión lesiva. Pueden ejercitar esta acción contra cualquier distinción relacionada con los derechos de protección del medio ambiente, de la competencia, del usuario y del consumidor y los derechos de representación colectiva en general, los derechos del interesado, del mediador y de las personas jurídicas.

Cualquiera puede presentar esta acción para obtener información sobre la información de referencia y su finalidad, que se conserva en archivos o bancos de datos públicos o privados, para fines de denuncia y, en caso de falsedad o discriminación, para solicitar su eliminación, subsanación, confidenciales o actualizarlos. La confidencialidad de las fuentes de información del proveedor no debe verse afectada.

8.8. España

En la Constitución española, no se normaliza el amparo contra resoluciones judiciales, sin embargo, el si se regula el Amparo ordinario en los siguientes términos (Gallegos, 2005, p.110):

“Artículo 53.- 2. Todo ciudadano puede solicitar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 1 y el capítulo segundo, apartado 1,

letra a, ante el Tribunal General mediante un procedimiento basado en el principio de prelación y sumario, y, en su caso, con recurso de amparo de la Corte Constitucional. Este último recurso se utiliza en los casos de negativa a entregar las armas reconocidos en el art. 30.

Artículo 161.- 1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en toda España y es competente para conocer:

(...)

b) De la protección judicial del amparo por la violación de los derechos y libertades definidos en el art. 53.2 de esta Constitución en los casos previstos por la ley y en la forma (...) art. 162.-1. Están legalizados en (...)

CAPÍTULO III

EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES

1. El amparo contra resoluciones judiciales

La norma suprema de 1979 no preveía una disposición sobre la admisibilidad del amparo contra las decisiones judiciales, ni lo aprobaba ni lo prohibía, pues el segundo párrafo (295) del artículo correspondiente se limitaba a declarar que la causa del amparo es "cualquier institución, un funcionario o una persona" que ponga en peligro o viole derechos fundamentales". Sin embargo, el hecho de que la constitución permita interponer un recurso de amparo contra cualquier "autoridad" permitió dilucidar que también puede interponerse contra los jueces si sus actos administrativos o las decisiones jurisdiccionales afectan derechos los fundamentales según su jurisprudencia y jurisdicción. (Eto, 2013, p. 155)

La ahora derogada Ley 23506 de 1982, que introdujo el proceso de amparo en el ámbito constitucional, (1979) el cual estableció un acuerdo en el artículo 6 inciso 2, que trata de la no revisión de las acciones de amparo contra las decisiones judiciales ordinarias. Llegado a la jurisprudencia, el Procedimiento Ordinario era aquel que seguía la tutela judicial efectiva y las garantías del debido proceso, por lo que sólo cabía recurso de amparo contra decisiones judiciales si se dictaban afectando tales derechos. (Eto, 2013, p. 155).

Abad Yupanqui (2004) al igual que Eto Cruz (2013) sostiene que existen dos teorías o tesis en relación con el origen del proceso de amparo

dirigido en contra de las resoluciones del órgano jurisdiccional, tesis negativa y tesis permisiva.

1.1. Tesis negativas.

Siguiendo a Abad (2004) para esta tesis no se resuelven como admisible un amparo contra las resoluciones judiciales, propugnando el principio de protección jurídica, ya que este proceso constitucional podría generar que aquellos problemas jurisdiccionales no tengan fin. Asimismo, se sustenta esta tesis en que es una sucesión tan breve como el amparo no podría invalidar un proceso más lato, en el que, dada la actividad probatoria, las partes tuvieron mayor posibilidad de defenderse, sin contar que, al tratarse de resoluciones ejecutoriadas, conllevaría a que un *ad quem* deje sin efecto lo resuelto por un *ad quo* (p. 740).

Al igual que el autor antes señalado, Jiménez (1990) afirma que, el derecho a la defensa judicial efectiva y la protección de esos derechos de orden procesales, si se define su valor constitucional, debe quedar bajo la obra de la justicia ordinaria, lo que resguardaría al mismo tiempo la autonomía de la administración de justicia (p.192-193)

1.2. Tesis permisiva.

La tesis permisiva reconoce el origen del amparo contra las decisiones judiciales y sustenta la mencionada posición donde la protección de los derechos fundamentales tiene que ser una prioridad,

independientemente de dónde o de qué entidad o persona se origine el quebrantamiento de los derechos fundamentales. (Abad, 2004)

Abad (2004) nos dice que podemos encontrar dos variantes: 1º) vertiente amplísima; 2º) vertiente amplia; y, 3º) vertiente restringida.

1.2.1. Tesis permisiva amplísima.

En este según el cual el amparo trata de cualquier acto u omisión del poder judicial que vulnere, limite o atente contra un derecho constitucional, consiste en verificar la legalidad y legalidad de las decisiones judiciales. (AMAG, 2016, pp. 66 y 67)

1.2.2. Tesis permisiva amplia.

Según esta teoría, el amparo se impone de manera inmediata y directa por las infracciones relacionadas con la acción o inacción del órgano judicial, cuando se hayan acabado todos los recursos legales o la infracción sea directamente imputable a la acción o inacción del órgano judicial. (AMAG, 2016, p. 67)

Como señala Sáenz Dávalos (2004), las garantías de la teoría de la teoría amplia permisiva deben aplicarse a todo tipo de sentencias, siempre que al dictarse se haya violado o puesto en peligro determinado derecho constitucional, cualquiera que sea su

origen o valor. Así, si la sentencia vulnera o coloca en riesgo a los derechos reales, el derecho a la igualdad, el derecho a disentir, etc., las garantías son indiscutiblemente válidas. Si bien, no importa quién sea el autor de la injuria o pone en riesgo de injuria, sino las consecuencias constitucionales de sus actos, que por tanto deben ser superadas. (p. 741)

1.2.3. Tesis permisiva restringida

Para esta postura, solo se produce el amparo en algunas situaciones, dada por defectos sustantivos, orgánicos, fácticos o procedimentales. (AMAG, 2016, p. 67)

Para Eto (2013) sostiene que se adoptó una teoría permisiva moderada cuando entró en vigencia la norma suprema de 1979, pero la Ley de Procedimiento Constitucional trajo consigo innovaciones en relación con el amparo contra las decisiones judiciales, pues lo permite bajo ciertas condiciones y continúa la línea determinada en la legislación y más temprano. la jurisprudencia siguió una teoría permisiva moderada, lo que también se reflejó en la corriente en la jurisprudencia, la misma cambiaría con la expedición de la STC 3179-200 -PA, ampliando el alcance del artículo constitucional para permitir el derecho a demandar. Los recursos de amparo a los autos judiciales no sólo para el efecto de los derechos procesales, sino también para la defensa de cualquier derecho fundamental, el citado

escritor alegó que después de 25 años había una oportunidad de pasar de una tesis moderadamente permisiva a una tesis ampliamente permisiva. (p. 155-157)

2. Amparo contra resoluciones judiciales en el Perú.

2.1. La Ley N° 23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo

Dentro del artículo 200 inciso 2 de la Norma Suprema prevé que “son garantías constitucionales: “El acto de amparo contra el hecho o la inacción de cualquier poder, funcionario o persona que viole o atente contra otros derechos registrados por la norma suprema. excepto lo mencionado en el párrafo siguiente. También dispone que no infrinja normas legales ni decisiones judiciales derivadas de procedimientos ordinarios.

Por tal razón, como sostiene López (2013), Se solicitó respuesta judicial a la decisión judicial de "Amparo" contra "nacimiento o no nacimiento" respecto de la exegesis de la prohibición dada en el segundo párrafo del artículo 200 inciso 2 de la Constitución, cuyo texto repite determinadas variantes de lo dispuesto en el artículo 6 inciso 3 de la ahora derogada Ley N° 23506, que el amparo no cumple con los requisitos derivados de las decisiones judiciales procesales ordinarias (p. 25) Considerando que tras el rechazo de la interpretación de la referida disposición constitucional en 2006. en el sentido de que no procede el

amparo contra la sentencia del tribunal, se acordó que en realidad el dispositivo en cuestión contenía más que una prohibición y limitación que operaba en los casos en que la sentencia resultaba del proceso ordinario pero la citada limitación no se aplicaba en aquellos casos en que la decisión judicial se hubiera dictado de manera irregular.

Durante el período de las leyes las garantías constitucionales de Habeas Corpus y Amparo, se desarrolló una jurisprudencia según la cual los magistrados comunes debían respetar sólo un cierto número de derechos en el ejercicio de sus funciones y/o jurisdicción básica. En concreto, sólo aquellas que sean de carácter procesal, es decir, la defensa procesal y todos los derechos que la acompañan. (Lopez, 2013, pág. 25)

2.2. El Código Procesal Constitucional, Ley N° 28237

La Ley Procesal Constitucional establece que, el amparo se describe a las sentencias firmes decretadas sobre la base de una aparente denuncia para obtener la tutela procesal efectiva, que incluye la tutela y las garantías judiciales. parte consintió en la decisión que supuestamente lo influyó.

Cuando se insertó la preexistencia constitucional y natural del amparo contra una solución judicial, esta vez surgieron discusiones en foros científicos, donde se examinó en base de la política jurídica del país

su uso o no las medidas extraordinarias. Las sentencias ordinarias con fuerza de ley se dejan sin efecto o se anulan. (Lopez, 2013, p. 29)

3. Resoluciones Judiciales Cuestionadas Vía Amparo

El concepto de finiquito judicial comprende aquellos actos procesales por los cuales se adelanta o se decide o se detiene este proceso, clasificados como decretos, autos y sentencias. (Carrión, 2000, p. 361) en el artículo 120 del Código de Procedimiento Civil.

3.1. Decretos

Según la definición del Código Procesal Civil, las leyes son aquellas decisiones que favorecen el desarrollo del proceso y prevén procedimientos sencillos caracterizados por su sencillez, brevedad y falta de motivación en el texto. (Carrion, 2000, p. 361)

3.2. Autos

Son las decisiones por las que el juez decide sobre la procedencia o rechazo de la demanda o reconvención, las condiciones sanitarias, la suspensión, terminación y formas de las decisiones especiales; la satisfacción o rechazo de las demandas; aceptación, no indaga ni modifica las medidas de seguridad y demás decisiones que requieran su publicación y que se caractericen tanto por una consideración como por un componente resolutivo.

3.2.1. Autos que ponen fin al proceso

Tienen contenido resolutivo, pero no son sentencias, si no son más que las que contienen una decisión sobre la procedencia de la pretensión en la acción y por tanto detienen la manifestación del proceso judicial. En este sentido, un auto puede poner fin a una sentencia, pero no a una opinión sobre el fondo, por lo que este auto resuelve no una cuestión de fondo, sino de procedimiento. (Cavani, 2017, pág. 122)

3.2.2. Autos interlocutorios

Llamados intermedios por la profesora Ariano Deho (Citada por Cavani, 2017) se caracterizan porque a través de ellos se decide cuestiones procesales a lo largo del proceso. (p.122)

Por su parte La Enciclopedia Española de Derecho y Administración (Citada por la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Exp N° 73-2010) Afirmó que los mandatos judiciales son cualquier orden emitida por jueces y tribunales durante los procedimientos de un caso civil o penal para gestionar o finalizar ese caso.

También definió la siguiente clasificación: “autos interlocutorios de fuerza firme, los que deciden y concluyen una cuestión accidental planteada en el curso del juicio, y llevan todas las consecuencias de la acción final; y los alegatos y rituales del juicio, que forman parte del proceso y orden del juicio, pero no

deciden ni concluyen nada, y no tienen más facultad que la de razonar”.

3.3. Sentencias

Finalmente, Conforme el artículo 121° del Código Procesal Civil Peruano, las sentencias son resoluciones que ponen fin a un juicio o proceso de una vez por todas y reconocen una decisión expresa, precisa y motivada sobre la declaración del derecho de las partes o la eficacia de la relación procesal en un caso excepcional.

4. Fundamento extrajurídico del proceso de amparo contra resoluciones judiciales.

Señala Saénz (2003) que, como seres humanos, los jueces también son propensos a realizar errores u omisiones en su trabajo diario, por lo que en cualquier estado de derecho donde se otorguen a los jueces las facultades necesarias para resolver sobre los derechos de las personas, no se puede configurar la posibilidad de arbitrariedad. como una conjetura lejana. Por el contrario, cada vez que el destino de la libertad, la propiedad, el honor y tantas otras cualidades básicas están en manos de los legisladores, surge la pregunta de si existe el peligro de socavar el alcance de la ley en la realización de tan importantes. tarea la competencia que le concede el cuerpo jurídico y si existen los mecanismos necesarios para corregir los excesos en dicha situación. (p. 733)

5. Procedencia del amparo contra resoluciones judiciales

Según sostiene Merino y Angeludis, que la motivación del recurso de amparo contra decisiones judiciales radica en la presencia de una anomalía, que es la posibilidad real y real de que los jueces ordinarios dicten decisiones contrarias o lesivas de la base constitucionalmente regulada” (p. 11). Los autores citan a Sáenz, refiriéndose a Dávalos, ante la peripecia de que se cometan graves exageraciones o manifiestas injusticias, se acepta la posibilidad de que el proceso de amparo sea incompatible con las decisiones judiciales. (p. 11)

Agregan Merino y Angeludis que, “Contrariamente a la opinión de Abad, encontramos que se garantiza una protección amplia contra las sentencias que pueden revisarlas si afecta los derechos a la tutela procesal efectiva y todos los demás derechos fundamentales tutelados y no está afectada por el Habeas Corpus y el Habeas Data. Por supuesto, en respuesta a los puntos expuestos, esto debería suceder en casos excepcionales y no se convertirá en la regla, sino que seguirá siendo la excepción”. (p. 12)

Por su parte Castillo (2009) plantea que, “La aparición del amparo y del hábeas corpus contra las decisiones judiciales se justifica, si consideramos que los citados requisitos constitucionales van en contra de la vulneración de determinado derecho fundamental, precisamente para acabar con ella, devolviendo las cosas a la agresividad anterior. En este caso, el supuesto de origen necesario es la posibilidad de que la solución jurídica se convierta en un atentado contra un derecho fundamental concreto (en forma de vulneración real

o de amenaza concreta e inmediata). Sin embargo, este supuesto no puede mantenerse si no se mantiene la conexión del órgano judicial con la constitución en general y con los derechos fundamentales reconocidos en ella en individual. Así, debe concluirse que el fundamento para la aparición del amparo y habeas corpus contra las decisiones judiciales es la vigencia real de la constitución en el pleno alcance de los derechos fundamentales reconocidos en ella. Estos requisitos constitucionales se convierten en un medio para comprobar la constitucionalidad de los actos del poder, en este caso del poder judicial. (p. 4.)

6. Criterios para la procedencia de demandas de amparo contra resoluciones judiciales.

6.1. Criterios Establecidos por el Código Procesal Constitucional

Sin limitar los criterios generales para todo proceso constitucional en el artículo 5° de la Constitución, el artículo ° de la misma ley establece criterios específicos para el recurso de amparo contra decisiones judiciales, uno de los cuales es que la parte agraviada no haya dado su consentimiento. a la decisión que le concierne, aspecto que no merece mayor discusión, lo mismo no se aplica a la limitación del amparo en los supuestos mencionados con el quebrantamiento de la defensa procesal efectiva, que incluye la tutela y las garantías judiciales, de ahí dicho criterio. necesita analizar.

6.1.1. Tutela Procesal Efectiva

Carrión (2000) concibe a la tutela jurisdiccional contra acciones. Toda persona goza del derecho a la defensa judicial efectiva para ejercer o proteger sus derechos o intereses, con sujeción desde luego al debido proceso. El derecho a la tutela judicial es el derecho que tiene toda persona a hacer efectivo su derecho de tal manera que, si exige algún beneficio de otra persona, el tribunal atienda y proteja esta pretensión con una mínima garantía. (p. 42)

Igualmente, Rubio Correa (1999) señala que los derechos que debe comprender la tutela judicial efectiva deben ser los siguientes:

- a) La posibilidad de tener acceso a los órganos jurisdiccionales (del Estado), iniciando un proceso;
- b) La conseguir una sentencia la cual declare el derecho de cada una de las partes;
- c) Interponer recursos;
- d) El de solicitar y obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia definitiva. (p. 64 a 65)

Para Gonzáles Pérez, (citado por Eguiguren, 2002) abarca tres aspectos:

- a) El derecho de acción de las partes, que incluye el acceso libre, efectivo, amplio e ilimitado a la jurisdicción de la autoridad competente del Estado;

- b) El derecho a seguir el debido proceso conforme a las normas y prácticas aplicables conforme a la vigencia de la ley; y,
 - c) En el proceso se dicte sentencia firme organizada por ley que contenga al menos contenido equitativo, que pueda ser efectivamente ejecutada, en su caso por medios coactivos.
- (p.210)

Por último como sostiene Gallegos (2005) La Constitución se encargó de concretar el comprendido de la defensa judicial efectiva, destacando en su artículo que: El amparo se ocupa de las decisiones judiciales firmes que se hayan dictado para la protección procesal manifiestamente segura, que alcanza el camino a la justicia y el debido proceso de una manera distinta a la prescrita por la ley, una solución que resulte de derecho para encontrar, a nuestras reguladas posibilidades de impugnación, la imposibilidad de reactivar los procesos caducados, la acción adecuada y oportuna, la ejecución de las decisiones judiciales y el cumplimiento del principio de legalidad que favorece la cesación del delito. (p. 81 y 82)

6.1.2. Debido Proceso

Para Ticona (1998) citado por Gallegos Paz (2005) El debido proceso es un derecho humano o derecho fundamental de todo

sujeto, que le confiere el derecho a requerir del Estado un juicio ecuánime y justo ante un juez garante, competente e independiente. (p.66)

Para el constitucionalista Rubio (1999) el procedimiento adecuado es seguir todas las salvaguardas y reglas de política pública que deben aplicarse en este caso. Debe hacer el proceso de conformidad con la ley (...), si no se sigue el proceso correspondiente, la audiencia del tribunal no se llevó a cabo en la forma habitual y luego la acción de amparo continúa hasta las sentencias. (p. 55 a 56)

Para Eguiguren (2002):

El derecho a un juicio judicial adecuado o justo demanda, por tanto, que el acusado tenga garantías sobre la corrección del caso, en otras palabras, que el juicio se lleve a cabo de acuerdo con las normas y reglas de la práctica consuetudinaria previamente establecidas, lo que asegura una administración razonable. condiciones para la presentación y liquidación de reclamaciones de las partes y recopilación de pruebas. (p.211).

Finalmente, para Sáenz Dávalos (2004), el cual nos dice que:

El debido proceso es la garantía que cuenta todo ser humano de litigio a confiar en la observancia de esos principios

procesales (excepcionalmente también sustantivos) y otros principios relevantes en los tribunales, para que la cuestión pueda ser expresada y resuelta de manera verdadera y justa. Esto quiere decir que el proceso judicial en cualquier de sus manifestaciones legales o ramas del derecho, no es, ni debe presentarse de ninguna manera, como un medio formal para lograr fines específicos, los fines de la justicia, sino como un medio proporcionado de reglas adecuadamente idóneas, especialmente principios ventajosos, para que el resultado alcanzado pueda considerarse o pueda tenerse en cuenta justa o indiscutiblemente (no sólo en el resultado, sino también en el resultado como medio) Aquellos lineamientos o reglas que dan sustancia al proceso y lo diferencian de todo salvo de la procedimiento de problemas rigurosamente jurisdiccionales, son aquellos que en forma colectiva o agrupada expresan lo que se denomina jurisdicción. (p.744-745)

6.1.2.1. Contenido

Rubio (1999) citado por Gallegos (2005) dice que el debido proceso es una establecimiento anglosajon que se comporta de manera anglosajona, y por lo tanto sólo puede ser específico y especificado por la propia ley y la jurisprudencia que de forma creativa la aplica. Esto, por supuesto (y ante los anglosajones), también lo hicieron los

romanos. Así, no existe una diferencia fundamental entre el concepto de debido proceso y entre la disonancia cualitativa del entorno jurídico. Lo que sucede es que debe pensarse como un concepto distinto, pero abierto a las sentencias de los jueces. (p. 58 a 60).

6.1.2.2. Clases

En la corte, una audiencia adecuada se clasifica como una audiencia sustantiva y procesal.

6.1.2.2.1. El debido proceso sustantivo

Para Eguiguren (2002), citado por Gallegos (2005) el debido proceso sustantivo es, el derecho a que los derechos fundamentales no sean injustificadamente afectados por cualquier pronunciamiento gubernamental, ya sea jurisdiccional, legislativo o administrativo. Es decir, el debido proceso contiene esencialmente el comprendido de justicia o racionalidad que toda decisión oficial requiere. Corresponde, por tanto, no sólo al medio sino también hasta el final (...), es decir, es un requisito de la prudencia, que debe orientar todas las actuaciones del mando y como tal participa a todas las formas de proceso. (p.212-216)

6.1.2.2.2. El debido proceso adjetivo

Para el mismo Eguiguren (2002), citado por Gallegos (2005), indica que, debido proceso se define como " } las garantías jurídicas de todo procedimiento, es decir, toda organización de principios y derechos que incumben a las partes tras el debido proceso, que puede ser y es en la mayoría de los casos de jurisdicción.(p.212).

6.1.3. Diferencias entre tutela judicial efectiva y debido proceso

A decir de Rubio, (1999) citado por Gallegos (2005) precisa que,

“En cuanto a la proximidad de las dos nociones (debido proceso y tutela judicial efectiva), tiene más sentido decir que el debido proceso y la tutela judicial entienden ser en esencia los mismos derechos con dos nombres diferentes, porque tuvieron dos orígenes distintos. de naciones y familias jurídicas (en el sistema anglosajón surge el debido proceso legal, en cambio la defensa legal surge en el sistema romano-germánico) Desde nuestro punto de vista, la constitución es una de las opciones de este párrafo, y en este caso se deberá optar por el procedimiento legal adecuado, que es el más reconocido en la legislación vigente. (p. 64 a 65)

7. Canon Interpretativo para resolver los procesos de Amparo

El hecho de que sea necesario revisar las decisiones de los tribunales merece ser interpretado como un ejercicio legítimo del control de legal de las decisiones de los jueces ordinarios.

El canon de interpretación adaptable a las decisiones judiciales impuestas en el proceso de Amparo consta de tres análisis o pruebas: “1) prueba de razonabilidad; 2) prueba de consistencia y 3) prueba de adecuación establecidas por parte de la Corte en la Sentencia N° STC N° 03179-200.-AA/TC y desarrollado por STC No. EXP N 03238-2013-PA/TC, especificando que las decisiones de control judicial necesarias para determinar: a) razonable: el alcance del control (decisión específica); b) consistencia: controlar sólo aquellas decisiones o acciones directamente relacionadas con el ejercicio de los derechos y c) adecuación: el control debe pasar en la medida necesaria para restablecer los derechos) .ejercicio de derechos". (Merino y Angeludis, p. 6)

7.1. Examen de razonabilidad

La prueba de razonabilidad debe utilizarse para valorar si la supervisión de todo el proceso legal ordinario es adecuada para establecer si se viola el derecho fundamental buscado por el tribunal. (EXP. N° 03179-200 -PA/TC) Este juicio enuncia la urgencia de instituir un límite aceptable a la función de control que incumbe al órgano constitucional. Así, el criterio de racionalidad consiente acotar el ámbito de la supervisión

hasta tal punto que la supervisión de las decisiones es en buena medida también el control del proceso. (EXP. N.º 02598-2010-PA/TC)

7.2. Examen de coherencia

La prueba de consistencia requiere que el juez constitucional especifique si la acción lesiva en ese caso está directamente relacionada con el juicio o decisión que es objeto de la acción; de lo contrario, el tribunal no estaría completamente admitido en la revisión integral del procedimiento ordinario, si no tiene relación con el delito. (EXP No. 02598-2010-PA/TC)

Es, en el buen sentido, el criterio de la conexión entre la acción dañina y la acción controlada. El requisito de continuidad puede utilizarse para comprobar la legitimidad del juez constitucional al examinar la decisión del tribunal. Sólo son susceptibles de revisión las decisiones que estén directamente relacionadas con la violación condenada por el juez constitucional o así definida según el principio *iura novit curia*. (EXP No. 03238-2013-PA/TC)

7.3. Examen de suficiencia

La prueba de adecuación impone a la Corte Constitucional el deber de “establecer el ímpetu del control de orden constitucional necesario para definir el límite del control legal ordinario para garantizar el derecho fundamental exigido”. (EXP No. 03179-200 -PA/TC)

Así, la prueba de idoneidad permite fijar los límites de la inspección, es decir, la medida en que el juez constitucional tiene legitimidad acorde a lo regulado en el artículo 1 de la Carta magna para llevar a cabo los procesos de objeto constitucional, devolviendo los asuntos al estado ante el tribunal constitucional, el derecho es vulnerado o amenazado (EXP No. 01077-201 -PA/TC)

El criterio de control realiza un papel importante en aquellos contextos en que se vulneran derechos constitucionales como consecuencia del ejercicio del poder. En este contexto, el proceso de amparo es una garantía legal real de los derechos sólo si es posible restablecer la acción al momento previo a la transgresión de los derechos a que se refiere la acción, y ello sólo es viable si el magistrado constitucional tiene la facultad de anular o determinar la nulidad, según el caso, de cualquier acción o decisión de cualquier jurisdicción realizada sin atender a los fundamentos. Así, la intensidad del control exige también una prueba equilibrada entre dejar la sentencia en vigor para garantizar la seguridad jurídica que brinda u obligarlo a restablecer el ejercicio del derecho constitucional citado en relación con el amparo que continúa después de la sentencia. (EXP No. 01077-201 -PA/TC)

8. Proceso de amparo contra resoluciones emanadas de procesos constitucionales

Tal como señala López (2013) “la posibilidad de

revocar decisiones judiciales actualizadas en procesos constitucionales iniciando nuevos procesos constitucionales es un tema muy controvertido porque vulnera los planes o postulados del pasado que confirmaban la persistencia de las sentencias y la seguridad jurídica creada por ellas, en el ámbito judicial. Además de que fue en procesos constitucionales dictados con decisiones que gozaban de confianza y credibilidad social, aun cuando fueron dictadas en profunda violación de los derechos constitucionales. (p.139)

Esta controversia, parece estar dispuesto por lo prevenido en el artículo 5 inciso 6 de la Carta Magna, del cual, tomado literalmente, se concluiría que nuestro ordenamiento constitucional prohíbe categóricamente el recurso de amparo constitucional contra cualquier decisión derivada del proceso constitucional. La Corte Constitucional precisó en su precedente simbólico en la Sentencia No. 386-200 -PA/TC que *“(...) si el artículo 5 inciso 6 del proceso constitucional se refiere a que la constitución no puede ser aceptada en el proceso constitucional que pone en entredicho otra decisión procesal constitucional renovada por la Corte, esta disposición limitativa debe concebir referida a procesos en los que el debido proceso y la tutela procesal efectiva en sus diversas expresiones han sido estrictamente observados en los términos del artículo de la misma Constitución. interpretación excluye completamente la posibilidad de “Amparo contra amparo” sería inconstitucional, lo que motivó el otorgamiento de un proceso de amparo contra lo decidido en otro proceso constitucional, en la medida en que el anterior violó derechos constitucionales.*

8.1. Proceso de Amparo contra amparo

Un caso especial del proceso de Amparo contra decisiones judiciales es el denominado “Ampara contra Amparo”, el cual sigue sus propios criterios de aceptación y valoración, criterios revelados por la Corte Constitucional en el N° 04853-2004-AA/TC y posterior desarrollo en diversas sentencias constitucionales como son la STC N.º 04650-2007-PA/TC, Exp. N.º 02663-2009-PHC/TC, N.º 02748-2010-PHC/TC, Expediente N.º 03908-2007-PA/TC, N.º 05059-2009-PA/TC, N.º 03477-2010-PA/TC, N.º 02205-2010-PA/TC, N.º 04531-2009-PA/TC, N° 04063-2007-PA/TC, N.º 01797-2010-PA/TC, N.º 03122-2010-PA/TC N.º 02668-2010-PA/TC, entre otras, exponiéndose los siguientes:

- A. Vulneración patente
- B. En materia laboral la procedencia da inca pie al acatamiento previo o efectivo de la sentencia expresada en el primer proceso de amparo.
- C. Su legitimación solamente obra únicamente con una oportunidad.
- D. Esto se aplica al rechazo tanto de sentencia como de valoración.
- E. Esta autorización está sujeta a la violación de uno o más derechos constitucionales,
- F. Protege la jurisprudencia vinculante aprobada por la corte Constitucional.
- G. Tiene derecho a defenderse frente a terceros, y frente al querellante que por causas excepcionales y debidamente autorizadas no haya podido incorporarse al recurso de amparo.

- H. Es adecuado como dispositivos de defensa frente a precedentes vinculantes determinados por la Corte Constitucional.
- I. No actúa sobre la base de decisiones de la Corte Constitucional.
- J. Esto continúa incluso si el proceso se vuelve inconstitucional en alguna otra etapa, como la solicitud.

8.2. Proceso de amparo contra Hábeas Corpus

Señala López (2013) que, el proceso de amparo constitucional contra el hábeas corpus tiene por objeto corregir una violación de los derechos fundamentales de una persona, excepto el derecho a la libertad personal, ocurrida durante la decisión final del constitucional. Los derechos fundamentales que pueden ser tutelados por el proceso de amparo y por tanto son ajustables las normas procesales (procedimiento, plazos, advertencias, decisiones, etc.) según el procedimiento constitucional. (p.140)

En la medida que los precedentes establecidos en los Expedientes N° 04853-2004-PA/TC, y 03908-2007-PA/TC, caso Pro vías Nacional, son extensibles a todas las resoluciones que emanen de procesos constitucionales, lo son obviamente al proceso de Hábeas Corpus, Eso sí, los matices del caso, como su aceptación, están condicionados por la infracción de uno o más derechos constitucionales, cualquiera que sea su ambiente, salvo el derecho a la libertad personal, que se protege “contra el hábeas corpus”. habeas corpus". (Lopez, 2013, p. 143)

8.3. Proceso de amparo contra Hábeas Data

La Corte Constitucional ha confirmado en varias de sus decisiones, como las actualizaciones emitidas en los No. 035 7-201 -PA/TC y No. 035 7-201 -PA/TC, que el proceso de amparo contra los recursos de hábeas sigue las decisiones del proceso. Amparo vs. Amparo, cuyos criterios se encuentran establecidos en las sentencias antes citadas, vale la pena referirse a los criterios señalados en este sentido.

CAPÍTULO IV

EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA

1. Concepto

Según Sagues (1997), la seguridad jurídica significa tanto la capacidad de anticiparse a los hechos jurídicos y darles un curso firme, como la capacidad de inspeccionar y contrarrestar los peligros a los que tiene que hacer frente el ordenamiento jurídico. (p. 218) porque incluye tanto la seguridad nacional como la seguridad personal.

Por su parte Pérez (2000), señala que, la seguridad jurídica es un criterio profundamente concerniente con el estado de derecho, que se define como los siguientes requisitos objetivos: cambio organizado y corrección funcional, observancia de los destinatarios de la ley y especialmente de las normas jurídicas) y autoridades responsables de su aplicación. Junto a esta dimensión objetiva, la seguridad jurídica se muestra en su sentido subjetivo, que enclaustra la convicción de la ley. (p.25)

Asimismo Ávila (2012) manifiesta que, la seguridad jurídica puede definirse como una norma fundamental que obliga a las autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales a comportarse de manera que contribuya más al bien de los ciudadanos y a la existencia de un espacio legal confiable desde su punto de vista, la racionalidad de las organizaciones cuestionables que reconstruyen las normas generales e particulares a través del control jurídico como medio que garantiza el respeto a su capacidad de expresar su presencia con dignidad y responsabilidad sin engaño, decepción, sorpresa o ilegalidad y de hacer una organización estratégica del conocimiento jurídico futuro .(p. 274)

Afirma por su parte Gallego Marín (2012) que la seguridad jurídica significa un estado psicológico en el que una persona percibe satisfacción y paz, observando cómo se garantiza y cómo se realiza la lista de valores del ordenamiento jurídico. (p. 76)

En nuestro país la corte constitucional ha determinado que, el principio de seguridad jurídica es parte integral del estado constitucional de derecho. La previsibilidad de la conducta (especialmente de las autoridades) ante supuestos previamente definidos en la ley es una garantía que comunica todo el ordenamiento legal y fortalece la prohibición de la arbitrariedad. (STC N° 0016-2002-AI-TC)

2. Niveles de la Seguridad Jurídica

Siguiendo a Sagues (1997) a pesar tratando de construir la noción de seguridad jurídica en sus dos versiones, que predice comportamientos estables y neutraliza riesgos, el autor mencionado dividió tres niveles:

2.1. Primer Nivel – El “Quien”

Para el autor en referencia, este nivel está referido a la seguridad de la persona o institución que emitirá la decisión correspondiente, ejemplificando un estado despótico en el que el gobernante es quien en definitiva toma la decisión final. (Sagues, 1997, p. 218)

2.2. Segundo Nivel – El “Cómo”

En este además de conocer la persona que emitirá la decisión, también resulta previsible el contenido de la decisión, como nos dice SAGUES, se da un paso adelante cuando es posible predecir en gran medida el contenido concreto de las decisiones futuras de los participantes en su ordenamiento jurídico. Esta seguridad de contenidos requiere saber cómo y qué pretenden solucionar estos operadores. En el caso del primer grado, se sabía quién daba las respuestas legales (el déspota), pero no puntualmente cuál era la respuesta, porque dependía esencialmente de su juicio equivocado. Por otro lado, en el segundo nivel, es posible anunciar tanto el cuerpo como el tiempo de fallo y su posible mensaje. En el segundo nivel, en definitiva, se requieren decisiones nacionales de acuerdo con el sistema constitucional de distribución de poderes, de cada órgano y de acuerdo con los lineamientos de contenido que emanan de la constitución. (p. 219)

Sobre este nivel, Ávila (2012) lo reconoce más bien como un “indicador” de la Seguridad Jurídica, conceptualizándolo como “calculabilidad” que se refiere a la capacidad que tiene un ciudadano de prever en el momento las consecuencias futuras de sus actos. Desde el punto de vista de la calculabilidad, es importante que la mayoría de los individuos (espectro de predicciones) pueda controlar un número pequeño de consecuencias comprensibles (espectro de consecuencias) dentro del tiempo racional (espectro de tiempo)" (p.18)

En este nivel La seguridad jurídica debe entenderse como la certeza de legalidad o conocimiento, y por tanto la previsibilidad de los resultados jurídicos que pueden derivarse de una definitiva acción. Esta certeza se entiende como cierta información sobre el ordenamiento jurídico vigente y las garantías protegidas por la ley. (Gallego, 2012, p. 77)

2.3. Tercer Nivel – “El qué”

En este sentido, el concepto de seguridad jurídica es mucho más exigente: “su finalidad es predecir y quién, cómo y qué de la conducta de los sujetos de derecho, así como una pequeña dosis de racionalidad, legitimidad o justicia en esas actuaciones”. (Sagues, 1997, p. 219)

Es decir, se exige conocer además del contenido de los otros niveles, la motivación que fundamenta la decisión del ente o persona encargada de decidir, lo cual el citado autor se refiere a lo que está expresando en lo que es la seguridad jurídica, esta se emplea normalmente en el tercer nivel.

3. Manifestaciones o indicadores¹ del principio de Seguridad Jurídica

3.1. Ignorancia del Derecho

Acorde al artículo 109° de la Norma Suprema del Perú, la ley obliga desde el día siguiente de su promulgación, lo que excluye decisivamente el desconocimiento de la ley alegada, ficción que promueve la seguridad jurídica, porque la eficacia de una norma no puede depender del conocimiento real de la ley que se prueba. lo mismo, por supuesto, para todos los ciudadanos, el Estado se encuentra en la obligación de proporcionar medios adecuados para su difusión.

Así Pérez (2000) nos dice,

“La función de la ignorancia de la ley en el estado de derecho es asegurar que la validez y eficacia general de las normas no sean utilizadas por sus destinatarios obligados como excusa para su ignorancia. Pero al mismo tiempo, el estado socialdemócrata, en la medida en que como comprende no sólo un orden formal de garantías, sino también un régimen de valores materiales no puede persistir indiferente a las condiciones subjetivas que afectan la observancia de la ley”

¹ Término utilizado por el profesor Humberto Ávila.

A este indicador, Ávila (2012) lo denomina cognoscibilidad considerando que “El derecho tiene perceptibilidad material (certidumbre sobre la existencia y validez de las normas) y perceptibilidad intelectual (certidumbre relativa al contenido de las normas)”, porque la materia incluye a su vez i) accesibilidad normativa, es decir, la posibilidad de acceder a las normas, que es compartida. en la existencia de disposiciones normativas y la vigencia de las normas; ii) Cobertura normativa, que exige la existencia de codificaciones y iii) La posibilidad de identificación normativa en un caso especial, que incluye la necesidad de conocer la norma de conducta supuestamente válida y directamente aplicable. Además, el conocimiento intelectual tiene dos aspectos. El primero es la inteligibilidad desde la claridad normativa en la medida en que el destinatario debe comprender lo que prescriben las normas, y el segundo aspecto es la inteligibilidad desde la definibilidad normativa. (p. 14)

3.2. Cosa Juzgada

Afirma Pérez (2000) nos dice que se utiliza el término cosa juzgada para significar las decisiones comprendidas en la sentencia irrevocable. También lo confirma la diferencia jurídica en sentido formal (la irrevocabilidad de la decisión, que es inapelable: porque las demandas han caducado, porque la excedido el plazo para su presentación o por haber desistido de su solicitud.) y materiales (la imposibilidad de una nueva investigación y/o una nueva decisión en el proceso iniciado contra los interesados). En relación al principio procesal *ne bis in idem* suele

presentarse como el base de esta categoría básica de seguridad jurídica. Esta máxima se refiere a la necesidad de que todo ordenamiento jurídico deje de oponerse y modificar las decisiones judiciales y algunos actos administrativos. Sin esta limitación, la experiencia jurídica correría el peligro de ser una serie continua de procesos y decisiones contradictorias sobre el mismo tema. El Instituto de Seguridad Jurídica vela por la permanencia de las decisiones judiciales. La cosa juzgada, que funciona como una realidad jurídica, responde a diferentes perspectivas de seguridad jurídica: primero, la libertad de los sujetos que exigen la certeza de que la decisión es permanente; en segundo lugar, al requerimiento de la academia jurídica de que a partir de un momento explícito y en interés de la paz judicial, la duda y la lucha por la justicia deben cesar en la búsqueda de todas las especialidades”. (p. 31)

Aunque el citado autor reconoce la Cosa Juzgada como una manifestación de la seguridad Jurídica, a decir de Ávila (2012) esta institución se encuentra comprendida en un espectro más amplio² que él denomina “confiabilidad” clasificándola como un sub tipo de *intangibilidad de situaciones individuales por razones objetivas* (p. 16)

² Aunque dentro de los indicadores de seguridad jurídica.

3.3. Irretroactividad y derechos adquiridos

Conforme Pérez (2000) menciona que, la retroactividad se entiende como el reflejo del alcance temporal de las normas sobre hechos o conductas antes de su vigencia. Básicamente, ninguna ley es retroactiva en sentido estricto, porque la ley no puede regular o cambiar el pasado, sino sólo prorrogar su vigencia. consecuencias jurídicas por situaciones que ocurrieron en el pasado. Aquellas situaciones pasadas que tienen consecuencias jurídicas actuales, pueden estar plenamente implementadas (retroactividad verdadera) o pueden haber comenzado en el pasado para continuar en el presente (retroactividad impropia). La prohibición de la retroactividad es una manifestación fundamental y especial de la seguridad jurídica, esta exigencia de la ley encontró plena aprobación en el célebre postulado de la ilustración jurídica: *Nullum crimen nulla poena sine lege*, donde la expresión *lege* se entendía siempre como *lege anterior*. En el ambiente cultural de la Ilustración, que es una de las matrices ideológicas inmediatas del estado de derecho, se considera como una victoria inalienable del proceso de racionalización de los sistemas jurídicos que sus normas siempre crean consecuencias jurídicas antes y no después. En un estado de derecho liberal, la irreversibilidad alentaba la búsqueda de la inmovilidad legal. El Estado social de derecho significó un cambio de rumbo porque es incompatible con el inmovilismo normativo e institucional, que conduce a la osificación del sistema jurídico. En esta forma política, abierta y permeable a las necesidades sociales, la seguridad adquiere un sentido dinámico que exige la aceptación tácita del *rebus sic*

stantibus como criterio básico de la política legislativa. Con base en este supuesto de la irreversibilidad de las normas, se considera un valor que debe mantenerse en tanto se mantenga la relación leída por las normas. Si, por el contrario, mezclan los contextos que dieron lugar a la promulgación de la ley, el ordenamiento jurídico como medio de avance y desarrollo no puede resistir su mutación. (p. 32)

Los derechos adquiridos suelen significar aquellos derechos que están válidamente diseñados y establecidos en virtud de una determinada legislación. “Reconociendo los derechos alcanzados, se tiende a no discutir las situaciones jurídicas previamente determinadas, a fin de asegurar la confianza de los ciudadanos y la estabilidad de la propia ley. La confianza de una persona en la ley se basa en gran medida en un respeto general por las facultades, privilegios y contextos que el ordenamiento legal ha decidido poner a su servicio para lograr sus fines personales. La teoría de los derechos inherentes ha sido continuamente citada como ejemplo de la tracción entre justicia y seguridad jurídica. La naturaleza intangible de los derechos inherentes puede conflicto con la justicia y el bien común. El estado de derecho significó una revalorización de los derechos adquiridos, lo que supera el dilema garantía-derechos. El problema de los derechos logrados en el estado de derecho no es sólo una cuestión de legalidad, sino de legitimidad. El reconocimiento de los derechos logrados en tales condiciones no se limita a las condiciones de validez formal de la legislación en virtud de la cual surgieron, sino que se extiende también a

las condiciones de justicia definida (requisito de buena fe, ausencia de dolo...). establecimiento y mantenimiento de tales derechos". (Perez, 2000, p. 32-33)

4. Seguridad Jurídica en los estamentos Estatales

En la medida que “El estado de derecho, como norma fundamental, requiere que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial adopten conductas que promuevan más la existencia en beneficio de los ciudadanos”. (Avila, 2013, p. 3) es necesario analizar dicha institución en la perspectiva de cada atribución mencionada.

4.1. Seguridad Jurídica en el poder legislativo

Señala el profesor Ávila, (2012) que, el parlamento debe cumplir con sus obligaciones constitucionales de salvaguardar la seguridad jurídica. Entre ellas se encuentran la obligación de determinar premisas fácticas, la prohibición de limitar los derechos personales, los actos jurídicos absolutos o cosa juzgada, la contravención de legislación retroactiva que afecte a los fideicomisos legítimos, la obligación de instituir disposiciones transitorias reglas o cláusulas de equidad, etc. (p.134)

Expresa por su parte Pérez (2000) que la seguridad en ese ámbito está siendo mermada dada la inflación normativa, “Lo mismo que vino acompañado de un grave debilitamiento de la estructura formal de las

propias normas jurídicas, es decir, la certeza de la ley como posibilidad real de que sus destinatarios conozcan y sigan sus disposiciones, el dique normativo y su constante cambio tienen. sufrido, pero al menos la complejidad, la complejidad y la complejidad del lenguaje de la expresión de la disposición, en estas condiciones, salvo los ciudadanos, también el propio legislador y los abogados -funcionarios administrativos, jueces o procuradores- son serias dificultades para conocer y aplicar las leyes”.
(p.35)

A decir de Sagües (1997) para fomentar la seguridad jurídica en este ámbito, el parlamento debe:

- ✓ Sancionar leyes claras y armoniosas, exentas de disposiciones poco claras, de falta de entendimiento, de cooperación laboriosa o contradictorias entre sí. El despropósito legislativo, las disposiciones contradictorias o la falta de consenso crean confusión constante para quienes deben hacerlas cumplir.
- ✓ Evitar cambios legislativos frecuentes, precipitados o mal pensados. Tratar las sanciones de las leyes temporales con criterio restrictivo.
- ✓ Explique claramente qué configuraciones son válidas y cuáles se anularán.
- ✓ En principio, no se permite que las leyes tengan efecto retroactivo.

- ✓ Huir de los delitos abiertos en el ámbito penal, lo que permite que la ilegalidad capture una serie de comportamientos fragmentados, todo ello a criterio de las autoridades encargadas de aplicar estos estándares, lo cual no siempre es fácil. Distinguir entre legal e ilegal.
- ✓ No es fácil transferir el poder legislativo al presidente de las instituciones dependientes de él; y hace cumplir las órdenes de emergencia emitidas por el presidente.
- ✓ Reuniones periódicas, evitando falta de quórum y aprobación oportuna de presupuesto y normas que requieran sanciones urgentes.
- ✓ Indicar reglas razonables y fáciles de seguir y razonablemente posibles.
- ✓ Habilitar los procesos derivados de la constitución y costumbres y contar con un número suficiente de tribunales para brindar servicios legales efectivos.
- ✓ Cuidado con las leyes de amnistía que, sin una razón de peso que las justifique efectivamente, pueden crear un ambiente de impunidad.
- ✓ No aceptar leyes secretas. (p.223)

4.2. Seguridad Jurídica en el poder ejecutivo

Explica Ávila que (2013) En relación con el ejecutivo, se requiere la protección de la confianza, basada en el requisito de justificación para

revocar y dejar sin efecto actos administrativos favorables, aunque inválidos, que tengan un efecto muy adverso en las actividades regulatorias del destinatario, es decir, el cumplimiento de las normas, el cual es el principio de gestión respetada. (p. 16)

En este ámbito a decir de Sagües (1997) la seguridad demanda:

- ✓ Cumplimiento fiel del programa constitucional por parte del poder ejecutivo, fundamentalmente por parte de las fuerzas de seguridad y en materia de intereses particulares.
- ✓ Declaración de prescripción o estado de excepción exclusivamente por las causas y por el plazo previsto en la constitución.
- ✓ Reglamentación de las leyes de tal manera que no se altere su letra o significado.
- ✓ Uso de los decretos de necesidad y emergencia en circunstancias extremas y de conformidad con el orden constitucional.
- ✓ Respetar los contratos celebrados con particulares (contratos de licencia, licitaciones, obras, etc.).
- ✓ Asistencia leal a los jueces constitucionales y al poder judicial en general, especialmente en las investigaciones penales y ejecución de las penas impuestas al Estado. Si interviene en el reclutamiento judicial, seleccionar y nombrar jueces calificados, idóneos e imparciales.

- ✓ Realizar las amnistías con mucho cuidado para no crear sospechas de favoritismo o desconfianza social en el funcionamiento del sistema penal.
- ✓ Bajo nivel de corrupción en la administración pública. No se requieren donaciones o apoyos similares para realizar los trámites o para otorgar los permisos o autorizaciones legalmente correspondientes.
- ✓ Junto con el legislador, se tiene que asegurar que la moneda sea fundamentalmente estable. (p.222, 223)

4.3. Seguridad Jurídica en el poder judicial

Como afirma Sagües (1997) la intervención del Poder Judicial en La seguridad jurídica es crucial y se basa básicamente en dos roles: a) tareas opresivas y roles creativos. En primer lugar, el papel de la Corte Constitucional debe funcionar como órgano de control de la ejecución de orden constitucional de los poderes ejecutivo y legislativo, fortaleciéndose a través de los procesos constitucionales por infracciones a la ley; y para este último soluciona los problemas que puedan suscitarse entre los individuales y el Estado, o entre los particulares, desperdiciando todas las contradicciones, disparates o desconciertos que puedan sujetar las órdenes del parlamento o del ejecutivo, y dando así a cada uno lo suyo, compartir el poder y la impotencia. (p.224 y 225)

En cuanto a este estamento, señala Ávila (2013) que, Para que una ley sea confiable, también debe tener efectividad normativa, entendida como la expectativa general de que la ley existente es normalmente efectiva. Esto ocurre de tres maneras: i) Es necesario ingresar al sistema judicial a través de normas predefinidas. Los instrumentos están constituidos por jueces, quienes también en abstracto afirman privilegios que permiten suponer la normal eficacia de la Ley. En este contexto, el ciudadano debe tener derecho a la defensa judicial, es decir, el derecho a una adecuada audiencia judicial es un medio de credibilidad del ciudadano orden jurídico ii) La protección jurídica depende de prerequisites institucionales y procesales El derecho a la protección depende de la existencia de condiciones institucionales que permitan En este sentido existen tres condiciones importantes: un poder judicial independiente, el derecho a la asistencia al ordenamiento jurídico, y la universalidad de la jurisdicción. La protección legal también depende de requisitos procesales: presencia de un juez natural e imparcial; se deben informar las actuaciones procesales; los juicios deben ser públicos; las decisiones deben estar debidamente justificadas; y deben garantizarse los principios de no contradicción y amplia protección. Sin embargo, las condiciones institucionales y procesales no son suficientes para garantizar los derechos regulados. iii) Un ciudadano debe poder utilizar herramientas procesales tanto preventivas como represivas, como el amparo y la inconstitucionalidad por defecto, para proteger sus derechos. Así, la seguridad jurídica surge en presencia de influencia normativa y depende

del interés a la defensa judicial, de los presupuestos institucionales y procesales de la tutela judicial y de los instrumentos de tutela judicial. (p.17 y 18)

Finalmente puede concluirse que la idea de seguridad jurídica vincula a todas las autoridades estatales; pero vincula específicamente al poder judicial y al juez constitucional, quien es esencialmente una autoridad de intervención. Esta es la última garantía que ofrece el sistema legal y político. (Sagues, 1997, p. 232)

5. Cosa Juzgada como expresión de Seguridad Jurídica

Como se mencionó precedentemente, el principio de cosa juzgada es una expresión de seguridad jurídica en la medida en que la inmutabilidad de las decisiones finales determina la confiabilidad del sistema legal, porque el interminable cuestionamiento de las decisiones finales llevaría a la incertidumbre sobre el sentido final de la decisión. decisión judicial.

La cosa juzgada a decir de Davis (1966) expresa que,

“Esto se deriva de la representación absoluta de la administración de justicia, y significa que después de haber sido resuelta por las formalidades legales una controversia entre algunas partes, éstas deben obedecer la decisión que la pone fin, sin que se les permita volver a plantearla, de lo contrario no habría indecisión en la vida jurídica y la función del magistrado se limitaría a la de un buen mediador, por lo que esa intervención o decisión no puede ser definitivamente vinculante, porque el

proceso siempre sería revisado o modificado, lo que prohibiría la legalidad. vida (pág. 51)

Señala por su parte Cáceres y Iparraguirre (2017), refiere que, es una garantía procesal, por la cual ciertos fallos suelen recibir decisiones especiales, que impiden que las mismas personas vuelvan a discutir el mismo asunto por los mismos motivos (circunstancias) y con el mismo objeto (demanda) y tomen una nueva decisión sobre la decisión, lo que significa que niega toda posibilidad de establecer relaciones procesales válidas. (p. 144-145)

El Tribunal Constitucional peruano respecto punto de dicho órgano procesal señaló que: “(...) asegurando la fuerza de la ley, se confirma el derecho de todas las partes involucradas, en primer lugar, que los medios para oponerse a las decisiones que pusieron fin al procedimiento judicial, son inapelables, por agotarse o por haber transcurrido el plazo de impugnación; y en segundo lugar, que el contenido de las resoluciones con este carácter no puede ser anulado o modificado por otras autoridades estatales, por terceros, ni siquiera por los mismos órganos competentes que solucionaron el caso. (fundamentos 36 al 45 de la STC N.º 4587-2004-AA)”. (STC N° 01797-2010-PA/TC fundamento sexto)

Sobre el mismo supuesto señala Landoni (2003) que, la cosa juzgada es el carácter indiscutible e inalterable que la ley otorga a una decisión comprendida en una sentencia firme dictada durante un proceso impugnado, que se refiere a un proceso posterior entre las mismas partes (u otras partes en

el proceso) sobre el mismo cuestión y fundado en la sentencia, la cual no es una consecuencia de la sentencia, sino que es, en función a una propiedad que la ley le añade para aumentar su estabilidad. (p.297.)

Igualmente, Almagro Nosete y Tomé Paulé (Citado por Caceres y Iparraguirre, 2017) señalan que uno de los fundamentos la razón juzgada es la necesidad de seguridad jurídica como medio de pacificación social, compuesta por razones de lógica jurídica injustificada, pues si una sentencia justifica su autoridad por la certeza que impone sobre los hechos acaecidos, objeto de debate y de derecho consecuencias. definidos en él sobre temas afines difícilmente sobrevivirían si la disputa legal fuera interminable. (p. 146)

Efectivamente, la seguridad jurídica es el fundamento último de la materia judicial en cuanto surge de las necesidades de seguridad jurídica y de paz, porque estas necesidades son atendidas por un vínculo que impide: i) que el debate jurídico continúe indefinidamente; ii) se restablezca y avance el proceso sobre la materia ya estrictamente determinado por la jurisdicción; y iii) se dicten decisiones y sentencias injusta e irracionalmente contradictorias contra los mismos sujetos de derecho o se repitan decisiones con el mismo contenido. (Vallines, 2016, p. 3181)

Tradicionalmente se ha dividido esta institución procesal tanto en cosa juzgada formal y en la material.

5.1. Cosa Juzgada Formal

Se refiere al efecto preventivo de la última sentencia, que agota o agota los juicios pendientes y desestima la demanda. (Caceres y Iparraguirre, 2017, p. 145)

De manera similar, Couture (1958) afirma que la cosa juzgada formal es un requisito previo en sentido sustantivo, porque es un precedente necesario sin el cual no puede lograrse. La cosa juzgada formal puede existir sin cosa juzgada sustantiva (...) Por otro lado, la cosa juzgada sustantiva no puede existir sin cosa juzgada formal porque no puede lograrse sin limitar todos los recursos legales. (p. 418.)

Podemos afirmar esta cosa juzgada formal impide que se recurra el proceso subyacente para impugnar la decisión, por lo que tiene un carácter relativo porque es posible que en un proceso independiente se pueda impugnar dicha decisión. Consideremos, por ejemplo, un juicio penal. revisar (siempre a favor del imputado), el proceso de nulidad del asunto judicial de fraude y además contra las sentencias de Amparo.

Al respecto La Corte Constitucional señaló que, a través del contenido formal de la cosa juzgada, “la ley se establece de tal manera que las decisiones que paralizaron el proceso judicial no pueden ser apeladas ni por su caducidad ni por el vencimiento del plazo”. (STC N° 03660-2010-PHC/TC)

5.2. Cosa Juzgada Material

Se proyecta o irradia más allá del proceso que lo produjo e impide efectivamente un nuevo proceso con el mismo fin que el decidido seguir. (Caceres y Iparraguirre, 2017, p. 145)

Señala Montero (2009) que, Si bien la cosa juzgada formal se circunscribe al propio proceso en que se dictó la decisión, el alcance de lo material es ante otro y posterior proceso, y se presume que en ese segundo proceso hay conexión con su fondo. fondo del caso en el primer proceso, es decir, la apreciación o rechazo de la demanda, que materialmente, por lo tanto, los efectos de un asunto judicial no son internos sino externos, no se irradian en el proceso en el que se establece la sentencia. se emite material judicial, pero en una fecha posterior. (p. 478-479)

En ese sentido el máximo intérprete de la norma constitucional explicó que el contenido sustantivo de la jurisprudencia exige que el contenido de las decisiones que recibieron tal condición no pueda ser confirmado o modificado, no por la actuación de otras autoridades, otros sujetos o incluso de los tribunales que solucionaron el caso. (STC N° 03660-2010-PHC/TC)

6. Efectividad de las Resoluciones Judiciales y Seguridad Jurídica

Un estado que pretenda dotarse de Seguridad Jurídica, no sólo ha de propugnar que las resoluciones judiciales en cualidad, el derecho judicial es

inmutable, pero tienen el efecto de su respaldo, es decir, se aplican efectivamente y con ello satisfagan materialmente (y no solo de mera formalidad) la pretensión propugnada por el recurrente.

En efecto, como afirma César Landa Arroyo (2012) que,

El derecho a hacer cumplir las decisiones judiciales jurídicamente vinculantes es otra expresión del derecho a la reparación. Si bien nuestra Carta no hace noción al derecho a un recurso "efectivo", un proceso solo puede tenerse en cuenta como verdaderamente equitativo y justo si logra resultados oportunos y efectivos. (p.15)

Esta la característica de la solución jurídica es el llamado derecho al efecto de las decisiones judiciales es:

“(...) vinculable con un plazo aceptable, porque es necesario para lograr la eficacia de la opinión jurídica dentro de un plazo que no exceda de lo requerido por la naturaleza del caso y sus complicaciones naturales”. (Landa, 2012, p. 93)

A su vez sostiene Priori (2019) que:

La eficacia presupone que la decisión jurisdiccional que se dicte sobre la pretensión afirmada sea efectivamente válida. Por ello, es necesario que las partes tengan derecho a cumplir las decisiones jurisdiccionales, pero también a garantizar su eficacia. (p.132)

Agrega el citado autor La eficacia de las decisiones judiciales tiene dos manifestaciones: la ejecución y la eficacia misma. El primero se relaciona con la eficacia de las sentencias que establecen un mandato, es decir, sentencias en las que el tribunal utiliza dos instrumentos, la sustitución y la coacción. Aunque las cláusulas declarativas y básicas se refieren a la ejecución misma. (p. 134 a 136)

Este Derecho, puede decirse que está previsto en la última parte del artículo 139.2 de la Norma Suprema, que dice: “ninguna autoridad puede (...) anular la cosa juzgada (...) las decisiones judicialmente aceptadas ni posponer su ejecución”.

Sobre el particular sostuvo el Tribunal en la Sentencia TC N° 03515-2010-PA/TC que:

“Después de recibir una sentencia definitiva, válida y motivada, la ley analizada asegura que los juicios y sentencias se lleven a cabo en sus propios términos, porque de lo contrario se reconocen o declaran los intereses de los sujetos. La finalidad de la implementación de este derecho es que las sentencias y juicios no se cambien en simples expresiones de voluntad carentes de eficacia. Esto es porque surge un ideal basado en los principios, valores y constitucionales de la justicia material para un estado democrático y social de derecho requiere su concreción no sólo según la opinión del tribunal, que declara o establece la ley o impone la pena, sino también a través de su realización material o implementación, que se logra mediante someterse

a la sentencia según sus propias condiciones para la ejecución de las decisiones judiciales, representa de manera particularmente específica la exigencia de eficacia, que garantiza el derecho a la tutela judicial y que no se limita a ello, pues tiene una visión amplia en su naturaleza que se refleja también en otros derechos procesales constitucionales. Orden (v. gr. el derecho a una audiencia judicial dentro de un plazo razonable). El derecho a la eficacia de las decisiones judiciales garantiza el cumplimiento de las decisiones tomadas en la decisión y el restablecimiento de los derechos de la parte que recibió una decisión de tutela con una decisión de tutela y la reparación del daño causado. Como consecuencia de lo anterior, es necesario llevar a cabo de inmediato el ejercicio de las facultades de los tribunales en sus propios términos para asegurar la adecuada protección de los intereses o derechos pertinentes del imputado. (...) El incumplimiento inmediato de una orden judicial puede, por el contrario, afectar no sólo a quién gana el proceso (ámbito subjetivo), sino también a la eficacia del ordenamiento jurídico nacional (ámbito objetivo), porque por supuesto, lo que ¿Sería necesario pasar por un largo ya menudo tedioso proceso si la persona que tiene que cumplir el mandato resultante finalmente no lo cumple, aunque lo haya ganado? Por tanto, en tales circunstancias, estaríamos ante un verdadero problema, que en sí mismo afectaría al derecho fundamental a hacer cumplir las resoluciones judiciales, esencia de la tutela judicial efectiva”.

En virtud de esto plantea la cuestión de si la interposición de amparos y cautelas similares contra sentencias firmes afecta la eficacia de la decisión

impugnada, pues la parte se benefició de la decisión a pesar de haber recorrido el proceso judicial hasta su conclusión. no puede satisfacer sustancialmente su demanda hasta que se desestime el proceso de amparo.

Ante este escenario no cabe duda de que, el condicionar la efectividad de una resolución judicial al superar un tamiz de revisión constitucional supone no sólo la postergación de la satisfacción del derecho materia de pretensión, sino el mensaje general que una decisión judicial firme, no es tan “definitiva” como reza la teoría, proliferando la desconfianza al aparato judicial y por qué no, promoviendo la autocomposición como una vía idónea (por su inmediatez).

Sin embargo, ello no supone entonces que deba desestimarse todo proceso de amparo de manera liminar o que, irrestrictamente toda medida cautelar tendiente debe rechazarse la suspensión de la ejecución, pero debe respetarse la excepcionalidad del proceso constitucional y las tasas previstas en la ley y la jurisprudencia de su origen.

Por sí misma la procedencia de un el amparo se refiere a una defensa procesal efectiva porque no solo permite impugnar una decisión judicial fuerte, sino que también puede retrasar su ejecución. En este caso, aceptar tal proceso sin revisión tendría poco efecto. exactamente lo que está tratando de evitar esta investigación.

CAPÍTULO V

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

1. Trabajo de Campo Realizado

Hacia el desarrollo de la presente investigación se ha elaborado un trabajo de campo sólido en torno al acopio de resoluciones prorumpidas por los juzgados, Salas civiles y Supremo intérprete de la norma constitucional, en los procesos constitucionales de amparo contra resoluciones judiciales tramitados en el distrito de Chiclayo durante los años 2014 a 2017, a fin de establecer, si en estos se aplicaron debidamente los criterios legales y jurisprudenciales para la resolución de los mismos o por el contrario se omitió dicho control y se mantuvo en cuestionamiento indebidamente una resolución judicial firme afectando el principio de seguridad jurídica en su vertiente de cosa juzgada material.

Dicha averiguación ha sido conseguida rectamente del área de estadística de la Corte Superior de Justicia de Chiclayo, y corresponde del primer al sétimo juzgado especializado en materia civil del distrito de Chiclayo, siendo datos contrastables con dicha institución pública.

2. Población

La Población radica en todos los procesos constitucionales de amparo contra resoluciones judiciales que fueran admitidos en la esfera de los siete juzgados civiles de Chiclayo en los años 2014 a 2017 por un total de 40 procesos judiciales, discriminando evidentemente aquellos que in limine fueron declarados improcedentes o que lo fueran subsecuentemente por no subsanar las observaciones realizadas por los juzgados.

3. Muestra

Dada la cantidad de la población se ha optado por realizar una población-muestra, tomando como estudio los 40 procesos judiciales, los cuales a su vez cuentan con admisorio, sentencia de primera instancia, segunda instancia, así como la resolución correspondiente expedida por el Tribunal Constitucional en los casos que interpuso Recurso de Agravio Constitucional.

En tal sentido se expone a continuación los resultados obtenidos a través de gráficas estadísticas.

4. Presentación de Resultados

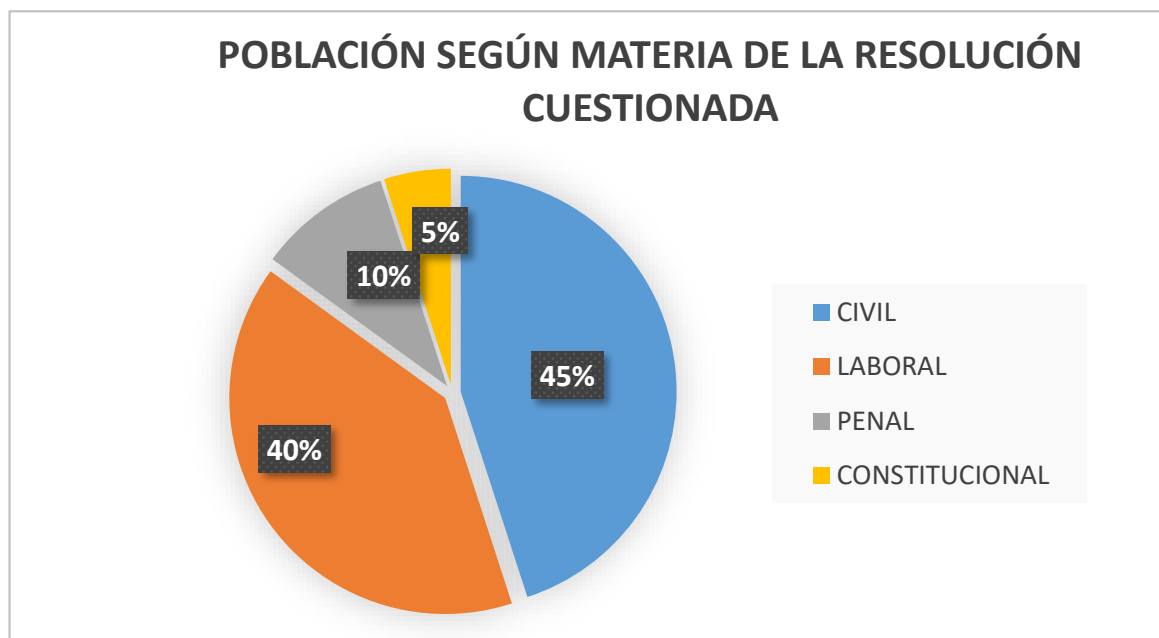
4.1. Primera Variable:

La indebida aplicación judicial de los criterios para solucionar los procesos de Amparo contra resoluciones judiciales.

Tabla 1
POBLACIÓN SEGÚN LA MATERIA DE LA RESOLUCIÓN
CUESTIONADA

ATRIBUTO	Frecuencia Absoluta (FA)	Frecuencia Relativa (FR)	Porcentaje
CIVIL	18	18	45%
LABORAL	16	34	40%
PENAL	4	38	10
CONSTITUCIONAL	2	40	5%
TOTAL	40		100%

Gráfico 1

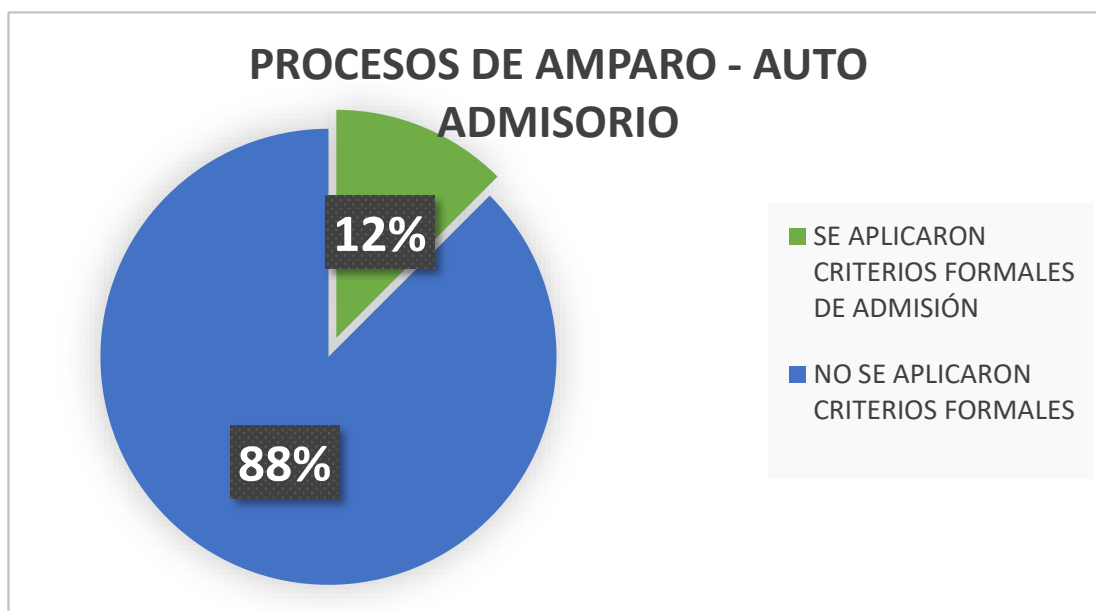


Análisis: Conforme a la tabla N° 01 y Figura N° 01 se observa que el 45 % de las resoluciones que son discutidas a través del amparo, tienen origen un proceso civil, seguidas del área laboral con un 40%, penal con un 10% y 5% son amparos contra procesos constitucionales.

Tabla 2
POBLACIÓN SEGÚN EL ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS FORMALES
DE ADMISIÓN

ATRIBUTO	FRECUENCIA ABSOLUTA (F.A)	FRECUENCIA RELATIVA (F.R)	PROCENTAJE
SE APLICARON CRITERIOS FORMALES	5	5	12%
NO SE APLICARON CRITERIOS FORMALES	35	40	88%
TOTAL	40		100%

Gráfico 2



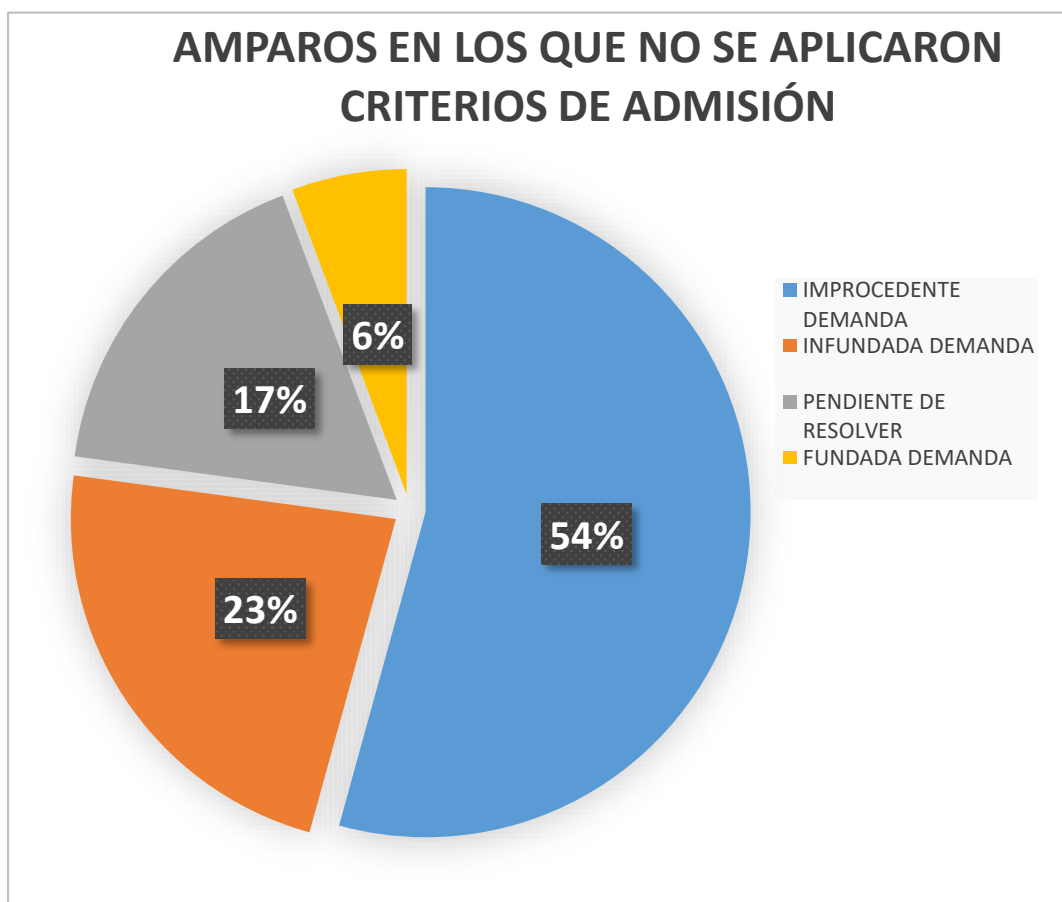
Análisis: La tabla N° 02 y gráfico N° 02 muestran la recurrencia del control de admisibilidad que realizan los magistrados respecto a las demandas de amparo

contra resoluciones judiciales, siendo así advertimos que en un preocupante 88% ni siquiera se evalúa los criterios formales de procedencia, mientras que en un 12% se realiza sucintamente un análisis sobre su concurrencia.

Tabla 3
RESULTADO EN PRIMERA INSTANCIA DE LOS PROCESOS DE
AMPARO EN LOS QUE NO SE APLICARON CRITERIOS DE
ADMISIÓN

ATRIBUTO	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA	PORCENTAJE
IMPROCEDENTE DEMANDA	19	19	54%
INFUNDADA DEMANDA	8	27	23%
FUNDADA DEMANDA	2	29	6%
PENDIENTE DE RESOLVER	6	35	17%
TOTAL	35		100%

Gráfico 3



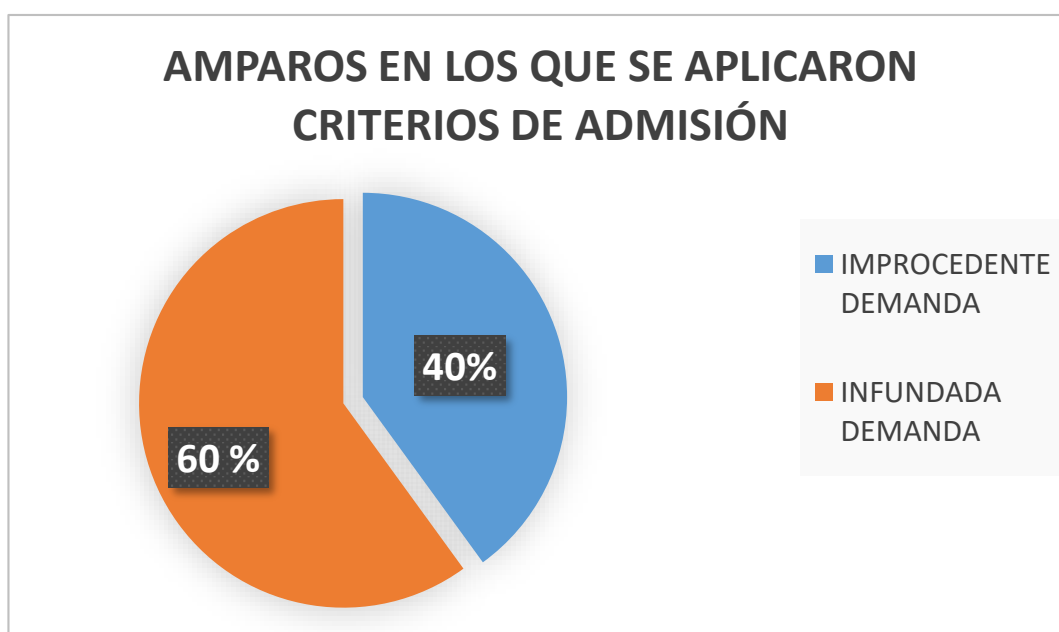
Análisis: En la tabla N° 03 y gráfico N° 03 se continúa con la evaluación de las resoluciones en las que no se realizó un control de admisibilidad, tenemos que en un 54% estos son finalmente declarados improcedentes, lo cual confirma que se realizó un erróneo análisis al momento de calificar la demanda; igualmente en un 23% las demandas fueron declaradas infundadas y en un 6% las mismas fueron declaradas fundadas.

Tabla 4

**RESULTADO EN PRIMERA INSTANCIA DE LOS PROCESOS DE
AMPARO EN LOS QUE SÍ SE APLICARON CRITERIOS DE ADMISIÓN**

ATRIBUTO	FRECUENCIA ABSOLUTA (F.A)	FRECUENCIA RELATIVA (F.R)	PROCENTAJE
DEMANDA IMPROCEDENTE	2	2	40%
DEMANDA INFUNDADA	3	5	60%
TOTAL	5		100%

Gráfico 4



Análisis: Conforme la tabla N° 04 y gráfico N° 04 advertimos que en un 40%, de los casos en los que sí se analizaron los criterios formales, dicho control

fue inadecuado, dado que en sentencia recién se advirtió una causal de improcedencia, mientras que en un 60% se declaró infundada la demanda.

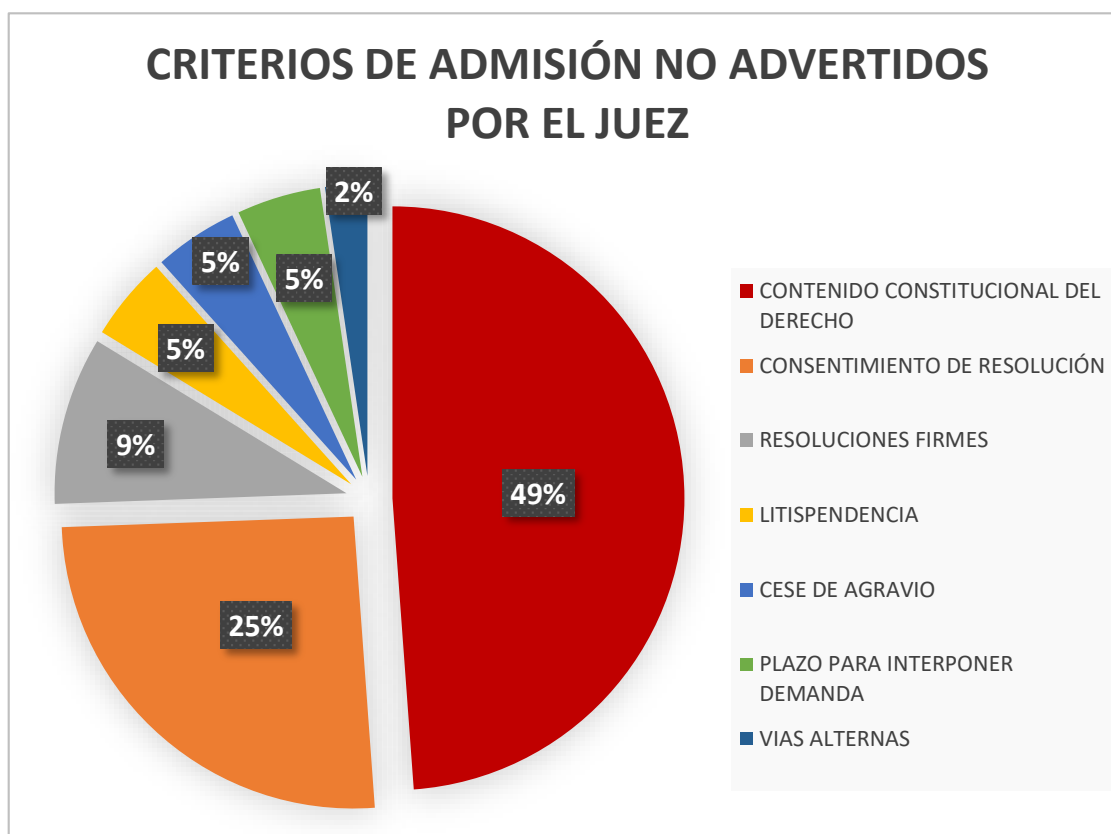
Tabla 5
RECURRENCIA DE LOS CRITERIOS DE ADMISIÓN NO ADVERTIDOS
POR EL JUEZ

ATRIBUTO	FACTOR ABSOLUTO (F.A)	FACTOR RELATIVO (F.R)	PORCENTAJE
Los hechos y el petitorio de la demanda no están pertenecientes en forma directa al contenido constitucionalmente predilecto del derecho solicitado.	21	21	49%
Agraviado no haya consentido resolución	11	32	25%
Se trate de resoluciones judiciales firmes.	4	36	9%
El agraviado haya acudido anticipadamente a otro proceso judicial para	2	38	5%

solicitar tutela respecto de su derecho constitucional.			
A la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha transformado en irreparable.	2	40	5%
Ha subyugado el plazo para interpolar la demanda.	2	42	5%
Existan vías procedimentales específicas, equivalentemente satisfactorias, para el auxilio del derecho constitucional amenazado o vulnerado.	1	43	2%

TOTAL	43		100%
--------------	-----------	--	-------------

Gráfico 5



Análisis: De la tabla N° 05 y gráfico N° 05 podemos acatar las causales de improcedencia que no son advertidas por los magistrados al momento de calificar las demandas, encabezando la lista con un 49%, la causal referida a que el hecho y el petitorio de la demanda no estarían referidos al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, igualmente, tenemos que en un 25% los magistrados no advierten que el recurrente ha dejado consentir la decisión que es cuestionada vía amparo. Asimismo, en un 9% se evidencia que las resoluciones cuestionadas al momento de interponerse el proceso de amparo no gozaban de la calidad de “firmes”.

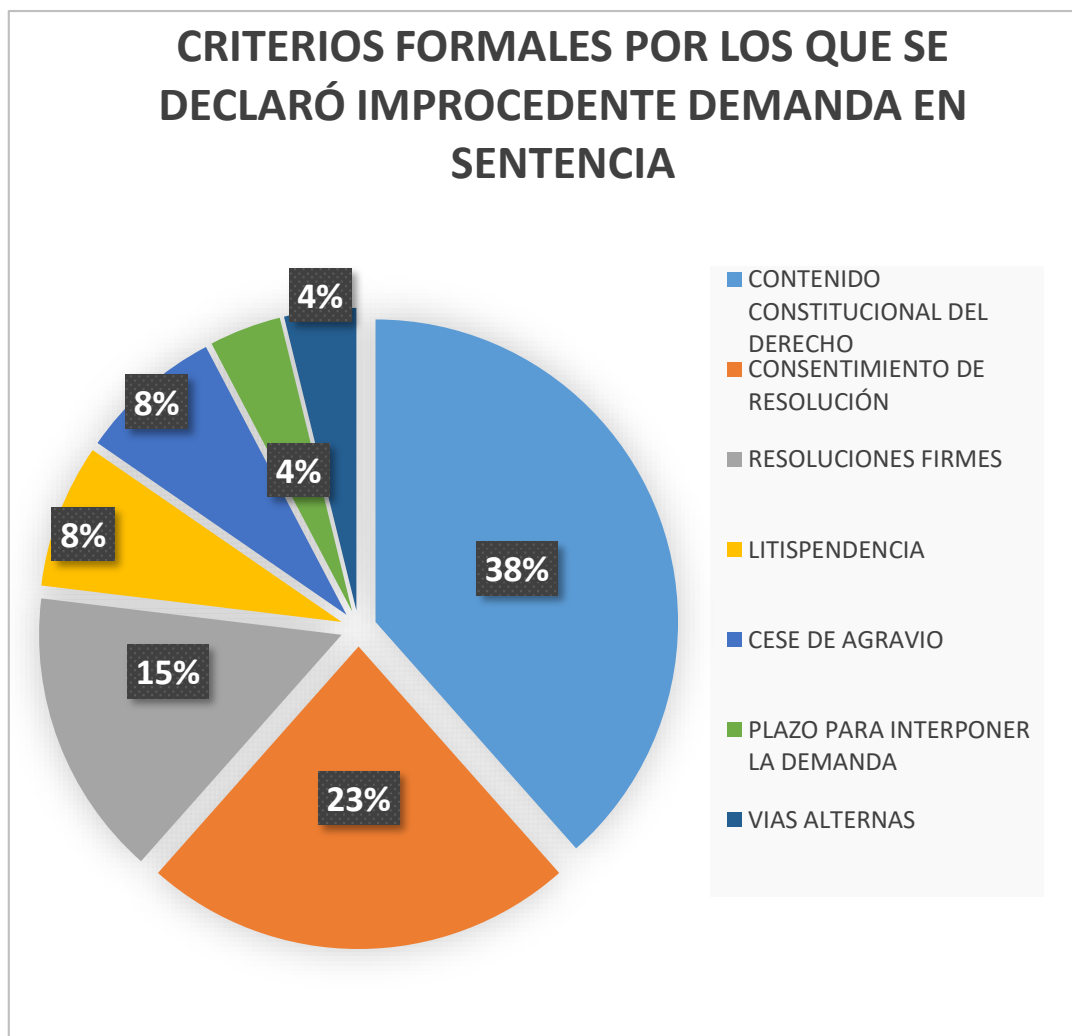
De otro lado en 5% existía tanto litispendencia como el presunto agravio había cesado, y además existían vías alternas para discutir el supuesto quebrantamiento del derecho invocado; finalmente en un 2% no se realizó un correcto cómputo del término para interponer la demanda.

Tabla 6
CRITERIOS FORMALES POR LOS QUE SE DECLARÓ
IMPROCEDENTE DEMANDA EN SENTENCIA

ATRIBUTO	FRECUENCIA ABSOLUTA (F.A)	FRECUENCIA RELATIVA (F.R)	PORCENTAJE
Los hechos y el petitorio de la demanda no están pertenecientes en forma directa al contenido constitucionalmente predilecto del derecho invocado.	10	10	38%
Agraviado no haya consentido resolución	6	16	23%
Se trate de resoluciones judiciales firmes.	4	20	15%

El agraviado haya acudido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional.	2	22	8%
A la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha transformado en irreparable.	2	24	8%
Ha subyugado el plazo para interpolar la demanda.	1	25	4%
Existan vías procedimentales determinadas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado.	1	26	4%
TOTAL	26		100%

Gráfico 6



Análisis: En la tabla N° 06 y gráfico N° 06 se presentan las sentencias que declararon improcedente la demanda, así tenemos que, en un 38% el magistrado advirtió que lo alegado por el impugnante no estaba referido al contenido constitucionalmente predilecto por el derecho invocado. Lo mismo se axioma en cuanto al consentimiento de la resolución, pues en un 23% se mantuvo en cuestionamiento una decisión que oportunamente no fuera recurrida por el accionante. En cuanto a la solidez de las decisiones judiciales, un 15% fue

determinante para declarar improcedente la demanda, mientras que en un 8% se verificó que el agravio había cesado y en igual porcentaje existió litispendencia.

Finalmente, en un 4% se advirtió que el plazo había sido incorrectamente contabilizado y en la misma recurrencia existió una vía alternativa para invocar el derecho presuntamente conculcado.

Tabla 7
SENTENCIAS FUNDADAS SEGÚN APLICACIÓN DE CRITERIOS DE FONDO

ATRIBUTO	FACTOR ABSOLUTO	FACTOR RELATIVO	PORCENTAJE
SE APLICARON CRITERIOS DE FONDO	0	0	0%
NO SE APLICARON CRITERIOS DE FONDO	4	4	100%
TOTAL	4		100%

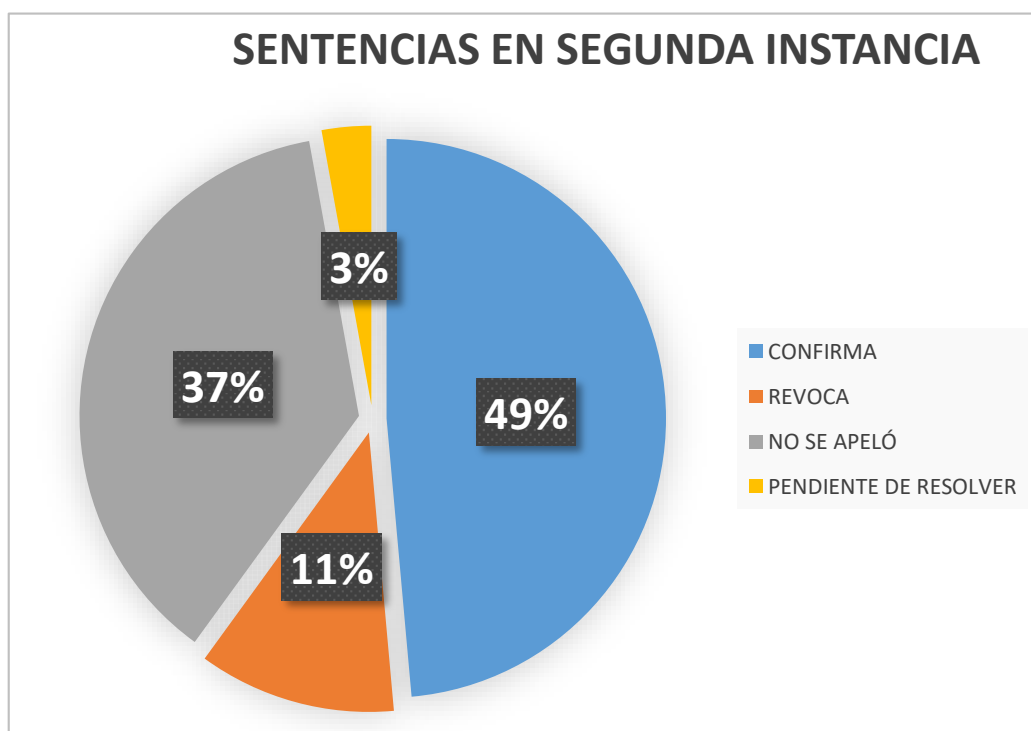
Gráfico 7

Análisis: A continuación, en la tabla y gráfico N° 07 tenemos el análisis de las sentencias que dictaminaron fundadas las demandas de amparo, las mismas, donde advierte con preocupación que en ninguna se invocaron ni aplicaron criterios de fundabilidad.

Tabla 8
RESULTADOS DE SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

ATRIBUTO	FRECUENCIA ABSOLUTA (F.A)	FRECUENCIA RELATIVA (F.R)	PORCENTAJE
CONFIRMA	17	17	49%
REVOCA	4	21	11%
NO APELARON	13	34	37%
PENDIENTE DE RESOLVER	1	35	3%
TOTAL	35		100%

Gráfico 8



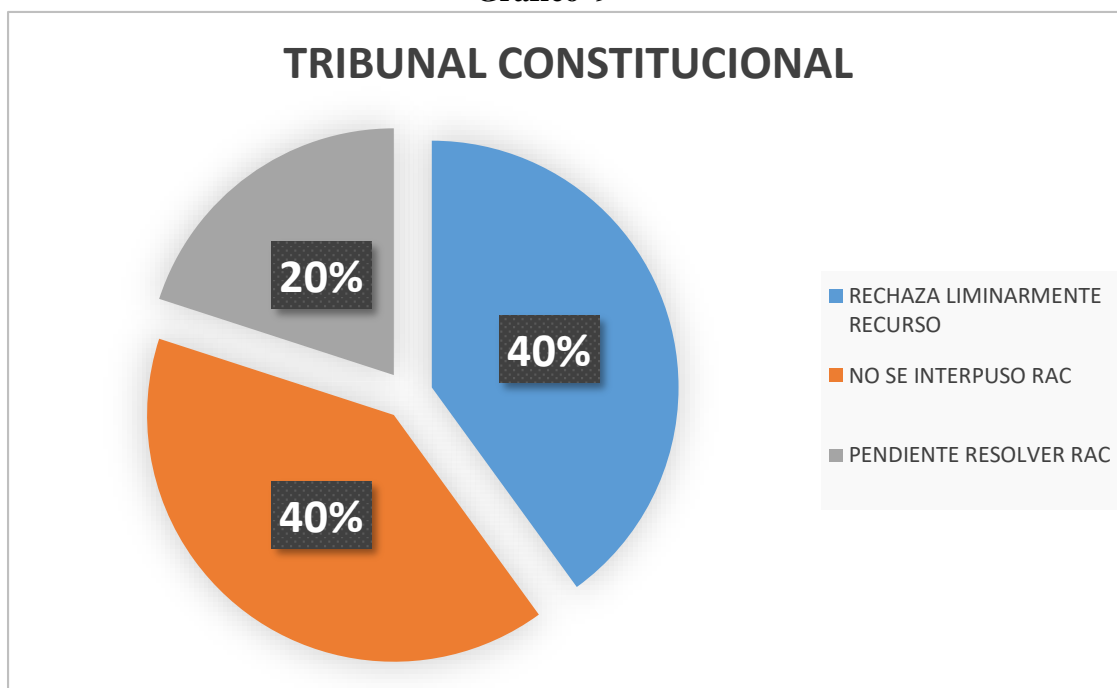
Análisis: Según la tabla y grafico N° 08 la mayoría de sentencias dictadas en primera instancia, específicamente un 49%, son confirmadas por el A quem, mientras que un 11% de las mismas son revocadas. Cabe precisar que, del porcentaje de revocatorias, el 8% corresponde a sentencias que el superior declaró fundada y, el 3% restante corresponde a sentencias que revocándolas declararon infundados el proceso constitucional.

Tabla 9

RESULTADOS DE LOS RECURSOS DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL

ATRIBUTO	FRECUENCIA ABSOLUTA (F.R)	FRECUENCIA RELATIVA (F.R)	PORCENTAJE
RECHAZO LIMINAR	8	8	40%
NO SE INTERPUSO RAC	8	16	40%
PENDIENTE DE RESOLVER RAC	4	20	20%
TOTAL	20		100%

Gráfico 9



Análisis: Según se tiene de la tabla N° 09 y gráfico N° 09 un 60% de las decisiones que son recurridas a Sala llegan hasta el tribunal constitucional, de las cuales todas las resueltas a la fecha del presente trabajo desestimaron in limine el recurso.

4.2. Variable dependiente

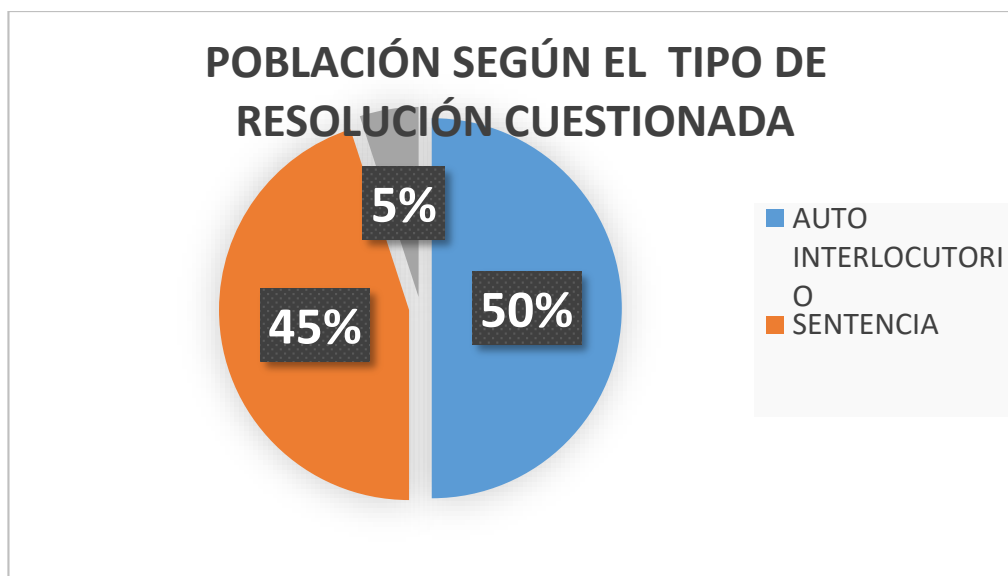
Vulneración del principio de seguridad jurídica en el distrito de Chiclayo en los años 2014 a 2017.

Tabla 10

POBLACIÓN SEGÚN EL TIPO DE RESOLUCIÓN CUESTIONADA VÍA AMPARO

ATRIBUTO	FRECUENCIA ABSOLUTA (F.A)	FRECUENCIA RELATIVA (F.R)	PORCENTAJE
AUTO INTERLOCUTORIO	20	20	50%
SENTENCIA	18	38	45%
AUTO QUE PONE FIN AL PROCESO	2	40	5%
TOTAL	40		100%

Gráfico 10

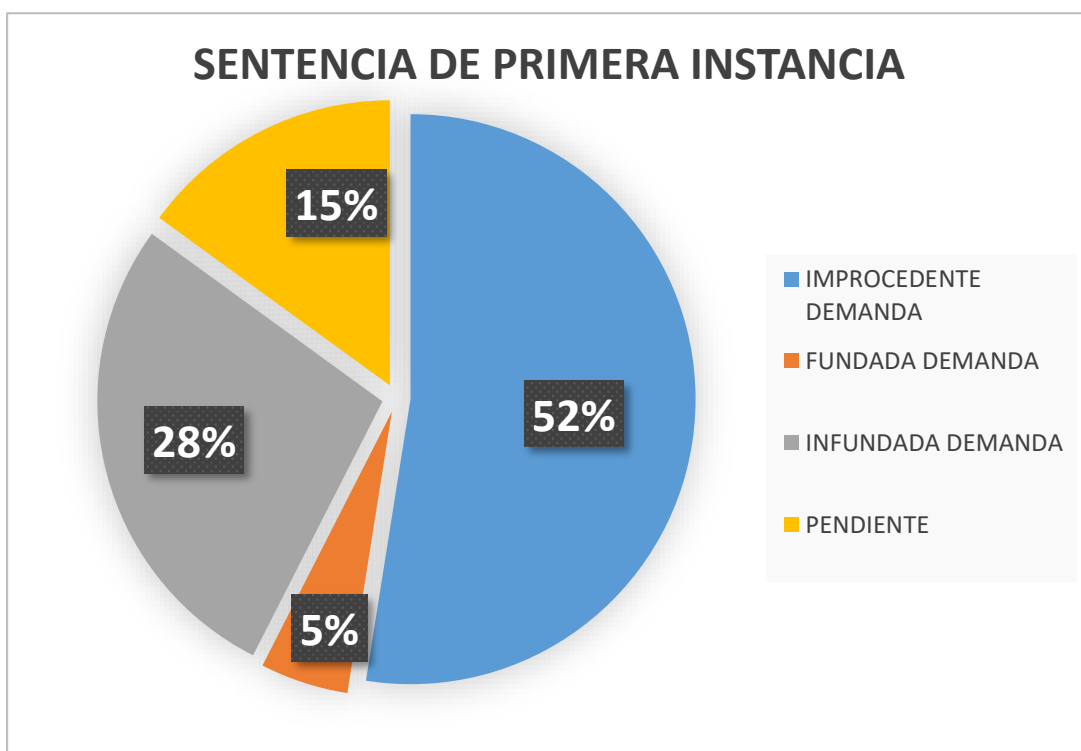


Análisis: Según la tabla N° 10 y gráfico N° 10, observamos los tipos de resoluciones que son cuestionadas vía amparo, siendo en un 50% sentencias, es decir decisiones definitivas que resuelven el “fondo” del objeto de litigio. Asimismo, en un 45% se trata de autos interlocutorios y finalmente, en un 5% consta de autos que ponen fin al proceso.

Tabla 11
POBLACIÓN SEGÚN EL RESULTADO DE LA SENTENCIA EN
PRIMERA INSTANCIA

ATRIBUTO	FRECUENCIA ABOLUTA (F.A)	FRECUENCIA RELATIVA (F.R)	PORCENTAJE
IMPROCEDENTE DEMANDA	21	21	52%
INFUNDADA DEMANDA	11	32	28%
FUNDADA DEMANDA	2	34	5%
PENDIENTE DE RESOLVER	6	40	15%
TOTAL	40		100%

Gráfico 11



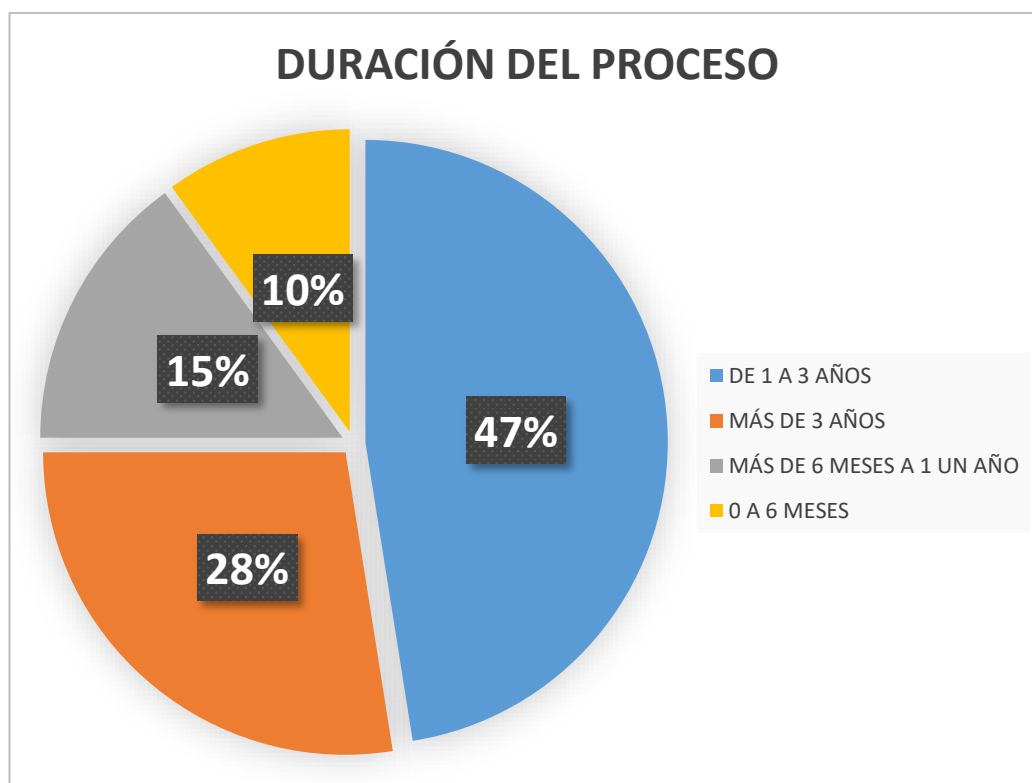
Análisis: En la tabla y gráfico N° 11 se expone el resultado obtenido en primera instancia en los procesos de amparo hacia resoluciones judiciales, así tenemos que un 52% las demandas son declaradas improcedentes, en un 28% la demanda fue declarada infundada, es decir ameritó un pronunciamiento de fondo, aunque desestimatorio. De otro lado en un 15% los procesos se encuentran pendiente de emitir sentencia y, en un escaso 5% las demandas son declaradas fundadas.

Tabla 12

POBLACIÓN SEGÚN LA DURACIÓN DEL PROCESO DE AMPARO

ATRIBUTO	FRECUENCIA ABSOLUTA (F.A)	FRECUENCIA RELATIVA (F.R)	PORCENTAJE
DE 1 A 3 AÑOS	19	19	47%
MÁS DE 3 AÑOS	11	30	28%
MÁS DE 6 MESES A 1 AÑO	6	36	15%
DE 0 A 6 MESES	4	40	10%
TOTAL	40		100%

Gráfico 12



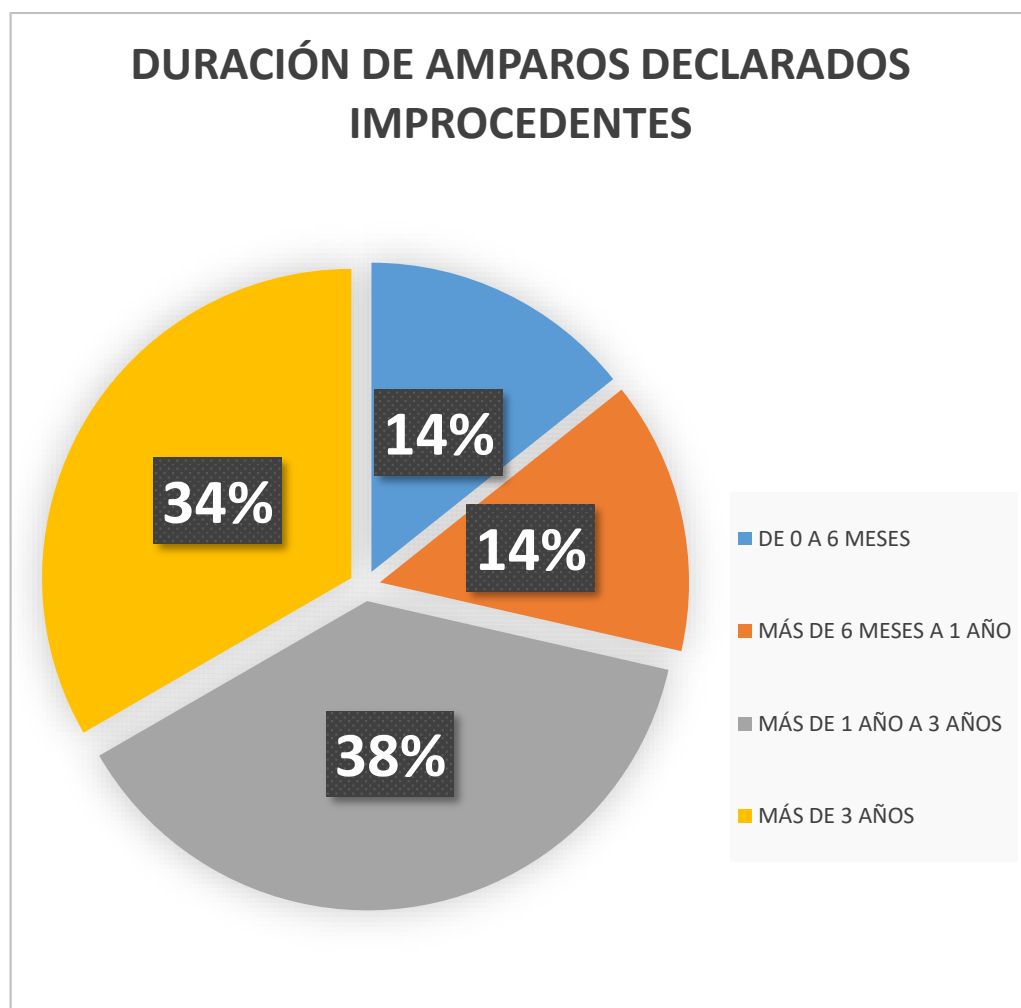
Análisis: Con la tabla y el esquema N° 12 podemos evidenciar el tiempo que duró el proceso de amparo, así en un 47% demoró de 1 a 3 años, en un 28% se

extendió por más de tres años, mientras que en un 15 % se tuvo una corta duración de seis meses a un año y, en un reducido 10% la mínima duración de 0 a seis meses.

Tabla 13
DURACIÓ DE LOS PROCESOS DE AMPARO DECLARADOS
IMPROCEDENTES EN SENTENCIA

ATRIBUTO	FRECUENCIA ABSOLUTA (F.A)	FRECUENCIA RELATIVA (F.R)	PORCENTAJE
DE 0 A 6 MESES	3	3	14%
DE 6 MESES A 1 AÑO	3	6	14%
DE 1 A 3 AÑOS	8	14	38%
MÁS DE 3 AÑOS	7	21	34%
TOTAL	21		100%

Gráfico 13

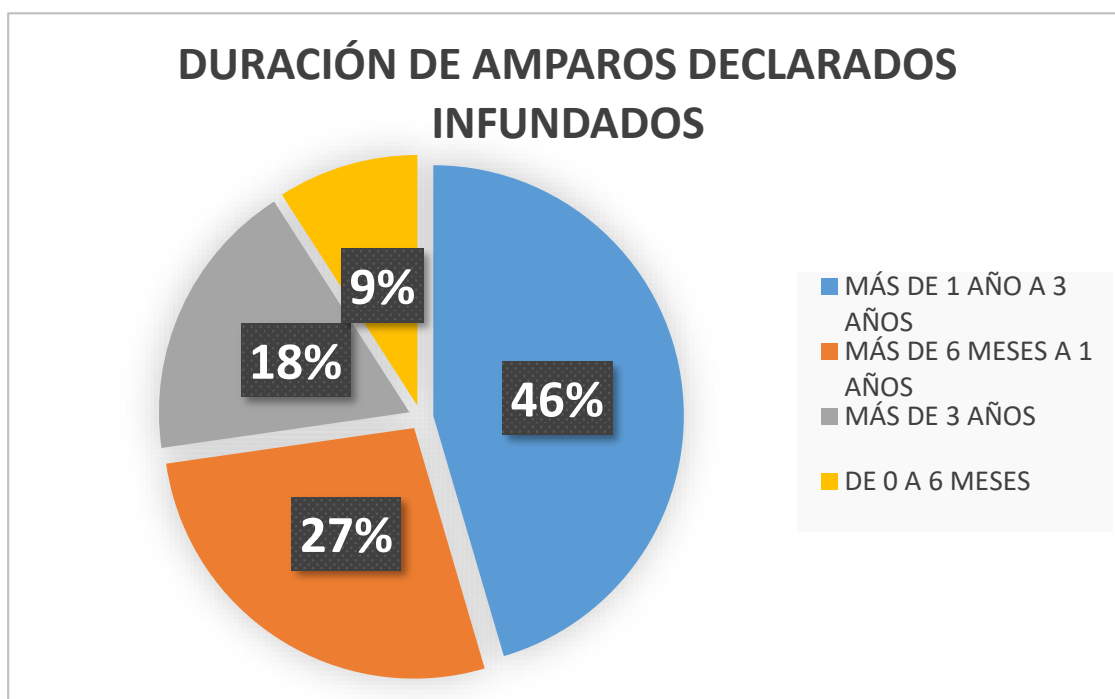


Análisis: Contamos con la tabla N° 13 y gráfico N° 13, complementan los gráficos anteriores, y con mayor precisión para el centro de estudio, contamos con algunos procesos de amparo que fueran declarados improcedentes, en un 38% duraron de uno a tres años, asimismo en un llamativo 34% el proceso se extendió por más de tres años. Asimismo, tenemos que en un 14% respectivamente los procesos perduraron de 0 a 6 meses y de 6 meses a 12 meses.

Tabla 14
DURACIÓN DE LOS PROCESOS DE AMPARO DECLARADOS
INFUNDADOS

ATRIBUTO	FRECUENCIA ABSOLUTA (F.A)	FRECUENCIA RELATIVA (F.R)	PORCENTAJE
DE 0 A 6 MESES	1	1	9%
DE 6 MESES A 1 AÑO	3	4	27%
DE 1 A 3 AÑOS	5	9	46%
MÁS DE 3 AÑOS	2	11	18%
TOTAL	11		100%

Gráfico 14



Análisis: Finalmente en la tabla y gráfica N° 14, tenemos que, en cuanto a los amparos declarados infundados, en un 46% duraron de 1 a 3 años, en un 27% duraron de seis meses a un año, en un 18% más de 3 años y en un escaso 9% de 0 a seis meses.

5. Discusión de resultados

El índice de casos presentados en el Distrito de Chiclayo, durante el período 2014 a 2017, según la muestra analizada, ha permitido verificar que la indebida aplicación de los criterios legales o jurisprudenciales o inaplicación de estos para resolver los procesos de amparo frente a resoluciones judiciales ha vulnerado el principio de Seguridad J. mediante su expresión con referida efectividad de la cosa juzgada material, en la medida que una decisión no puede ser “eternamente” revisada.

Tal y cómo se reflejó en la tabla 10, el tipo de resolución judicial cuestionado a través del amparo, en un 50%, fue respecto a sentencias que reconocían derechos, seguidamente de un 45% se trató de autos interlocutorios – pedidos de nulidad, liquidación de costas, de pensiones alimenticias, solicitudes cautelares, etc.- los cuales si bien no deciden la controversia en sí misma, en la medida que definen una etapa procesal (preclusión) su cuestionamiento indefinido e injustificado afecta la propia tramitación del proceso de origen; y finalmente en un 5% se trató de autos que ponen fin al proceso, los cuales con efectos de sentencia, culminan la discusión sobre la

materia controvertida; constituyen por tanto, cosa juzgada y por ende inmutables.

En ese contexto, el control para su admisión, por parte del juez, respecto de la correcta aplicación o del cumplimiento de los criterios formalistas debían ser muy rigurosos, ante la excepcionalidad de dicho mecanismo procesal. En efecto, el amparo frente a la resolución judicial encuentra un justificante juntamente con la existencia de una anomalía, en tanto los jueces de los procesos ordinarios pronuncien fallos inversos u ofensivos del comprendido constitucionalmente que salvaguarda los derechos constitucionales. En base a ello ABAD, ha referido “Tan inicua puede ser una disposición inconstitucional que ha logrado autoridad de cosa juzgada, como la perdurable revisión de los procesos judiciales en los que actores no consigan lograr el agrado de la pretensión que requieren (“justicia tardía no es justicia”) (Abad Yupanqui, 2004, p. 301,302)

No obstante, se ha demostrado que el control del juez, ha sido muy deficiente, tal y cómo se puede colegir de la tabla N° 02, advirtiéndose un preocupante 88% en la que ni siquiera se evalúa los criterios formales de procedencia, mientras que en un 12% se realiza sucintamente un análisis sobre su concurrencia (es una simple plantilla), lo que no implica necesariamente que se realiza correctamente dicha evaluación, pues, como se advierte de la tabla y gráfico N° 11 estas demandas en primera instancia en un 52% las demandas son declaradas improcedentes, es decir recién en sentencia se evidencian los criterios que debieron ser advertidos al momento de calificar la demanda, y supone a su vez un innecesario cuestionamiento de lo decidido en la vía

ordinaria y con ello la postergación de su carácter definitivo, mientras que en un 28% la demanda fue declarada infundada, es decir ameritó un pronunciamiento de fondo, aunque desestimatorio, y si bien no fue expresamente declarada improcedente, en muchos de esos casos la demanda debió ser desestimada in limine.

De otro lado en un 15% los procesos se encuentran pendiente de emitir sentencia y, en un escaso 5% las demandas son declaradas fundadas, lo cual no asegura que se haya realizado una correcta evaluación de los criterios instituidos por el gran Interprete de la constitución para lograr su fundabilidad.

En tal sentido, se ha podido demostrar en la tabla N° 05 que de las causales de improcedencia que no son advertidas por los magistrados al momento de calificar las demandas, lidera la lista, un 49%, la referida a que el hecho y también el petitorio de la demanda no se encontraría concernientes al contenido constitucionalmente predilecto del derecho invocado, puesto que, en los casos, el accionante lejos de alegar la trasgresión de un derecho constitucional ya sea la tutela jurisdiccional efectiva, o también el debido procesos adjetivo o sustantivo, esboza nuevamente los cuestionamientos que realizó por una vía ordinaria respecto de la materia discutida, pretendiendo que mediante un mecanismo constitucional sea claramente una instancia más de la vía ordinaria, hecho que definitivamente afecta el principio de Cosa Juzgada material y con esto inevitablemente a la seguridad jurídica.

Igualmente, se tiene un 25% los magistrados no advierten que el accionante ha dejado consentir la decisión que es cuestionada vía amparo, con lo cual pretenden ejercer en la vía constitucional, el recurso que de manera negligente no ejercitaron en la vía ordinaria, es decir la justicia constitucional es utilizada como un “medio impugnatorio” más, desnaturalizando dicho proceso.

Asimismo, en un 9% se evidencia que las resoluciones cuestionadas al momento de interponerse el proceso de amparo no gozaban de la disposición de “firmes” en términos diferenciadores se encontraba habilitada o ejercitada la impugnación correspondiente en la vía ordinaria, por lo que en este aspecto no podríamos hablar en estricto de la afectación a la cosa juzgada y con ello la seguridad jurídica pues, las decisiones controvertidas no tenían aún dicha calidad.

De otro lado en 5% existía tanto litispendencia como el presunto agravio había cesado, y además existían vías alternas para discutir la presunta vulneración del derecho invocado, y si bien las dos primeras causales no son tan fácilmente detectables dada la limitada información que, adrede es brindada por el litigante, ello podría ser superado utilizando los sistemas informáticos con los que cuenta el Poder Judicial a través del SIJ, con el cual los magistrados tiene acceso a casi todos los procesos judiciales tramitados en el distrito judicial; finalmente en un 2% no se realizó un correcto cómputo del plazo para

interponer la demanda, estos datos, son contratados con los contenidos en la tabla y gráfico N° 06 en los que se refleja qué criterios fueron invocados por el juez al momento de declarar improcedente la demanda, donde tenemos que, en un 38% el magistrado advirtió que lo alegado por el impugnante no estaba referido al comprendido constitucionalmente protegido por el derecho invocado, en contrariedad se trataban de cuestionamientos que fueron previamente realizados en la vía ordinaria, pretendiendo con ello hacer del proceso constitucional una instancia más de aquel, siendo relevante para el objeto de estudio el hecho que, tal causal debió ser advertida al momento de calificar la demanda y no postergar tal evaluación al final del proceso, manteniendo en incertidumbre la ejecutabilidad de la decisión judicial que previamente ya había adquirido la calidad de Cosa Juzgada.

Lo mismo es evidenciado en cuanto al consentimiento por la resolución, pues en un 23% se mantuvo en cuestionamiento una decisión que oportunamente no fuera recurrida por el accionante y con ello se hace de la justicia constitucional una especie de “medio impugnatorio” que trastoca definitivamente la cosa juzgada material, que supone la imposibilidad de discutir en un asunto distinto lo decidido, sin que medie para ello un motivo justificante, como la transgresión de un derecho reglamentario bajo los criterios de procedencia expuestos en el marco teórico.

En relación con la firmeza de las decisiones judiciales, en un 15% fue determinante para declarar improcedente la demanda, y si bien tal causal no tiene incidencia en la seguridad jurídica pues, precisamente la resolución que se cuestionaba no adquiriría la firmeza requerida, es una muestra más de un indebido estudio aplicable en torno de los criterios necesarios para en este caso admitir los procesos de amparo.

En lo referente con la litispendencia y el cese del agravio, como se expresó precedentemente son causales cuya evidencia es de menor detección dada la falta de información con la que se cuenta al inicio del proceso generalmente por la omisión deliberada del demandante, sin embargo, con un correcto uso de los medios informáticos judiciales (SIJ) se podría advertir su concurrencia sin que para ello deba transcurrirse todo el proceso constitucional.

Lo mismo no puede decirse del tiempo para interponer la demanda y de la existencia viales alternas para una invocación del derecho presuntamente vulnerado, pues las mismas pueden ser evidenciadas en la calificación de la demanda, lo cual supone igualmente el rudimento innecesario de un proceso constitucional.

En concordancia analítica de las resoluciones en las que no se realizó un control de admisibilidad acorde a criterios determinados en el Código Procesal Constitucional, tenemos según el cuadro N° 03 un 54% estos son finalmente declarados improcedentes en sentencia, lo cual confirma que se realizó un erróneo análisis al momento de calificar la demanda; igualmente en

un 23% las demandas fueron declaradas infundadas y en un 6% las mismas fueron declaradas fundadas, es decir, a pesar de realizarse inadecuadamente el control formal se procedió a analizar el fondo de la cuestión, aunque, como veremos más adelante sin seguir los criterios preestablecidos en relación a lo dicho por el Tribunal Constitucional, y el 23% se hallan pendientes para resolver.

Circunstancia similar a la anterior se evidencia en la tabla y cuadro N° 04, pues a pesar de haberse realizado un control de los criterios de procedencia, el mismo se efectuó indebidamente pues en un 40%, en sentencia recién se advirtió una causal de improcedencia, mientras que en un 60% se declaró infundada, último supuesto donde incluso no se aplicaron los mencionados criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, por otro lado solo se realizó en realidad una nueva evaluación de lo decidido en sede ordinaria.

Hasta ahora hemos advertido que se han aplicado indebidamente los criterios formales para la causa del proceso de amparo hacia resoluciones judiciales, sin embargo, encontramos similitud con los criterios de fondo, pues de la tabla y gráfico N° 07 tenemos que no se invocaron ni aplicaron los criterios de fundabilidad que fueron establecidos gracias al Corte constitucional en la Sentencia N° 3179-2004-AA/TC y desarrollados también en N° 323 - 2013-PA/TC, es más se evidenció que el juez constitucional, más allá de estudiar si coexistió o no una infracción de los derechos constitucionales

invocados, se realizó una nueva evaluación de lo discutido en la vía ordinaria como si fuese una instancia más de la misma, vulnerando más flagrantemente el principio de cosa juzgada en su revelación de cosa juzgada material, por cuanto se discute nuevamente lo que en su momento agotó las instancias pre establecidas por el ordenamiento procesal.

Habiendo evaluado el resultado de los procesos conforme a las sentencias de primera instancia, advertimos que, lo resuelto por los A quo, son confirmadas por el A quem, en un 49%, mientras que un 11% de las mismas son revocadas, lo cual expresa la tendencia de mantener las decisiones que fueron expedidas por los A quo, entre ellas las improcedencias y las desestimaciones.

Cabe precisar que, del porcentaje de revocatorias, el 8% corresponde a sentencias que el superior declaró fundada y, el 3% restante corresponde con sentencias que revocándolas declararon infundados el proceso constitucional, lo cual nos indica que un mínimo porcentaje de procesos de amparo ameritaban iniciar dicho proceso constitucional y, en una abrumadora mayoría se inició el mismo innecesariamente.

Finalmente, en cuanto a la evaluación de la tendencia a mantener las decisiones de improcedencia, observamos en la tabla y gráfico N° 09 que un 60% de las decisiones que son recurridas a Sala llegan hasta el tribunal

constitucional, de las cuales todas las resueltas a la fecha del presente trabajo desestimaron in limine el recurso, reafirmando que, se inició un proceso constitucionalmente innecesariamente, cuestionando una resolución que había conseguido la calidad de cosa juzgada sin respetarse los criterios establecidos para dichos efectos, criterios que precisamente buscan restringir el uso indiscriminado del amparo para preservar la seguridad jurídica.

Otro de los factores analizados para medir la violación del principio de seguridad jurídica, es el tiempo que ha mediado entre el admisorio y la resolución final, siendo así en la tabla N° 12 podemos evidenciar el tiempo por el cual se mantuvo en “suspense”, el carácter inmutable de la disposición que había adquirido calidad de cosa juzgada, así tenemos que, un 47% el proceso duró de 1 a 3 años, en un 28% se extendió por más de tres años, mientras que en un 15 % se tuvo una cota duración de seis meses a un año y, en un reducido 10% la mínima duración de 0 a seis meses.

Complementando los datos antes expuestos y con mayor precisión para el objeto de estudio, tenemos que según la tabla N° 13, en los procesos de amparo que fueran declarados improcedentes, en un 38% duraron de uno a tres años, asimismo en un llamativo 34% el proceso se extendió por más de tres años, hecho grave si entendemos que, desde un inicio (admisorio) debió desestimarse la demanda, más aún si tomamos en cuenta que, para que dicha decisión adquiriera firmeza ha debido transcurrir un tiempo similar dada la

extensión de los procesos ordinarios, hecho que supone postergar aún más la obtención de la definitiva por medio del órgano jurisdiccional. Asimismo, tenemos que un 14% respectivamente los procesos duraron de 0 a 6 meses y de 6 meses a 12 meses, es decir en una ostensible minoría los procesos son de corta duración.

Finalmente, en cuanto a los amparos declarados infundados, que también suponen la admisión innecesaria de los mismos, tenemos que según la tabla N° 14 en un 46% duraron de 1 a 3 años, en un 27% duraron de seis meses a un año, en un 18% más de 3 años y en un escaso 9% de 0 a seis meses.

CONCLUSIONES

Conclusión general

- Se ha determinado que en Chiclayo durante los años 2014 a 2017 la indebida aplicación de los criterios para resolver los procesos de Amparo contra Resoluciones Judiciales ha vulnerado el referido principio de seguridad Jurídica

Conclusiones específicas

- Se ha analizado el perfeccionamiento del proceso de Amparo en el Perú, desde sus antecedentes nacionales hasta su actual regulación, determinando que se trata de una garantía excepcional procedente ante la transgresión o inminente peligro de un derecho constitucional.
- Se ha establecido los criterios legales y jurisprudenciales para la admisión de demandas de Amparo contra Resoluciones Judiciales en el Perú, se tienen los requisitos formales expuestos en los artículos 4 y 5° del Código Procesal Constitucional, así como requisitos de fondo señalados por el Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 3179-2004-AA/TC y desarrollados también en N° 323 -2013-PA/TC, como son el análisis de razonabilidad, coherencia y suficiencia.
- Hemos concido las causas que generan la inseguridad jurídica en el Perú, en la medida que se ha determinado las distintas manifestaciones de dicho principio, como es el de Cosa Juzgada Material, teniendo ello

efectos negativos en la familiaridad del ciudadano en el sistema de justicia, así como la garantía de las resoluciones judiciales, pues manteniendo indefinidamente un cuestionamiento sobre una cuestión “ya decidida” implica una innecesaria postergación de su ejecución.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda que los magistrados al momento de calificar la demanda procedan a realizar un análisis crítico formal y sólido en el Código Procesal Constitucional y con esto no quedaría en simplemente mencionarlos, pues se evitaría con ello transitar por todo un proceso judicial, para posteriormente advertir que la admisión fue deficiente.

- Se recomienda también que los jueces en sentencia analicen los criterios establecidos en relación al Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 3179-2004-AA/TC y desarrollados también con la sentencia N° 323 - 2013-PA/TC, y no reevaluar lo ya decidido en el proceso previo en base a fundamentos que le corresponden solo a la justicia ordinaria.

BIBLIOGRAFÍA

- ABAD YUPANQUI, S. (Abril de 1996). El proceso constitucional de amparo en el Perú: un análisis desde la teoría general del proceso. *Boletín Mexicano de Derecho*, 15-66.
- ABAD YUPANQUI, S. (2004). *El Proceso Constitucional de Amparo* (Primera Edición ed.). Lima, Perú: Gaceta Jurídica.
- ABAD YUPANQUI, S. (2008). *El proceso constitucional de amparo. Su aporte a la tutela de los derechos fundamentales* (Segunda Edición ed.). Lima: Gaceta Jurídica.
- ABAD YUPANQUI, S. (2015). EL PROCESO DE AMPARO EN EL PERÚ: ANTECEDENTES, DESARROLLO NORMATIVO Y REGULACIÓN VIGENTE. *Themis*, 67, 293-307.
- ABAD, Y. S. (1994). *El Amparo contra leyes* (Primera Edición ed.). Lima: Comisión Andina de Juristas.
- AMAG. (2016). *Material Auto Instructivo Curso “Derecho Procesal Constitucional”*. Lima, Perú: AMAG.
- AMAG. (2007). *Código Procesal Penal Manuales Operativos- Normas para la Implementación* (Primera Edición ed.). Lima, Perú: AMAG.
- AVILA, H. (2012). *Teoría de la seguridad jurídica* (Segunda Edición ed.). Madrid: Marcial Pons.
- AVILA, H. (2013). Indicadores de Seguridad Jurídica. *I Congreso Bienal sobre Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica*, 3-21.
- BERNALES BALLESTEROS, E. (1996). *La constitucion de 1993: Analisis Comparado*. (Segunda Edición ed.). Lima: Rodhas.
- BREWER CARÍAS, A. (2016). *El Proceso de Amparo en el derecho constitucional comparado de américa latina* (Primera Edición ed.). Lima: Gaceta Jurídica.

- CABEZAS MEJIA E., ANDRADE NARANJO D., TORRES SANTAMARIA J., (2018) *INTRODUCCION A LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA*, ECUADOR: ESPE.
- CACERES J., R. E., & IPARRAGUIRRE N., R. (2017). *CÓDIGO PROCESAL PENAL COMENTADO* (SEGUNDA EDICIÓN ed.). LIMA: JURISTA EDITORES.
- CAIRO ROLDAN, O. (2003). El Amparo contra leyes y demanda de inconstitucionalidad. En *Derecho Procesal Constitucional - Materiales de Enseñanza*. Lima: Librería y Ediciones Jurídicas.
- CARRION LUGO, J. (2000). *Tratado de Derecho Procesal Civil* (Primera Edición ed., Vol. I). Lima: GRIJLEY.
- CASTILLO CORDOVA, (2009) *ALGUNAS CUESTIONES EN TORNO AL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES*, Universidad de Piura, recuperado de: https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2077/Algunas_cuestiones_torno_amparo_contra_resoluciones_judiciales.pdf?sequence=1
- CAVANI, R. (diciembre de 2017). ¿Qué es una resolución judicial? Un breve estudio analítico para el derecho procesal civil peruano. *IUS ET VERITAS*(55), 112-127.
- COLAUTTI, C. E. (1995). *Derechos Humanos*. Buenos Aires, Argentina: Universidad.
- COUTURE, E. (1958). *Fundamentos del Derecho Procesal Civil* (Tercera Edición ed.). Buenos Aires: Roque Depalma.
- DAVIS ECHANDÍA, H. (1966). *Nociones Generales de Derecho Procesal Civil*. Madrid: Aguilar S.A.
- DIAZ ZEGARRA, W. (2004). *Código Procesal Constitucional* (Primera Edición ed.). Lima: Legales Editores.
- Diaz Zegarra, W. (2004). *Codigo Procesal Constitucional* . Lima: Ediciones Legales.
- EGUIGUREN, P. F. (2002). *Estudios Constitucionales* (Primera ed.). Lima: ARA.

- EGUIGUREN, P. F. (2007). El amparo como proceso residual en el Código en el Código Procesal Constitucional peruano. Una opción riesgosa pero indispensable. *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*.
- ETO CRUZ, G., & PALOMINO MANCHEGO, J. F. (2005). En tres análisis: El Primer Código Procesal Constitucional del mundo. Su iter legislativo y sus principios procesales. En *El derecho procesal constitucional peruano* (Primera edición ed., págs. 283-309). Lima: GRIJLEY.
- ETO, C. G. (2013). El proceso constitucional de amparo en la Constitución de 1993. (PUCP, Ed.) *Pensamiento Constitucional*, 145-174.
- FERNANDEZ RODRIGUEZ, J. J. (2007). *La justicia constitucional europea ante el siglo XXI* (Segunda Edición ed.). Madrid, España: Tecnos.
- FERRERO, R. R. (1984). *Ciencia Política, Teoría del Estado y Derecho Constitucional* (Septima ed.). Lima, PERU: Ausonia Talleres Gráficos.
- GALLEGO MARIN, C. A. (2012). El concepto de seguridad jurídica en el Estado Social. *Jurídicas*, 9(2), 70-90.
- GALLEGOS PAZ D. J., (2005) *La Acción de Amparo contra resoluciones judiciales: Su desnaturalización jurídica en la Práctica Judicial del distrito Judicial de Puno*, Tesis presentada para la obtención del grado académico de magíster en derecho con mención en Derecho Público. Universidad Nacional del Altiplano.
- García. (1991). *El amparo contra Resoluciones Judiciales . Nuevas perspectivas*. Lima: Comision Andina de Juristas.
- GARCÍA BELAUNDE, D. (1980). El hábeas Corpus en la nueva Constitución. *Revista Jurídica del Perú*.
- JIMENEZ CONDE, F. (1990). Problemas actuales del Recurso de Amparo. *Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario*, España.

- LANDA ARROYO, C. (2012). El derecho al debido proceso en la jurisprudencia: Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Tribunal Constitucional del Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos (Volumen I). Lima, Fondo Editorial de la Academia de la Magistratura.
- LANDONI SOSA, A. (diciembre de 2003). La cosa juzgada: valor absoluto o relativo. *Derecho PUC*(56), 297-360.
- LEON VASQUEZ, J. (Enero de 2007). El control constitucional de las resoluciones judiciales. Notas a la sentencia 3197-2004-AA/TC, de 2 de octubre de 2006. *Diálogo con la Jurisprudencia*, 39-50.
- Leon, Q. (1989). *El Modelo de la Constitución de 1979*. Lima: Instituto Constitución y Sociedad, Fundación Friedrich Naumann.
- LINARES, Q. S. (1956). *Treatado de la ciencia del constitucional argentino y comparado* (Primera ed., Vol. V). Buenos Aires: ALFA.
- LOPEZ FLOREZ, B. J. (2013). *Amparo contra resoluciones judiciales- como llevar un caso ordinario a un proceso de amparo* (Primera Edición ed.). Lima: Gaceta Jurídica.
- MERINO DE LA TORRE L & ANGELUDIS TOMASSINI C., ¿En qué casos procede el proceso de amparo contra resoluciones judiciales?, recuperado de <https://es.scribd.com/document/384771262/APA-Guia-02-6ED-Citas-Referencias>.
- MONTERO AROCA, J. (2009). *Derecho jurisdiccional II proceso civil*. (Décimo Octava Edición ed., Vol. II). Valencia: Tirant Lo Blanch.
- MORAS MOM, J. R. (2004). *Manual de Derecho Procesal Penal* (Sexta Edición ed.). Buenos aires: Abeledo-Perrot.
- ORE GUARDIA, A. (2011). *Manual de Derecho Procesal Penal* (Primera Edición ed., Vol. I). Lima, Perú: Editorial Reforma.
- ORTECHO, V. V. (2002). *Jurisdicción y procesos consitucionales* (Sexta edición ed.). Lima: Rhodas.

- PEREZ LUÑO, A. E. (2000). LA SEGURIDAD JURÍDICA: UNA GARANTÍA DEL DERECHO Y LA JUSTICIA. *BOLETIN DE LA FACULTAD DE DERECHO*, 15, 25-38.
- PRIORI POSADA, G. (2019) El proceso y la Tutela de Los Derechos, Perú, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- QUIROGA LEON, A. (1989). El modelo de la constitución de 1979. *La Constitución diez años después*.
- RUBIO CORREA, M. (1999). *Estudio de la Constitución Política de 1993* (Primera Edición ed., Vol. V). Lima: Fondo Editorial de la PUCP.
- SAENZ DAVALOS, L. R. (2003). Los Procesos Constitucionales como mecanismos de protección frente a resoluciones judiciales arbitrarias. *Derecho Procesal Constitucional*.
- SAGUÉS, N. P. (1988). *Acción de Amparo* (Segunda Edición ed.). Buenos Aires, Perú: Astrea.
- SAGUES, N. P. (1997). Jurisdicción constitucional y seguridad jurídica. *Pensamiento Constitucional*(4), 217-232.
- TICONA POSTIGO, V. (1998). *El debido Proceso y la Demanda Civil* (Vol. II). Lima: Rhodas.
- VALLINES GARCÍA, E. (2016). Preclusión, Cosa Juzgada y Seguridad Jurídica: A vueltas con el artículo 400 de la ley de enjuiciamiento civil. *Derecho, Justicia, Universidad. Liber amicorum de Andrés de la Oliva Santos*, 3171-3195.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DE ORIGINALIDAD

Yo, Carlos Alfonso Silva Muñoz, docente, asesor de tesis, revisor del trabajo de investigación, cuyo autor es la estudiante:

María Celia Primo Vásquez, identificada con DNI 17639407

Titulado "LA INDEBIDA APLICACIÓN JUDICIAL DE LOS CRITERIOS PARA RESOLVER LOS PROCESOS DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES Y LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA EN EL DISTRITO DE CHICLAYO EN LOS AÑOS 2014 A 2017", declaro que la evaluación realizada por el Programa Informático, ha arrojado un porcentaje de similitud del 11% verificable en el Resumen de Reporte automatizado de similitudes que se acompaña.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas dentro del porcentaje de similitud permitido, no constituyen plagio y que el documento cumple con la integridad científica y con las normas para el uso de citas y referencias establecidas en los protocolos respectivos.

Se cumple con adjuntar el Recibo Digital a efectos de la trazabilidad respectiva del proceso.

Lambayeque, 14 de abril de 2023.


 DR. CARLOS ALFONSO SILVA MUÑOZ

DNI 16406056

ASESOR

Se adjunta:

- * Resumen del Reporte (Con porcentaje y parámetros de configuración)
- * Recibo digital



Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega:	Tesis - María Celia Primo Vásquez - Para Turniting Tesis - Ma...
Título del ejercicio:	Trabajos
Título de la entrega:	TESIS - María Celia Primo Vásquez - PARA TURNITING
Nombre del archivo:	TESIS_-_Mar_a_Celia_Primo_V_squez_-_PARA_TURNITING_1.pdf
Tamaño del archivo:	1.05M
Total páginas:	150
Total de palabras:	26,254
Total de caracteres:	139,700
Fecha de entrega:	14-abr.-2023 08:33a. m. (UTC-0500)
Identificador de la entre...	2064397388



Dr. Carlos Alfonso Silva Muñoz
ASESOR

TESIS - María Celia Primo Vásquez - PARA TURNITING

INFORME DE ORIGINALIDAD

11%

INDICE DE SIMILITUD

10%

FUENTES DE INTERNET

4%

PUBLICACIONES

3%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

repositorio.unap.edu.pe

Fuente de Internet

2%

2

idoc.pub

Fuente de Internet

1%

3

id.scribd.com

Fuente de Internet

1%

4

qdoc.tips

Fuente de Internet

1%

5

Submitted to Pontificia Universidad Catolica del Peru

Trabajo del estudiante

1%

6

vbook.pub

Fuente de Internet

1%

7

hdl.handle.net

Fuente de Internet

1%

8

Mendoza Salazar César Augusto. "Problemas de la justicia constitucional en México y sus alternativas de solución", TESIUNAM, 2015

Publicación

<1%



Dr. Carlos Alfonso Silva Muñoz

ASESOR